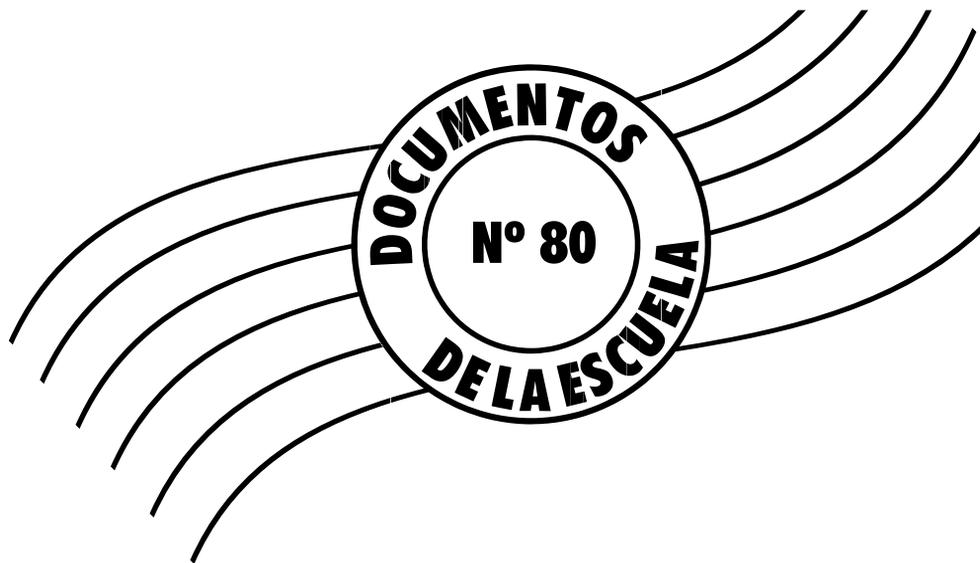




**Daniel Hawkins**

**Los gobiernos "alternativos" en América Latina  
y el movimiento sindical**





**Daniel Hawkins**

**Los gobiernos "alternativos" en América Latina  
y el movimiento sindical**



Calle 51 N° 55-78  
Tel: 513 31 00 - Fax: 512 23 30  
E-mail: [fondoeditorial@ens.org.co](mailto:fondoeditorial@ens.org.co)  
[www.ens.org.co](http://www.ens.org.co)  
Apartado Aéreo 12175  
Medellín, Colombia  
2010

ISSN: 1794-9270

Daniel Hawkins, 2010

Para esta publicación la Escuela Nacional Sindical, recibe el apoyo de



Este material se puede reproducir total o parcialmente  
por cualquier medio, previo permiso de las organizaciones

## CONTENIDO

Introducción.....	7
Venezuela: ¿el gobierno más izquierdista de la región? .....	17
Bolivia: el surgimiento de un indigenismo del siglo XXI .....	33
Ecuador: el neoliberalismo, las luchas políticas y el surgimiento de Rafael Correa .....	53
Uruguay: la larga tradición izquierdista partidaria conquista el poder estatal.....	67
Brasil: el ascenso de Lula y el Partido dos Trabalhadores .....	85
Conclusiones .....	103
Bibliografía .....	109



*El autor agradece a  
Diana Patricia Cárdenas Quintero  
de la Escuela Nacional Sindical (ENS)  
por la labor realizada en el  
informe preliminar para este trabajo*



## INTRODUCCIÓN

*Es sólo en libros mediocres  
que la gente está dividida en dos campos  
que nada tienen nada qué ver  
el uno con el otro.  
En la vida real todo se mezcla.*

Boris Pasternak,  
*Doctor Zhivago*

En América Latina, y sobre todo en América del Sur, la última década estuvo marcada por un “giro” político, con la elección de gobiernos nacionales surgidos de partidos no tradicionales y con rasgos “progresistas”, y de ideas contrarias a los partidos derechistas-neoliberales que dominaron casi toda la región en los años ochenta y noventa. Este giro ha impulsado grandes debates académicos y políticos que han señalado la posibilidad de que en la región se esté consolidando un proceso “pos-neoliberal” (Grimson, 2008), después del fracaso del experimento neoliberal en los últimos veinte años. Este cambio con respecto a los gobiernos anteriores, da pie para pensar lo que algunos llaman un “giro

izquierdista” (Alcántara, 2008; Arocena, 2005; Buono y Lara, 2006; Paramio, 2006), que modificó significativamente la relación de fuerzas socio-políticas en el continente. Hace apenas poco más de una década, hubo alrededor de 60 millones de latinos con gobiernos de izquierda; hoy ese número asciende a más de 260 millones (Stolowicz, 2008: 11). Sin embargo, la trayectoria de gobiernos con rasgos de izquierda en el poder, no significa que no haya una gran variedad de “izquierdismos” en las formas de gobierno. Por el contrario, la diversidad de las posiciones ideológicas histórico-políticas, las relaciones con los diversos movimientos y organizaciones sociales, y las políticas públicas<sup>1</sup> prometidas e implementadas en cada uno de estos gobiernos, debe llevar a un debate más profundo, para intentar descifrar las características, el contenido político y sus vínculos con intereses de grupos sociales, para poder evaluar el grado de “progresismo” o “izquierdismo” de cada uno de estos gobiernos y de sus proyectos.

Más allá del uso simplista, teórico y políticamente confuso del concepto “neoliberal”,<sup>2</sup> para avalar, o por el contrario contradecir, la trayectoria político-económica de los países y sus gobiernos, como suele suceder en la cotidianidad política y académica (véase: Fridell, 2006; Gwynne, 2000; Harmes, 2006; Harris, 2003), una mirada amplia y contextual, pone en evidencia la gran variedad y complejidad de todos los procesos socio-políticos y económicos de los últimos años en la región. Incluso, si sólo se enfoca el sur de América Latina y los gobiernos no tradicionales que rechazan términos como “derecha”, “conservador” e incluso, “liberal”, para definirse, se puede ver la pluralidad de adjetivos y conceptos que se han utilizado para delimitar la naturaleza de estos liderazgos políticos.

Numerosos intelectuales han propuesto dividir los gobiernos “alternativos” de esta esfera del mundo, poniendo a un lado al bloque de regímenes “populistas” como Venezuela, Bolivia y Ecuador (Bur-

- 
1. Se define políticas públicas como el “Estado en acción” de acuerdo con Puello-Socarrás (2007: 202).
  2. Para una indagación filosófica y política del concepto neoliberalismo y su pertinencia o no, tanto para intelectuales como para algunos proyectos políticos, véase: González (2003) y Puello-Socarrás (2007).

chartd, 2006; Hylton, 2006; Lanzaro, 2008; Panizza, 2008; Paramio 2006) y, al otro lado, los gobiernos con características socialdemócratas, como Chile, Brasil y Uruguay (Lanzaro, 2008; Panizza, 2008). Sin embargo, otros han usado términos más heterogéneos para identificar sus diferencias. Por ejemplo, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2009) ha sido calificado como un gobierno que se subordina “voluntariamente al capital global” (Hylton, 2006: 69); o, “una versión tropical del blairismo” o de “social-liberalismo” (citado en Sader, 2009: 29); e incluso, se muestra como una “hegemonía liberal” el camino seguido por el gobierno de Cardoso (Sallum, 2008). El gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2009), por el contrario, ha sido denominado “populista” (Burchardt, 2006; De la Torre, 2005; Laclau, 2006; Lanzaro, 2008; Paramio, 2006; Roberts, 2003); “neopopulista” (Saldarriaga 2008; Weyland, 2003), y autodenominado, al igual que los de Bolivia y Ecuador, “gobierno socialista del siglo XXI” (Lander, 2008; Stolowicz, 2008).<sup>3</sup> ¿Hasta qué punto entonces, es visible una correlación de proyectos y tendencias en esta reciente ola democrática hacia la izquierda? Y desde luego, ¿cuáles son las divergencias, contradicciones y anomalías en sus procesos de gobierno?

### Los pasos históricos de la política regional

Se pueden identificar dos crisis históricas que han influido en esta reciente transformación. La primera, fueron las dictaduras militares que devoraron la región, casi totalmente, entre los años sesenta y los noventa.<sup>4</sup> Y la segunda, la destrucción causada por el giro neoliberal que

3. Para una crítica, véase, Petras (2009).

4. La magnitud de este proceso regional se evidencia en el hecho de que sólo tres países (México, Colombia y Venezuela) se salvaron de regímenes dictatoriales en este período. Sin embargo, su estabilidad como democracias formales, no significa que hubieran sido regímenes democráticos abiertos. Por el contrario, la corrupción del modelo corporativista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es ampliamente reconocida, al igual que su forma presidencialista con rasgos autoritarios. Mientras que el régimen bipartidista de Colombia, durante el Frente Nacional (1958-1974), fue democrático sólo en un sentido muy estricto de la palabra. A su vez, Venezuela, bajo el régimen político del Punto Fijo (1958-

empezó en los setenta, en el caso de Chile, y en los ochenta y noventa, en los demás países. El resultado de esta confluencia fue que las instituciones estatales perdieron su papel como canales para las demandas sociales, y se dio así una separación estructural entre el Estado y los movimientos sociales (Laclau, 2006: 59). La primera crisis llevó a una ruptura en el proceso de integración institucional del pueblo (o colectividad popular), que se había consagrando durante el período del desarrollo nacional (1930-1960), la cual combinó un modelo político nacionalista-populista, con políticas económicas de sustitución de importaciones (O'Campo, 2007; Palacios, 2001; Portes, 2003 y 2004). La segunda crisis reconfiguró la forma en que las demandas sociales se integraban al Estado, promoviendo el acceso a las demandas individuales y cerrando las posibilidades que tuvieron las reivindicaciones colectivas (Laclau, 2006). Las contradicciones de ambas crisis generaron una fuerte autonomía burocrática estatal (O'Donnell, 1988; Borón, 1979), que impulsó su desagregación de la clase capitalista nacional, abriéndole a ésta la oportunidad de vincularse con los movimientos populares en contra del Estado (pero con intereses muy ajenos por supuesto); pero por otro lado, también llevó a una creciente descomposición social y de clases. Combinadas ambas demostraron el fracaso que sufre el desarrollo capitalista sino se complementan Estado y sociedad, y política y economía. De ahí nació el fenómeno actual de gobiernos alternativos, como procesos impulsados por las reivindicaciones sociales y populares que buscan que las instituciones atiendan sus demandas colectivas, después de décadas de exclusión y represión.

Está claro que cada expresión del proceso de apertura estatal (en lugar de apertura económica) se manifestó con rasgos muy diferentes y sobredeterminados por el grado y el tiempo de exclusión y represión que sufrieron los movimientos populares en cada país, al igual que por

---

1998), expandió la democracia, y el país fue testigo de un proceso paulatino de inclusión social, que envidiaron sus vecinos, aunque estuviese basado, más en un modelo rentista y de distribución de ingresos, que en una forma de democracia institucional de inclusión. Para un análisis más detallado de los formalismos democráticos de cada uno de estos países, véase: Portes (2004: 85-94); Gómez (2008); Hellinger (2003); Roberts (2003); Sylvia y Danopoulos (2003).

el grado de devastación económica del experimento neoliberal. Pero al lado de las obvias divergencias en las organizaciones y movimientos involucrados (sea de modo formal como partido, o de modo implícito como apoyo colectivo), en cada gobierno y en sus “acciones”, también existen unas convergencias generales que los asocian como gobiernos izquierdistas, progresistas y/o alternativos. Pero, haciendo un alto, aparece un problema semántico que se debería resolver, antes de seguir con la evaluación. Al proponer el adjetivo izquierda para definir un gobierno o un partido político con cuerpo social (aunque ello sea una práctica tan cotidiana en la vida política y pública), se requiere resolver una inquietud: ¿qué quiere decir izquierda?

### **Izquierda: un análisis histórico**

El término izquierda en sus inicios se asoció con la Revolución Francesa de 1789, cuando las voces más radicales de la Asamblea Nacional se sentaron al lado izquierdo de la presidencia (Boersner, 2005: 100). Desde entonces, en Europa, se le dio el nombre de izquierda a una alianza integrada por una clase que decidió declararse como la “nación” en contra de la clase dominante (Hobsbawm, 1996: 45). El término, desde luego, se fue moldeando hasta que significó tener una posición política o ideológica más radical que la del *estatus quo*; o, luego de la Revolución Rusa, de 1917, tener una posición anti-capitalista y promover y acompañar luchas políticas y sociales que tuvieran, como fin, la destrucción del sistema capitalista como modo de producción dominante. La asociación de clase y el enfrentamiento al capitalismo, son determinantes, ya que ser de izquierda significa, luchar por la colectividad: libertad, fraternidad e igualdad para todas y todos; es decir, luchar por la emancipación como logro universal. Esto desde luego, significa que ser de izquierda es incompatible con pertenecer a una coalición de grupos de interés minoritario.

Como proyecto político, la izquierda tiene varias confluencias que Boersner (2005: 100-103) nos ayuda a resumir.

- Una identificación histórica con los intereses de las clases populares, y una convicción de que la igualdad social es un objetivo primordial; y sólo se puede conseguir tras la lucha y la presión popular.

- Una aceptación dialéctica de los avances del sistema de democracia liberal burguesa, en términos de sus valores de libertad e igualdad política; los cuales deben ser protegidos aún durante el largo camino hacia el socialismo y el comunismo.
- La propuesta de profundizar la democracia más allá de su formalismo político, hacia una democracia que combina la igualdad política con la igualdad económica. Esto lleva implícito una presión colectiva para sustituir el mercado capitalista por un modo de producción socialista basado en la generación y distribución igualitaria de la riqueza.
- El internacionalismo, la solidaridad y la hermandad entre pueblos de distintas naciones. Esto implica una posición no guerrerista o no armamentista y la tolerancia y solidaridad de pueblos de distintas razas, etnias y culturas.
- Al lado del internacionalismo queda intacta la necesidad de apoyar movimientos nacionales de liberación en casos de dominación colonial y/o imperial; siempre poniendo el foco de la lucha en los factores de opresión, en particular, y no una lucha contra los pueblos de otras naciones.
- La izquierda como movimiento "universal", tiene que oponerse, siempre, a los movimientos fascistas, populistas, autoritarios o bonapartistas. Esto tiene que ver con la autodeterminación que las masas populares tienen frente los mesianismos de caudillistas carismáticos.

Estos seis puntos que caracterizan a la izquierda como proyecto político y como ideología universal, plantean algunas incertidumbres con respeto a las acciones de los gobiernos supuestamente de izquierda en la región. Primero, con respeto al punto tres –la sustitución o modificación del mercado capitalista–, en los programas y acciones gubernamentales de los siete países (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile) que no se declaran conservadores ni liberales, y que gobiernan en este momento: ¿sí se han desarrollado políticas económicas no capitalistas o, por lo menos, sí se ha intentado modificar profundamente la forma de reproducirse este modo de producción?

Segundo, el cuarto punto, que habla del internacionalismo y solidaridad entre pueblos, también implica la necesidad de reflexionar sobre

las actuaciones de algunos de estos gobiernos: ¿qué tan internaciona- lista y solidaria es la acción de enviar y mantener soldados naciona- les en países soberanos como Haití, como lo hicieron los gobiernos de Brasil (como líder de la fuerza ocupacional), Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador, junto con los gobiernos de Argentina, España, Francia, Cana- dá y Estados Unidos, todos agrupados en una misión de las Naciones Unidas, llamada Minustah (que empezó el 1 de junio de 2004)? Estos cuestionamientos serán muy propicios para la evaluación de los cinco gobiernos escogidos para este trabajo (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Brasil). Sin embargo, es necesario retomar el concepto de izquierda, pero, esta vez, analizando algunas de sus tipologías.

Lozano (2005), categoriza la izquierda política de algunos gobier- nos o movimientos políticos latinoamericanos, en tres tipos: la izquier- da fundamentalista, la izquierda populista y la izquierda reformadora. La primera mantiene una posición de choque frontal. No acepta la de- mocracia como eje central de la civilización moderna, ni como necesi- dad de convivencia política, sino como una forma de involucrar a los sectores populares en su proyecto político y económico de nación. Aquí, la globalización está contemplada como el proyecto imperialista de la burguesía transnacional. En este grupo, el autor ubica a los movimien- tos anti-imperialistas y anti-capitalistas como los zapatistas de México, y al Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, en El Salvador.

La segunda, la izquierda populista, es más moderada, ya que acepta la globalización como proceso inevitable, mientras asume el sistema de la democracia liberal-burguesa como un requisito político para gober- nar. Sin embargo, la institucionalidad de la democracia no se promueve en la práctica política, pero se mantiene como un formalismo, frente de las necesidades de un liderazgo paternalista que, generalmente, restrin- ge la pluralidad y el respeto a las minorías, al igual que limita el espacio para la crítica pública y para la separación de poderes. Esta forma de izquierda, mantiene una correlación de fuerzas sociales heterogéneas y se centra en un proyecto de desarrollo nacional, fortaleciendo el poder del régimen a través del uso mediático de la política. Aquí, Lozano (2005) ubica a Venezuela, bajo Chávez; Bolivia, con Morales; e incluso a Ecuador, durante el breve período presidencial de Lucio Gutiérrez.

La tercera y última, la izquierda reformadora, se entiende como

un proceso político fundado en la democracia liberal y la institucionalidad, que acepta los retos de la globalización y busca generar mayor inclusión política y económica de los sectores populares de la sociedad, basadas en el consenso social. Esta izquierda evita el choque frontal de clases, prefiriendo implementar reformas políticas a la trayectoria neoliberal, con un enfoque que da prioridad a los grupos más pobres y vulnerables. Lozano (2005) ubica en esta categoría a los gobiernos de Chile, con Bachelet; Argentina, con Kirchner; Uruguay, con Tabaré Vázquez; y Panamá, con Torrijos.

Estos modelos conceptuales, sin embargo, no se deben confundir con un análisis específico y contextual, pues lo que buscan es moldear unos “tipos ideales” de estilo weberiano: son “experimentos de pensamiento” más que realidades socio-políticas. Se puede decir (para configurar la base de exploración y evaluación de los programas concretos de los cinco gobiernos alternativos con tendencias de izquierda), que a pesar de sus marcadas diferencias, lo que tienen en común es la voluntad de fortalecer un Estado golpeado por el ataque neoliberal, y que su tarea es mejorar la situación social de los sectores populares de la sociedad nacional, de manera que la dominación de la doctrina monetaria y las contra-reformas del neoliberalismo, sean superadas (Ramírez, 2006).

La tarea entonces, no es comparar estos gobiernos alternativos con aquellos que hubo en la región en el siglo pasado, pues ello implicaría minimizar las diferencias contextuales y las muy distintas relaciones internacionales y globales de ayer y de hoy. Aunque algunos gobiernos de América Latina<sup>5</sup> en el siglo XX implementaron unas políticas públicas más radicales que cualquiera de los actuales gobiernos (en lo que se refiere a reformas agrarias, nacionalizaciones y expropiaciones de empresas extranjeras), también sufrieron la pérdida de su poder; y los procesos que habían comenzado, quedaron, lastimosamente, sofocados frente a la apertura del autoritarismo, y luego del neoliberalismo. Lo que puede verse en los gobiernos alternativos de hoy, es que han de-

---

5. Aquí nos referirnos particularmente a los casos de la presidencia de Arbenz, en Guatemala (1952-1954); Goulart, en Brasil (1962-1964); y Allende, en Chile (1970-1973).

mostrado su poder electoral (algunas veces en repetidas ocasiones), y han dado la esperanza de que los cambios, aunque más paulatinos que los del pasado, tal vez serán más estructurados y estarán más fortalecidos para enfrentar el porvenir.

Con base en esto, la elección de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Brasil como casos emblemáticos de giro a la izquierda, no se ha realizado tanto por su coherencia, como por las trayectorias, avances, límites y contradicciones que han mostrado en tiempos recientes. De otro lado, como el presente trabajo se dirige hacia el movimiento sindical latinoamericano y, específicamente al sindicalismo colombiano, se escogieron, como casos de estudio, los gobiernos de Suramérica que tienen mayor cercanía con los movimientos sindicales y de trabajadores. Por razones afines, como también por limitaciones de tiempo y espacio, los gobiernos de Bachelet, en Chile, y Lugo, en Paraguay, no formarán parte del presente trabajo.

La omisión del caso chileno puede sonar extraña, teniendo en cuenta que este país fue el epicentro de dos experimentos: el primero, del proyecto socialista democrático criollo, bajo el breve mandato de Salvador Allende (1970-1973), y segundo, del neoliberalismo de corte autoritario y violento, bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La excepcionalidad de Chile, en ambos casos, podría validar una exploración de la trayectoria democrática del gobierno de Michel Bachelet y su homólogo anterior Ricardo Lagos, pero como muchos académicos han argumentado, precisamente sobre los grandes “traumas” que produjo el golpe del Estado de septiembre de 1973, y las casi dos décadas de represión social que lo siguieron, la transición hacia la democracia, ha sido llevada con un enfoque altamente consensual con el bloque derechista del país (Boron, 2005; Lanzaro, 2008; Munck, 2003; Riesco, 2007; Touraine, 2006).

Esta inclinación por el consenso, y el buen ánimo con los sectores dominantes de la economía nacional y transnacional, fue bastante clara durante el gobierno de Ricardo Lagos, en el cual, su partido de Concertación (entre el Partido Socialista de Chile, PS, y la Democracia Cristiana, DC) tuvo la mayoría en el parlamento, y siguió así durante el gobierno de Bachelet, que no contó con la mayoría (Lanzaro, 2008: 53). El modelo chileno ha sido aclamado por varias fuentes conservadoras,

por su reiterada promoción de una política macroeconómica ortodoxa, combinada con unos enfoques dirigidos a sectores vulnerables de la sociedad (véase: Naím, 2002; Reid, 2007). Y ante todo, la ascensión y consolidación de la alianza de concertación en el país, no surgió al lado de movilizaciones populares o de alianzas con organizaciones sociales, sino que fue un proceso de negociación entre las élites políticas, y por eso existe una gran separación entre el gobierno y las organizaciones sociales de izquierda (Lanzaro, 2008). Con respecto a la relación entre el movimiento sindical y el gobierno chileno, no hay mucha cercanía, precisamente por la falta de voluntad política para revocar y/o cambiar las más profundas reformas laborales neoliberales de la región, que tuvieron lugar bajo la dictadura (Patroni, 2008: 110).

Con respecto a la omisión del caso paraguayo, ésta obedece más a su gran inmadurez como proyecto político (ilustrado por el hecho de que el presidente Fernando Lugo, del partido Democrático-Cristiano, en alianza con la Alianza Patriótica por el Cambio, ha estado sólo un año en el poder, al momento de escribir este texto, tras su éxito en las elecciones del 15 de agosto de 2008). Ubicar el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), del Partido Colorado, como gobierno de corte izquierdista, sería una tarea bastante complicada. Primero, porque su partido no representa ningún cambio político, ya que es el más longevo en cuanto a permanencia en el poder en Occidente; y segundo, porque Duarte Frutos se asociaba más a un proyecto populista, sutilmente progresista, como el que representaban y representan los casos de los Kirchner, en Argentina. El actual presidente Lugo, muestra la posibilidad de convertir su gobierno progresista en alternativo, pero sólo el tiempo lo dirá.

## VENEZUELA: ¿EL GOBIERNO MÁS IZQUIERDISTA DE LA REGIÓN?

*En este país no hay buenos ni malos gobiernos  
sino buenos y malos precios del petróleo*

Rafael Poleo (*editor venezolano*)<sup>6</sup>

Venezuela, bajo el mandato de Hugo Chávez Frías, no sólo ha sido el gobierno alternativo de la región de mayor duración, sino también el que ha implementado las políticas más avanzadas para contrarrestar las inequidades socio-políticas generadas en la década anterior (marcada por el deterioro socio-económico de los noventa) y promover alternativas políticas y económicas como ningún otro gobierno de la región. Se estima que, antes del triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, había 9 millones de venezolanos malnutridos, la pobreza llegaba al 81%, y la pobreza extrema el 48% (Burchardt, 2006: 203). Terminando los noventa, los salarios industriales y el salario mínimo real,

---

6. *Zeta* N° 1699, Caracas, 2009.

llegaron sólo al 40% del nivel alcanzado en los ochenta (Roberts, 2003: 59). El país vivía una ruina social causada por una década de hiperneoliberalismo: el gasto social como porción del PIB, se redujo del 8% en 1987, al 4,3% en 1994 (Ibíd.), y diez años antes de que Chávez llegara a la presidencia, sectores claves de la economía venezolana habían sido parcialmente privatizados: los puertos, las telecomunicaciones, el petróleo, el acero y las aerolíneas, al igual que el sistema de salud nacional (Ellner, 2003).

Al igual que en otros países de la región, el surgimiento de Chávez como figura política nacional, estuvo muy relacionado con las manifestaciones populares contra las políticas antisociales del neoliberalismo.<sup>7</sup> Incluso, los rechazos de los sectores populares a la implementación de políticas de ajuste estructural del presidente Carlos Andrés Pérez, una vez en el poder en 1989, cambiaron profundamente el escenario político del país. El "caracazo" mostró de manera contundente que el aislamiento de la sociedad de la esfera política era cosa del pasado. La única forma de controlar el caos social, según las elites políticas, era a través de la represión; y la fuerza pública cumplió con su tarea de manera brutal, atacando cientos de civiles con armas de fuego (Sylvia y Danopoulos, 2003). Sin embargo, para algunos oficiales militares –incluyendo a Chávez y sus compañeros más cercanos– la masacre era vergonzosa e indignante, y desde entonces su proyecto político comenzó a tomar fuerza y reconocimiento.

Una vez en la presidencia, Chávez hizo una profunda reorganización del Estado, dándole prioridad a la inclusión de los sectores populares excluidos de las políticas pro-rico del neoliberalismo venezolano. La Constitución de 1999, promovida por el nuevo gobierno, incorporó a las amas de casa y a los y las trabajadoras de la economía informal en el sistema de seguridad social (artículos 86, 87 y 88) (López, 2003: 87); la protección constitucional a la propiedad privada como interés

---

7. Por supuesto, el caso venezolano no fue tan contundente con respecto a la elección de Chávez como presidente en 1998, comparada con los casos de Perú (2000), Argentina (2001), Bolivia (2003 y 2005) y Ecuador (2000 y 2005) en donde las protestas sociales masivas impulsaron directamente la renuncia del gobierno en el poder.

general, fue transformada con la subordinación de estos derechos al bienestar nacional (McCaughan, 2004: 57); la jornada laboral se redujo a 44 horas semanales (35 para el trabajo nocturno); y el Decreto de Ley de diciembre de 2001 (Ley de Tierras) estableció el derecho a un lote de tierra para cualquier ciudadano entre 18 y 25 años; por otro lado, se crearon más impuestos e incluso, se implementó el derecho del Estado a expropiar tierras cuando sus dueños no estuvieran en condiciones de hacerlas producir hasta por lo menos en un 80% de su extensión (Burchardt, 2006; McCaughan, 2004).

El gobierno creó el Fondo Único Social (FUS) en 1999, con el que se organizaría la política social del proyecto bolivariano, basado en el aumento del gasto social y la generación de proyectos enfocados en los sectores populares de la sociedad. Igualmente, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fondespa) y el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), organizarían proyectos alternativos de producción y capacitación. En los primeros cinco años del nuevo milenio, el sector público y el salario mínimo en Venezuela, tuvieron aumentos del 20% anuales (Burchardt, 2006) y sólo en el año 2005, el gobierno transfirió cinco billones de dólares a las Misiones Sociales<sup>8</sup> (Wexell, 2006). Frente al aumento de la inflación que amenazaba los avances “reales” de las políticas distributivas del gobierno, Chávez promovió un programa que asegurara la canasta básica familiar y los bienes necesarios para los hogares, a unos precios razonables para los sectores más pobres; su gobierno financió y construyó una red de supermercados públicos con productos subsidiados por el gobierno, los cuales mejoraron el acceso a los alimentos básicos de las familias pobres, aunque con ello no se ha

---

8. Las Misiones Sociales incorporan diversos programas: la Misión Alimentación, la Misión Robinson (educativa), Barrio Adentro (salud), la Misión Ribas (educativa), la Misión Sucre (educativa), La Misión Vuelvan Caras (empleo), la Misión Zamora (tierra-campesina), la Misión Cultura, la Misión Ciencia, la Misión Identidad (registro de documentos), la Misión Milagro (salud-recuperar la vista), la Misión Árbol (promover la conciencia ecológica socialista), la Misión Negra Hipólita (inclusión de los más marginados), la Misión Guaicaipuro (los pueblos indígenas), la Misión Sonrisa (Salud-odontología), la Misión Madres del Barrio (los más pobres urbanos), la Misión Revolución Energética, y la Misión Villanueva (vivienda), véase: Lander (2008: 54-57).

combatido eficazmente el problema estructural de la escasez de comida y la inflación arrebatadora que ha enfrentado el país.

Como resultado de tales políticas, Venezuela ha sido uno de los pocos países latinoamericanos<sup>9</sup> que mostró tasas positivas de distribución de ingresos en la población asalariada, entre los años 2004 y 2006 y con respecto al período de 1995 a 1997 (OIT, 2008: 24). Para el año 2005, Venezuela tuvo la segunda tasa de inequidad de ingresos –medida por el coeficiente de Gini– más baja de América del Sur: 0,490 frente a la de 0,451 de Uruguay (ECLAC, 2006: 93). Con respecto al manejo del aparato productivo del país, el gobierno de Chávez ha implementado el más profundo proyecto de nacionalización de la industria, que puede apreciarse en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001), en la que se reafirma “la propiedad de la República sobre todos los yacimientos de hidrocarburos como bienes del dominio público, por lo tanto inalienables e imprescriptibles” (Artículo 3), y establece que el Estado tiene que tener más del 50% en las asociaciones de la petrolera Estatal (PDVSA), con petroleras extranjeras, y aumentando la participación estatal de regalías hasta el 30% (artículo 44) (Lander, 2008: 48).

La oposición tan determinada e incluso violenta y antidemocrática a esta ley, ilustra la profundidad del contenido de los cambios paulatinos prometidos por Chávez después de su reelección en el 2000. Luego de la ratificación de esta ley, la élite capitalista venezolana, junto con los gerentes y profesionales del sector petrolero, iniciaron una huelga empresarial de cuatro meses y una huelga en la producción de petróleo de dos meses (Xalma, 2004), las cuales evidenciaron la intención de estrangular el poder político del gobierno a través del ahogo económico a los programas de gasto social. El fracasado golpe de Estado, el 11 de abril de 2002, polarizó al país aún más, y generó una fuerte caída económica nacional que tuvo como resultado, tasas de crecimiento negativas de hasta del 8,9% y del 7,7%, para los años 2002 y 2003 respectivamente (Wexell, 2006).

Frente a la oposición de los capitalistas nacionales, como la de los transnacionales, Chávez intentó generar alternativas institucionales de carácter regional, para fortalecer su régimen contra la intervención

---

9. Junto con Uruguay, Paraguay, México y Brasil.

norteamericana, buscando alternativas al problema de la dependencia financiera a las instituciones multilaterales (sobre todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo) para los créditos; y promovió la creación del Banco del Sur, que estaría integrado por siete países suramericanos;<sup>10</sup> y que se enfocaría en proyectos de infraestructura (*Semana*, 24 de marzo de 2009). Al lado de esta visión regionalista, Chávez se negó a renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) que había actuado como oposición y había sido copromotora del golpe de Estado en el 2002. En mayo de 2007, se inició un proceso de nacionalización en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde el gobierno tomó el control accionario de al menos el 60% de las empresas mixtas (*El Tiempo*, 12 de febrero de 2008). Chávez se había comprometido a nacionalizar todo lo que había sido privatizado. Este anuncio hizo temblar la excompañía estatal de telecomunicaciones (CANTV) y a Electricidad de Caracas (*Semana*, 13 de enero de 2007).

Claramente, Venezuela, en los diez años de gobierno chavista, ha sido protagonista de grandes cambios progresistas e izquierdistas con respeto al período anterior de la “cuarta república” que era la forma institucionalizada de una partidocracia (Álvarez, 2003). Los progresos del régimen chavista se basan en tres ejes fundamentales: primero, la recuperación y el fortalecimiento de la intervención estatal en la economía; segundo, el aumento en la calidad de vida de los sectores populares del país; y tercero, una transformación radical del régimen político (Figueroa, 2006: 200). La redistribución de la tierra, aunque no tan amplia como se prometió, ha beneficiado 116 mil familias que han recibido casi dos millones de hectáreas de tierra no cultivada. Casi un millón de niños pobres han recibido educación de forma gratuita, igual que el millón de ciudadanos analfabetos que se vincularon a los programas de alfabetización gratuita. El gobierno ha construido y fundado alrededor de 10 mil nuevas clínicas en los barrios populares del país y ha construido 200 mil nuevas unidades residenciales para la población vulnerable (Ibíd.: 206). Sin embargo, el lado negativo de las políticas públicas del gobierno, se manifiesta en el hecho de que la reforma

---

10. Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

agraria, aunque de gran beneficio para muchos sectores previamente excluidos del acceso a la tierra, no se ha combinado con la seguridad y protección necesaria; de hecho, la Guardia Nacional se ha mostrado ineficaz para impedir los asesinatos de líderes rurales y sus familiares ejecutados por sicarios pagados por latifundistas, los cuales sumaban más de 200 a finales de 2009 (Petras, 2009).

Con respecto a la política petrolera, el gobierno continúa su histórica dependencia de este sector productivo, desde que en 1914 se descubrió la gran cuenca petrolífera de Maracaibo (González, 2009). Aunque Chávez reiteró la necesidad de ir construyendo sectores productivos no petroleros para poder financiar y construir su proyecto de socialismo bolivariano del siglo XXI, y a pesar de que la contribución petrolera al PIB descendió del 28,5%, en 1999, a 17,5%, en 2007 (Ibíd.), la economía nacional sigue dependiendo del flujo del oro negro. De un lado, el difícil proceso de reafirmar el control estatal de la empresa PDVSA —que se transformó a partir de 1997 en una empresa global dirigida por los intereses empresariales y poco influenciada por las circunstancias políticas nacionales—, generó grandes problemas al gobierno de Hugo Chávez. Eliminar la autonomía de la empresa petrolera, llevó al presidente hasta el punto de casi perder su poder político, tras la huelga petrolera y el fracasado golpe del Estado del 2002. Posterior a estos eventos, Chávez avanzó en su proyecto de reestructurar la empresa, despidiendo una gran cantidad de profesionales e impulsando el retiró de más de 20.000 empleados, e terminó con la política de contratación basada en la meritocracia. Igualmente, cambió el presidente de la PDVSA seis veces, en una empresa que durante veintitrés años había contado sólo con siete (Ibíd.: 6-7). Tales cambios políticos han contribuido a que la empresa pierda su ritmo de crecimiento y de productividad. De hecho, a partir de 2001, la producción petrolera ha caído continuamente, una tendencia que no salió a la luz pública y se disimuló con el incremento del 52,2% en el precio por barril entre 2006 y 2008. Con la llegada de la crisis a finales del 2007, en el mercado bursátil gringo, el gran aumento del precio petrolero<sup>11</sup> empezó de deslindarse, terminando en el último trimestre de 2009, en 50 dólares por barril aproximada-

---

11. Entre 1998 y 2008, el precio de petróleo pasó de nueve a 130 dólares por barril.

mente. Mientras tanto, la tasa de inflación, se situó entre el 12,3% y el 31,2%, y la deuda pública llegó al 25% del PIB en 2008, un aumento bastante significativo frente al 3,1% de 1999.

La falta de capacidad técnica, combinada con la política estatal de no dejar a los privados, tiene al sector en la vergonzosa situación de tener más de 18.000 pozos cerrados, un número equivalente al 53% de todos los pozos productivos del país (Ibíd.: 10). Pero, más allá del gran vacío entre necesidad política –la participación del petróleo en el ingreso fiscal en 2008 era del 52% del total– y la capacidad económica, la gran contradicción del proyecto “socialista” de Chávez, es que le cierra la puerta a explotaciones petroleras por parte de empresas norteamericanas, mientras que se la abre a otras corporaciones privadas provenientes de otros países, tales como Rusia, China, Japón, Irán y algunos de la Unión Europea, sin cambiar la naturaleza de los contratos. Aunque esta estrategia le ayuda al gobierno de minimizar su vulnerabilidad frente Estados Unidos, de ninguna manera resulta ser una política que camina hacia el socialismo, como suele decir su presidente.

Más allá del problema de construir un socialismo en una economía mixta y altamente rentista, el régimen de Chávez tiene otros problemas aún más de fondo. Su gobierno ha mostrado una tendencia a la inestabilidad institucional y muestra un resurgimiento del clientelismo (Burchardt, 2006; García-Guadilla, 2007; Penfold-Becerra, 2007), sin hablar de la creciente concentración de poder en una sola persona, confirmada después de la reelección en diciembre de 2006 por un período de seis años y con posibilidades de extender su poder aún más. También se ilustra en las tres Leyes Habilitantes con las que ha contado en tan sólo nueve años.<sup>12</sup> Luego de consolidar su proyecto “socialista”, Chávez anunció la necesidad de superar el fraccionamiento político que absorbía al país, y comenzar una nueva era socialista, a la que le dio el nombre de “Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2021” (Lander, 2008: 61). Tal proyecto se basa en su liderazgo, y carga con el mensaje

---

12. Las Leyes Habilitantes otorgan al presidente la facultad de decretar leyes ordinarias (que requieren mayoría simple) y leyes orgánicas (que necesitan mayoría calificada) como lo estableció, en el 2001, el Tribunal Supremo de Justicia, véase: (*El Tiempo*, 18 de enero de 2007).

de que se excluyen los no partidarios u opositores, como lo demuestra en un comentario público del mandatario en diciembre de 2006: "Los partidos que quieran manténganse, pero salgan del gobierno. Conmigo quiero que gobierne un partido. Los votos no son de ningún partido, esos votos son de Chávez y del pueblo, no caigan en mentiras" (citado por Lombardo, 2008: 61).

La formación y consolidación del movimiento chavista-bolivariano estuvieron ligadas, en sus inicios, no por una fuerza heterogénea de organizaciones sociales, sino por los miembros desilusionados del sistema bipartidista del Punto Fijo, provenientes del Ejército Nacional (Figuroa, 2006; López, 2003; Sylvia y Danopoulos, 2003). Fue así como en 1983, se fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), cuya dirigencia consistía en un grupo de oficiales que incluían a Chávez. Este movimiento, llegó hasta el fracasado Golpe del Estado en 1992, en el que resultó encarcelado Chávez por dos años. El movimiento estuvo aislado de la sociedad civil, hasta que en 1997 se reorganizó su estructura de grupo bajo el nombre del Movimiento Quinta República (MVR) que incluyó la participación de civiles, sobre todo intelectuales (Figuroa, 2006: 202). Menos de dos años después, Chávez ganó las elecciones presidenciales y empezó el largo proceso de extender su movimiento político hasta una gran masa de movimientos sociales. Podría decirse que sólo a partir de la conquista del poder estatal, el movimiento político liderado por Chávez, intentó abrir procesos de integración política con otros movimientos y organizaciones sociales con su gobierno de corte izquierdista-socialista. Pero, a pesar de esta relativa apertura hacia la sociedad civil, la cultura militar sigue teniendo un gran peso dentro de su gobierno, y se ha reforzado desde que la Constitución de 1999 otorgó el voto militar (López, 2003). Tal cultura, por razones de disciplina y jerarquía, basa su actuación en la obediencia vertical y tiene un carácter no deliberativo (Lander, 2008: 69). Esta práctica resulta contradictoria para el nuevo sistema de participación ciudadana directa, dentro de la cultura política venezolana.

Tal vez uno de los proyectos con mayores posibilidades de transformación social de este gobierno, ha sido la iniciativa de promover la participación política de las comunidades locales y de la ciudadanía, en total acuerdo con la Constitución de 1999, la cual gira alrededor de su

participación en la esfera política del país, pues más de 130 de sus 350 artículos, hablan de participación directa o indirecta (Burchardt, 2006: 204). La idea era sobrepasar la relativa dependencia que tuvieron los comités o juntas pro-mejoras y pro-desarrollo de los barrios populares, con respeto a los partidos políticos durante el período del puntofijismo, que consistía en otorgar fondos estatales a cambio de apoyo electoral (García-Guadilla, 2007; Goldfrank, 2007); y a ello contribuyó el que, paulatinamente, los movimientos ciudadanos de la clase media, de la década de los ochenta, se deslegitimaran por estar vinculados con partidos políticos tradicionales.

Chávez creó los Círculos Bolivarianos (CB) por decreto presidencial (Hawkins y Hansen, 2006) como figuras de participación social y política a nivel local. Sin embargo, durante el período de la revocatoria del mandato y la reelección presidencial, los CB fueron penetrados por partidos políticos, particularmente el MVR y se convirtieron en organizaciones parapolíticas, promoviendo el movimiento chavista a través de organizaciones como las Unidades de Batalla Electoral, en los años 2005 y 2006 (García-Guadilla, 2007). Otro de sus esfuerzos para fomentar la actividad participativa local, fue la creación de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), los cuales tuvieron una visión descentralizadora del poder local. No obstante, siguiendo el proceso de la cooptación de los CB, los CLPP también fueron cooptados por los políticos de los gobiernos locales de turno, deslegitimando la supuesta autonomía para la acción.

Luego de estos dos fracasos, el gobierno de Chávez creó los Consejos Comunales (CC) antes de las elecciones presidenciales de 2006. A estos se les dio el nombre de Espacios para el Ejercicio Real del Poder Popular Local, y pretendían promover un proceso de redistribución y apertura del poder, en diversos sectores sociales del país.<sup>13</sup> Su reproducción fue rápida y masiva, al punto de que, según estimaciones oficiales, para mediados de 2007 existían 36.000 (Goldfrank, 2007: 63). Una característica positiva es que los CC existen en barrios de clase media

---

13. Esta definición está basada en los comentarios del exdirector de la Alcaldía Mayor de Caracas, Samuel López, durante una entrevista con el autor el 22 de agosto de 2007, en Caracas.

y alta –generalmente asociada con la oposición política–, al igual que en los barrios populares, a pesar de la conflictividad que generan. Por cierto, algunos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los integrantes de las instancias gubernamentales responsables del fomento de estos consejos, argumentan que los CC deberían ser espacios exclusivos de “la revolución” (Lander, 2008: 71). Poco a poco estos consejos han ido aplastando las viejas organizaciones comunitarias, sin importar el sector social en donde se encuentren. Pero debido a su expansión, al potencial conflictivo y a la alta polarización política del país, la forma de democracia que promueve ha generado algunos cuestionamientos. Varias comentaristas han argumentado que la Ley de las Mayorías funciona en las decisiones de los CC (García-Guadilla, 2007; Lander, 2008) y opositores del proyecto, cuestionan la forma en que amenazan al poder político de los gobiernos municipales (Goldfrank, 2007: 60).

La incertidumbre reside en el desbalance que surge entre la participación local directa y “las modalidades de delegación y representación características del régimen parlamentario de elección directa” (Lander, 2008: 72). Y aquí se encuentran, no sólo los desacuerdos entre regímenes izquierdistas radicales, que promuevan la creación de sistemas de democracia directa en todos los niveles, sino también los liberales y conservadores que quieren salvar los formalismos del sistema democrático representativo burgués, pero dentro del propio movimiento chavista: entre la línea dura que apoya la creación de estructuras políticas paralelas a las formales existentes, y la línea suave que promueve reformas a las instituciones existentes, sin crear nuevas, podría decirse, que la gente estaría contenta de tener un Chávez sin socialismo. Es demasiado prematuro evaluar de modo conclusivo el grado de progresividad de los CC en la sociedad venezolana, pero de modo preliminar, puede decirse que son un paso importante para abrirle espacios al desarrollo autónomo de los sujetos por fuera de las líneas verticales y tradicionales de participación política. Un paso que, tal vez, puede convertirse realmente en una instancia de “democracia protagónica” como suele decir la propaganda oficial.

## **El gobierno de Chávez y el movimiento sindical: sospechas mutuas y desagregación**

Al contrario a los demás gobiernos alternativos de Suramérica, Chávez ha mantenido una fuerte oposición al movimiento sindical tradicional, sobre todo con la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV). Esta última fue el símbolo del sistema corporativista de la era del Punto Fijo (1958-1998), ya que fue la única central nacional desde su creación en 1947, hasta el año que Chávez surgió triunfante en las elecciones presidenciales. La CTV era muy cercana a los dos partidos políticos tradicionales, aunque su relación con Acción Democrática fue más afín. A pesar de haber mantenido una posición a favor de la clase trabajadora y de los sectores marginales, durante casi todo el período de posguerra, con el inicio del período neoliberal del país,<sup>14</sup> la CTV siguió un camino favorable para la clase dirigente del país. Continuamente, los dirigentes de la CTV bloquearon la afiliación de los trabajadores informales a la central, a pesar de que el Ministerio de Trabajo los había reconocido legalmente como trabajadores, y a pesar de que éstos contaban con más del 50% de la fuerza laboral activa (McCaughan 2004).

Cuando la CTV aceptó formalmente la privatización del sistema nacional de salud, mostró su nuevo pragmatismo de clase, al dejar a los sectores populares por fuera del anterior sistema de provisión estatal (Ellner, 2003). Entonces, con sus fuertes vínculos al sistema de Punto Fijo, y la oposición que eso implicaba frente al surgimiento del MVR, la CTV se convirtió en un órgano supremamente vulnerable a los ataques planeados por el nuevo gobierno. Efectivamente, en 1999, Chávez promovió por vía de referendo, una reestructuración radical del movimiento de trabajadores del país. El presidente, tras del movimiento de trabajadores bolivarianos, intentó activar a los trabajadores informales y a los trabajadores no representados por la CTV. Este proceso culminó con la creación, en abril de 2003, de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT), que, en su Primer Congreso afilió a 120 sindicatos y a 25 federaciones regionales (McCaughan, 2004: 147). Sin embargo, los problemas de independencia y autonomía con respeto al gobierno, que han plagado al movimiento no-tradicional de trabajado-

---

14. Generalmente asociado con el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

res venezolanos, y a la dirigencia de esta central, con su ideología moderada de acción de clase, impulsaron el fraccionamiento de la UNT.<sup>15</sup>

El gobierno ha intentado fragmentar la fuerza opositora sindical por dos vías: la vía mediática, asociando todo movimiento de oposición sindical o reivindicación laboral con el sindicalismo "aristocrático" del pasado; y por la vía de las reformas laborales, con las cuales ha aumentado al número de sindicatos, al punto de duplicarlos en los primeros ocho años del nuevo siglo, mientras que la tasa de sindicalización ha caído notablemente. Tal política ignora las transformaciones del sindicalismo impulsadas por el surgimiento del mismo gobierno; la CTV, el 25 de octubre de 2001, organizó unas elecciones directas, democráticas y abiertas entre los sindicalistas de base para el equipo de dirigentes nacionales de la central. Un proceso poco común en el sindicalismo internacional (Ellner, 2003). El resultado de tal situación es que en la ya expandida pluralidad de organizaciones sindicales venezolanas,<sup>16</sup> se mantiene una tensión con el gobierno, al punto que a finales del 2008, no había interlocución entre las centrales y el Estado.<sup>17</sup>

Los trabajadores sindicalizados en la empresa estatal petrolera PD-VSA, desde finales de 2008 se encuentran en una situación muy tensa con respecto al no cumplimiento de la renovación de contratos colectivos para el período 2009-2011. Frente a la caída del precio de petróleo y la caída de la explotación y producción petrolera, el Estado ve con mucha ansiedad los problemas fiscales que generaría el pago de los 4.200 millones de dólares que cuesta la renovación de estos contratos (González, 2009: 10). Las revueltas y los paros sindicales asociados a esta problemática laboral, han aglutinado a más de 3.000 trabajadores.

Con respecto a la promoción de la autogestión y la cogestión de empresas por parte de los trabajadores, los avances después de muchas promesas, han sido lentos, ambiguos y, en algunas instancias, regresi-

---

15. Como figura central en este proceso, se encuentra José Ramón Rivero, exdirigente de la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores.

16. El país ya cuenta con un amplio grupo de centrales: La Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Alianza Sindical Independiente (ASI), y la Central de Trabajadores Venezolanos (CTV).

17. Información obtenida en la página de web de la CTV, <http://www.ctv.org.ve/> (15 de noviembre de 2009).

vos. El reto de Chávez de crear un sistema de cooperativas que pudieran coexistir al lado del sistema capitalista, inició con fuerza. La Misión Mercal, que empezó a principios de 2004, consiguió y administró alimentos con altos subsidios a la población más pobre del país. Pero este programa no resolvió el principal problema de cómo cultivar un sentido de dignidad y desarrollo humano para los miles de pobres que salían de los programas educativos del gobierno. La Misión Vuelvan Caras fue una de las respuestas gubernamentales y pos-capitalistas creada para impulsar el desarrollo endógeno y la construcción de nuevas capacidades humanas enfocadas en las habilidades de la gente para las relaciones productivas, a través de cursos de autogestión y cooperación. Este fue uno de los proyectos de largo aliento del chavismo, que es similar al modelo del chartismo inglés en el siglo XIX, promotor del cooperativismo. En 1998 en Venezuela existían 800 cooperativas y a medida que el impulso fue aumentando, llegaron a ser casi 84 mil en 2005.

Así pues, la cogestión y la autogestión de empresas fueron proyectadas, vinculándolas con el aumento del cooperativismo. Sin embargo, a pesar de sus logros, sobre todo en la cogestión de la empresa estatal de aluminio, Alcasa, y la formación de empresas de producción social (EPS), este proceso fue cayendo en intensidad debido a las peleas internas del PSUV<sup>18</sup> y de los movimientos obreros. En la zona industrial más grande del país –Guayana– esta batalla por decidir el rumbo de la política productiva del socialismo del siglo XXI, ha sido tensa y no ha mostrado una salida definitiva. Mucha de la actividad se centra en la Corporación Venezolana de Guayaba (CVG) que incluye quince empresas estatales de varios sectores (acero, hierro, producción minería y aluminio). Después de la década neoliberal de los noventa, la CVG se encontraba al borde del colapso, debido a la negligencia explícita de los gobiernos de turno para renovar y asistir a las empresas antes de su planeada privatización. Sin embargo, con el tiempo las gestiones de los trabajadores con el apoyo del gobierno, generaron resultados relativamente positivos, con respeto a la estabilidad económica de las empresas. Luego del referendo del 15 de febrero, en el que triunfó la política de reelección permanente del presidente y otros dirigentes gu-

---

18. El PSUV tuvo su congreso de fundación en los principios de 2008.

bernamentales y municipales, el 9 de junio de 2009, los trabajadores radicales dentro del PSUV se pusieron a idear un nuevo plan para la CVG. En éste se plantearon nueve líneas estratégicas, dentro de las cuales se subrayan las siguientes: promover la autogestión; mejorar las condiciones ambientales y de trabajo en las empresas; implementar un sistema de contraloría pública de las empresas y proyectos; elección de gerentes y la reestructuración de la política gerencial; decisiones colectivas; y consejos de trabajadores (Fuentes, 2009). Chávez se ha mostrado proclive a apoyar estas iniciativas, pues en su "Plan Socialista Guayana 2009-2019" afirma que las empresas estatales en la industria básica, tienen que convertirse en "empresas socialistas". E incluso, el 22 de julio de 2009, Chávez contradujo los anuncios de otros miembros del PSUV, incluyendo a Rodolfo Sanz (Ministro de la Industria Básica) que habían culpado a los trabajadores de la crisis del sector aluminio. Aunque este conflicto no se ha resuelto, es una muestra de la gran polarización política que enfrenta el país, luego de la aceleración del proceso revolucionario del gobierno.

Con respecto a la política dirigida a favor del movimiento de los trabajadores informales, podría decirse que hasta ahora, ha sido un tanto ambigua, e incluso conservadora, pues los informales venezolanos (igual que los miles de colombianos emigrantes que forman parte de esta fuerza laboral), son un conglomerado de trabajadores que laboran en sectores muy heterogéneos.

Desde sus inicios, el gobierno de Chávez adoptó dos posiciones complementarias, hacia este sector que vincula más de la mitad de la fuerza laboral del país. Primero, con respeto a la gran masa de vendedores informales en las grandes ciudades del país (los buhoneros), el gobierno implementó una política de "tolerancia" después de largos períodos de victimización y represión estatal de los antiguos gobiernos; tal política dio al gobierno un gran apoyo en sus conflictos políticos posteriores, cuando esta población demostró su lealtad al proceso chavista en varios momentos.<sup>19</sup> Segundo, el gobierno implementó una política que quería incorporar a los trabajadores informales a la economía social, y los oficiales estatales (municipales, departamentales y nacio-

---

19. Estos puntos son tomados de varias entrevistas hechas por el autor a vendedores informales callejeros de Caracas, durante el mes de agosto de 2007.

nales) tuvieron la tarea de regular los trabajadores informales y darles acceso a programas de capacitación empresarial, con la esperanza de que con el tiempo, ellos se convertirían en una nueva “clase gerencial emergente” (Lebowitz, 2006). El problema con tal política es que retoma casi exactamente los argumentos de los economistas conservadores pertenecientes del Instituto de la Libertad en Lima, Perú, que tuvieron una gran acogida durante los ochenta y noventa, y que estaban inspirados en el trabajo de su director, Hernando de Soto (véase: De Soto, 1994, 2000).<sup>20</sup> En esa perspectiva, los trabajadores informales son vistos como una gran fuente de “empresarialismo” que ha sido excluida del sector avanzado del capitalismo por las acciones mercantilistas del Estado, que implementa leyes y regulaciones ajenas a la realidad socio-económica de los países en vías de desarrollo.

Desde esta perspectiva, se promueve una reestructuración legislativa que dé la posibilidad de incorporar legalmente todo el capital productivo y reproductivo (maquinas, casas o cualquier recurso “extra-legal”) al sistema estatal, igual que la provisión de permisos y licencias para que los pequeños empresarios puedan seguir trabajando en sitios propicios para vender, tales como el espacio público. Se centra, entonces, en la formalización de la situación informal de la mayoría de la fuerza laboral del país, pero sin resolver la gran diferencia entre microempresas con potencial productivo y las de subsistencia.<sup>21</sup>

Poco a poco, esta ambigüedad en la posición del gobierno frente a los trabajadores informales, y sobre todo con los vendedores callejeros, causa tensión con sus voceros que piden que se cumplan las promesas de construir bazares populares e ir más allá de la mera tolerancia (Ellner, 2003).<sup>22</sup> Sin duda alguna, la Misión Vuelvan Caras, tiene como reto, la solución de esta problemática, por medio de la ampliación de capacidades educativas y técnicas de subsistencia, al igual que con el potencial productivo, se irán construyendo opciones económicas que

---

20. Para una crítica a sus políticas, véase: Cross (2000); Mires (1989); Rakowski (1994).

21. Para un análisis de este punto, véase: Davis (2004 y 2006); Mires (1989).

22. Esta posición también se encontró durante las entrevistas con vendedores informales callejeros, hechas por el autor en el mes de agosto de 2007.

satisfagan el deseo de una vida digna. Lo que se requiere es, ante todo un proceso más participativo para esta población sobre las decisiones económicas que los afectan. Ello implica ir más allá de la institucionalidad de la economía social existente, que genere estructuras controladas por los propios trabajadores.

En conclusión, se puede afirmar que los obreros y el movimiento sindical de Venezuela, se encuentran en un período de alta tensión y alta división, provocadas no sólo por las proyecciones políticas del gobierno, sino también por el fuerte impacto económico que ha tenido la crisis global. Aunque el rumbo del país, después de 10 años de chavismo, estuvo lleno de contradicciones y las transformaciones en camino, se encuentran amenazadas por el clientelismo y la corrupción (que parecen endémicos en la institucionalidad venezolana), sin duda alguna, la experiencia venezolana ha reconfigurado las esferas de la política en el país y le ha dado gran expectativa y esperanza al movimiento de la izquierda internacional.

## **BOLIVIA: EL SURGIMIENTO DE UN INDIGENISMO DEL SIGLO XXI**

La victoria electoral de Evo Morales, en diciembre de 2005, y su ascenso al poder presidencial, el 22 de enero de 2006, marcó el inicio de una larga marcha política para él, como sindicalista, cocalero, y más que todo, indígena aymara boliviano, y para sus seguidores y colaboradores, después de cinco siglos de exclusión explícita, tal como implícita, del sistema político del país. Bolivia sobresale por ser el único país en el hemisferio occidental en el que la mayoría de la población se identifica como indígena, y Morales, tras asumir la presidencia, se convirtió en el primer presidente con esta identificación en el país (Hylton, 2006: 69). Otro dato significativo que salió de la ronda electoral, fue el hecho de ganar las elecciones presidenciales de manera tan decisiva; Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, obtuvieron más del 53% de los votos, frente al 28% del partido opositor, Podemos. Aunque ello puede ser percibido como poco decisivo frente a los amplios márgenes de victoria electoral de otros presidentes latinoamericanos, para el caso boliviano es tan enfático como nunca. En este país, los candidatos presidenciales generalmente han obtenido menos del 25% del voto popular, y antes de Morales, ningún presidente había alcanzado más del 37%.

La llegada de Morales y su partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS), al poder, demostró el profundo sentido de frustración

y decepción del pueblo con respeto al sistema político existente, con los partidos tradicionales y con el rumbo neoliberal que había socavado al país por casi dos décadas; en tan sólo tres años, Morales y el MAS aumentaron su poder de convocatoria electoral en más del 75%.<sup>23</sup> Pero lejos de ser un evento rotundamente estabilizador para el país, la elección de Morales como presidente de Bolivia, sólo marcó un punto decisivo en las modificaciones de las relaciones socio-políticas (o relaciones de clase), después de un período de tenebrosas revueltas sociales, que habían clamado por la revocatoria de dos presidentes en tan sólo dos años (2003 y 2004). Pero antes de explorar las raíces de estas movilizaciones y su impacto en el movimiento MAS y la formación política de su líder, vale la pena hacer un breve recuento de los eventos más notorios en la historia de Bolivia en el siglo XX.

### **Los pasos históricos de Bolivia: revolución, dictadura, y contrarrevolución neoliberal**

Como muchos de los países latinoamericanos, Bolivia sufrió numerosos períodos de crisis estatal, que pueden separarse en cuatro: la Guerra Federal de 1900, la del período entre 1932 y 1952, las primeras años de la transición hacia la democracia formal (1982-1985), y la actual, que empezó a finales del siglo XX (Moldiz, 2008: 155). Pero, con respecto a los grandes cambios políticos de tipo progresista, la revolución de 1952 tiene un lugar muy significativo. Bolivia, un país con poco desarrollo económico y con serias limitaciones en su desarrollo capitalista por sus fuertes raíces con el feudalismo, el sistema de encomiendas y de servidumbres, y una economía enfocada, casi exclusivamente en la exportación de plata y estaño, durante, e incluso, después de su independencia "formal" (Dunkerley y Morales, 1986), retrocedió aún más con la batalla más sangrienta y destructiva del siglo XX en América Latina –la Guerra del Chaco (1932-1935) contra su vecino, Paraguay– en la cual murieron 55.000 bolivianos.

La fragilidad económica y política del país se profundizó después

---

23. En las elecciones presidenciales de junio de 2002, Morales y el MAS se situaron en el segundo lugar, ganando el 20,9% de los votos, frente el partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que obtuvo el 22,4%.

de esta inútil guerra territorial, aunque en 1937 el General David Toro nacionalizó los yacimientos petrolíferos de *Standard Oil*, como un primer esfuerzo contra el antiguo proceso de usurpación de los recursos nacionales. Sin embargo, el atraso productivo continuó hasta 1952 cuando el MNR, liderado por Víctor Paz Estenssoro, impulsó el movimiento de modernización económica y política, popularizado con un discurso revolucionario y antiimperialista. En la esfera económica, el nuevo gobierno promovió una política que combinó la nacionalización de gran parte de las minas de estaño con la promoción de la iniciativa privada. Las conmociones sociales asociadas con la ocupación indígena de muchos latifundios en los valles y los altiplanos provocó la primera reforma agraria del país (en 1953), anunciada por el gobierno de La Paz en la localidad campesina de Ucureña, donde se decretó la liberalización de los trabajadores rurales e indígenas y se llevó a cabo un masivo reparto de tierras (Urioste, 2009: 114).

Como parte de la reforma política, el gobierno implementó la universalización del voto y una reforma educativa nacional; igualmente promovió una nueva ideología nacional basada, no en la exclusión sistemática del sistema minero oligárquico del pasado, sino en la apertura económica y política del Estado, y la incorporación de la clase obrera-minera, y en menor medida, la población indígena campesina. La presión que hizo sentir la bien desarrollada clase obrera-minera al nuevo gobierno, no demoró en llegar; los 36.000 mil trabajadores mineros impulsaron la creación de la Central Obrera Boliviana (COB) en el mismo año de la revolución, y su independencia acogió el liderazgo, de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). De ahí, demandó otras reformas categóricas a la economía y al sistema político del país: la socialización de la agricultura, la nacionalización de los demás sectores productivos, y la desestructuración del Ejército (Dunkerley y Morales, 1986). Sin embargo, luego de las peleas internas y el fraccionamiento ideológico, la COB fue perdiendo su fuerza autónoma frente al gobierno, y poco a poco se asimiló a los cambios mucho más sutiles del régimen.

En verdad, el grado de cambio de esta revolución, no supo medir la retórica de transformación de la que hablaban los dirigentes políticos. Incluso, la nacionalización de gran parte del sector minero no impidió que los competidores privados y la clase dominante aumentaran su

control estratégico del sector, a través de la monopolización burocrática de la Comibol y de una descapitalización paulatina (Moldiz, 2008; Dunkerley y Morales, 1986). Hasta la reforma agraria, una política de alta importancia para promover la redistribución de la riqueza nacional, no generó una profunda reconfiguración de relaciones productivas, dado que la redistribución de tierras se enfocó en una aglomeración de minifundios que no alivio el alto grado de precarización del trabajo agrícola, pero sí excluyó a los campesinos de la producción para el mercado y limitó su capacidad de cultivar para la subsistencia (Dunkerley y Morales, 1986: 92; Urioste, 2009). En fin, la revolución del medio siglo, sirvió para la apertura del sector privado agrícola y minero, y para dinamizar su producción, generando un nuevo sistema de explotación económica, a pesar del incremento de la intervención estatal en la esfera de la producción. Nuevas industrias agrícolas se expandieron, con el apoyo estatal, cultivando azúcar, algodón, tabaco y soya en el este del país, y con ventajosas concesiones arancelarias y tributarias, estos sectores obtuvieron altas ganancias e influencia política, creando la base para futuros conflictos sociales y geográficos del país.

Al lado de la reconfiguración de las fuerzas económicas que impulsó la revolución de 1952, la inestabilidad económica del país, dependiente del estaño –66% de las exportaciones para finales de la década de los cincuenta (Davies y de Miranda, 1967: 240)– y los bajos precios del metal, produjeron un fuerte incremento en el déficit presupuestal, llevando al país a una crisis fiscal en 1956 (Dunkerley y Morales, 1986). Tales eventos abrieron espacio para la influencia creciente de Estados Unidos en asuntos económicos y políticos de Bolivia, y con su presión, los elementos más progresistas de la revolución de 1952 pronto fueron superados por el pragmatismo político del imperio norteamericano.

Durante todo el período de la “renovación” política y económica del país, la clase obrera luchó por recuperar su posición revolucionaria y progresista, presionando al gobierno para que se retomara el camino de transformación profunda. Sin embargo, su aislamiento de otros sectores sociales –sobre todo del movimiento campesino– los debilitó, mientras que la clase campesina, con sus milicias populares, fue cooptada en una alianza frágil, por las fuerzas militares, que se fortalecieron tras el pacto de estabilización que acordó el gobierno con el Fondo Monetario

Internacional (FMI), en 1956. La subsecuente toma del poder por un grupo derechista militar en 1964, se enfocó en la represión explícita de la clase obrera y del movimiento sindical. Como intento por “normalizar” el sistema político y dar una apariencia engañosa de retorno a la democracia, los militares golpistas, con el apoyo de Estados Unidos, fabricaron una elección presidencial que fue ganada por el general René Barrientos Ortuño, convirtiéndose en al presidente “constitucional” el 6 de agosto de 1966 (Young, 1966). Sin embargo, tras la fachada de una democracia “refundada”, el régimen siguió con su hostigamiento a las fuerzas sociales de oposición, forzándolas a buscar nuevas propuestas políticas, una de las cuales surgió dentro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se fundó en 1971. Sin embargo, en vez de aglomerar los movimientos heterogéneos de oposición en un grupo sólido, el MIR se basó principalmente en sectores de clase media urbana, teniendo poco impacto en el movimiento sindical (Suárez, 2005). Bajo la jefatura estatal del General Banzer, en los setenta (1971-1978), el proceso de reconcentrar la propiedad rural se incrementó, bajo el impulso a la industria agrícola, en detrimento de los minifundistas, quienes empezaron a mostrar su oposición al gobierno militar (Urioste 2009); proceso que culminó en una masacre brutal, en Cochabamba, en 1974, y de ahí en adelante el régimen enfrentó una ola creciente de movilizaciones y protestas sociales, culminando en una transición a la democracia, en 1982.

La década de los setenta, trajo consigo una fuerte caída económica, con una deuda pública que creció de 0,55 a 2,9 mil millones de dólares (Dunkerley y de Miranda, 1986: 96). La producción de estaño, al mismo tiempo enfrentaba una caída de la producción, junto con una caída del precio, y ambas generaban grandes problemas macroeconómicos al país. En 1985, Bolivia empezó su giro neoliberal, cuando el exlíder del proceso revolucionario, Paz Estenssoro, demostró sus tendencias derechistas con el Decreto Supremo 21060, llamado la “nueva política económica”, como un proceso que pretende restaurar la confianza inversionista en el país. Sin embargo, tal política avanzó mucho más de lo que hubiera querido la ortodoxia monetaria, y abrió el paso hacia una contrarrevolución económica, que tuvo su expresión más fuerte con la política, mal llamada, de “simbología progresista” del presidente Gon-

zalo Sánchez de Lozada (1993-1997). Esta política, de modo rápido, transfirió empresas estatales claves a manos de empresas extranjeras, como una forma de “capitalizar” el Estado. Así fueron privatizados Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). Además de esta asombrosa privatización, el mismo gobierno promulgó la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en 1996, que profundizó el problema de la tenencia de la tierra (Urioste, 2009). Poco a poco el Estado intervencionista, asociado con la revolución de 1952, fue desmantelado, tomando rango constitucional con la reforma de la Constitución Política en 1994, que se basó en la supuesta necesidad de modernizar el aparato estatal, promoviendo una orientación de políticas de ajuste estructural (Moldiz, 2008: 165).

Pero más que modificar la orientación estatal y su estructura, las reconfiguraciones neoliberales lograron un aumento en la desigualdad social del país e impulsaron una reestructuración de las clases sociales: grandes aglomeraciones capitalistas, seguidas por los pequeños empresarios y dejando en la periferia a la clase obrera no profesional, a los campesinos minifundistas de supervivencia y a los trabajadores informales de rebusque (Grebe-López, 2009: 145). Desde estos sectores excluidos de los beneficios de la apertura económica, emergió Evo Morales y el Movimiento Indigenista Boliviano.

### **El MAS y Morales entran a la esfera política**

La implementación del proyecto neoliberal en el país, en los ochenta, y su posterior avance, en los noventa, aunque generó una gran riqueza para las clases dominantes-oligárquicas del país, también las llevó a su propio debilitamiento político. La clase media urbana, previamente aliada con el pacto neoliberal, llamado “gonismo”, experimentó un “proceso acelerado de empobrecimiento” a partir de los últimos años de los noventa (Moldiz, 2008: 168). Mientras tanto, las movilizaciones sociales se hicieron más frecuentes y con mayores niveles de disturbio, culminando con la Guerra del Agua, en el 2000 y la Guerra del Gas, en

el 2003. La del agua incluyó huelgas, bloqueos de carreteras, enfrentamientos con la fuerza pública y el ejército nacional y agrupó una masa heterogénea de fuerzas sociales: indígenas, grupos barriales, trabajadores sindicalizados y no-organizados, estudiantes, coccaleros, grupos de profesionales, campesinos y transportadores; y aunque se centró en Cochabamba, también tuvo el apoyo de las poblaciones populares de La Paz y Santa Cruz, las cuales se organizaron en un sindicato ciudadano (Coordinadora de Defensa del Agua) (Gallardo, 2007). Tal lucha tuvo resonancia internacional y fue la primera gran muestra del descontento por las políticas privatizadoras-neoliberales. Todo ello generó un proceso que terminó en la renuncia del presidente Hugo Banzer, en agosto de 2001.

Reelegido por segunda vez en 2002, Sánchez de Lozada, promovió una ley que provocó una constelación de fuerzas opositoras no vista desde hacía más de medio siglo. El nuevo gobierno vio las abundantes reservas de gas natural que tenía Bolivia como la mejor opción para generarle recursos al Estado, luego de que fueran vendidas a los intereses extranjeros. De Lozada pensó en exportar el gas boliviano a través de puertos chilenos para los socios norteamericanos, pero a la mitad del precio que pagaban los países vecinos, como Argentina y Brasil –tan sólo 2,5 dólares por barril (Koehler et al., 2007: 138). Sin embargo, las divisiones sociales y políticas del pueblo boliviano desaparecieron frente a lo que definieron como el último paso en la humillación nacional. Las protestas giraban alrededor de tres reivindicaciones populares: la derogación de la nueva ley de hidrocarburos –devolviéndole el sector al Estado–, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y la renuncia de Sánchez de Lozada como presidente (Ibíd.). En contra de la opinión de su propia alianza política, De Lozada quiso contener con el ejército, el creciente caos social y las movilizaciones, y con ello causó la muerte de más de 300 bolivianos. Esta movilización fue llamada la Guerra del Gas. El diputado Evo Morales, quien había sido elegido con la votación más alta desde las elecciones de 1997, fue expulsado del Senado por su supuesta influencia en las manifestaciones sociales (Ibíd.). Pero en lugar de pacificar el ambiente, el disgusto popular aumentó, llevando al país de nuevo a un proceso que terminó con la cabeza del presidente De Lozada, en octubre de 2004. Carlos Mesa, lo sucedió como presidente,

pero por falta de voluntad, o de capacidad política para comprometerse con las reivindicaciones –sólo promovió una convocatoria sobre la propiedad de los hidrocarburos del país– también fue sucedido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí, el nuevo proceso electoral se puso en marcha, terminándose en una confrontación entre el MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) y Podemos.

La campaña electoral del MAS se enfocó en tres elementos principales: revocar la Ley de Hidrocarburos, convocar a la Asamblea Constituyente, e implementar una reforma agraria –el “Pacto por la Tierra”–,<sup>24</sup> todo bajo una amplia proyección política llamada la “revolución democrática y cultural”. Tras su victoria electoral, quedó demostrada la apatía por los partidos políticos, al igual que se reivindicó el sentimiento de los bolivianos indígenas por tener a uno de ellos, por fin, en el alto puesto de la política nacional. Morales empezó por promover cada uno de estos objetivos.

### **Poder al MAS y una nueva trayectoria política del país**

Las configuraciones políticas en el nuevo gobierno de Morales, delinearon unos espacios estrechos para desarrollar su proyecto político, a partir del 2006. El MAS, a pesar ser mayoría en la Cámara de Diputados (65 de las 130 sillas) enfrentó una situación más compleja en el Senado, donde sólo tenía 12 de las 27 sillas disponibles; Podemos (la coalición derechista) obtuvo 13 y el MNR y el MIR consiguieron las otras dos (Hylton, 2006: 71). Otra limitación del proyecto de Morales tuvo que ver con la estructura de su partido, que en realidad, al principio del mandato de Morales, era más una “coalición de facciones personalistas” que un partido, en el estricto sentido de la palabra (Ibíd.: 69; Zalles, 2008). A pesar de que Morales tenía una autoridad incues-

---

24. Este pacto se basó en las siguientes líneas: garantizar la seguridad jurídica a las propiedades; garantizar la justicia en el acceso a la tierra sancionando especuladores y traficantes de tierra; restablecer la legalidad en la atención de las demandas sociales con respecto a la institucionalidad nacional agraria; y articular las políticas de redistribución de tierras, promoviendo medias de diversificación productiva, véase: Urioste (2009: 117).

tionable, al partido le faltaba la burocracia institucional que apoya a las agrupaciones latinoamericanas alternativas que han permanecido por más tiempo en la arena política: el Partido de los Trabajadores (Brasil) o el Frente Amplio (Uruguay), por ejemplo. Sin embargo, tras cumplir un año como presidente, Morales había hecho unos cambios importantes en el país, consolidando así su gobierno y popularidad personal.

Sin duda, la acción más importante en el primer año del gobierno de Morales fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC), presentada al Congreso Nacional el 7 de febrero de 2006. Esta propuesta buscaba lo que él llamaba la “refundación de Bolivia” cuyo eje principal era garantizar la participación política de los indígenas, las mujeres y los jóvenes. Esta propuesta fue promovida, primero, por los indígenas de las tierras bajas del oriente, en 1990, pero solo hasta después de la Guerra del Agua tuvo resonancia nacional (Nina, 2007). En la subsecuente elección, el MAS obtuvo el 50% de los votos (137 de los 255 asambleístas), seguido muy atrás por Podemos que obtuvo tan sólo el 15%. En total, 16 agrupaciones políticas lograron representación en la AC. En la campaña para elegir la AC, al 19 de julio de 2006, la Comisión Agraria Nacional (CAN) aprobó un proyecto de ley que modificaba la Ley INRA, denominada la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la cual, fue ratificada por el Congreso en noviembre de 2006 (Urioste, 2009: 118-119). Esta ley ponía las bases para la distribución de tierras expropiadas, a gentes que no la tuvieran, en lugar del viejo sistema que sólo buscaba ponerlas en utilidad pública (Ibíd.: 119).

Otra intervención en el primer año, de gran significado para los trabajadores bolivianos, fue la derogación del artículo 55 del Decreto Supremo 21060, que determinaba la libre contratación de la fuerza laboral boliviana que había impulsado la desregulación y precarización del mercado laboral. Morales instigó un aumento en el salario nominal promedio del 11% en 2006 (complementado en 2007 con un 7% adicional), y estableció la “tarifa dignidad” en el servicio de energía eléctrica para las familias más pobres del país. También, cumpliendo con su promesa electoral, puso en marcha una “revolución agraria” que tenía cinco ejes, a través de un plan de distribución de tierras fiscales.

## **La Nueva Constitución de Bolivia**

Una vez asegurada la AC, que tuvo el dominio de las fuerzas del MAS, el gobierno empezó su campaña para la aprobación de una nueva Constitución Política para Bolivia. Tal evento tuvo lugar en un ambiente social bastante tenso, que se manifestó con aumentos significativos de violencia sobre todo en el oriente de Bolivia, en la zona llamada "Media Luna". Incluso, antes de la clausura de la AC, en diciembre de 2007, hubo enfrentamientos en Sucre, los cuales demostraban la pelea por el poder político y económico del país (Zalles, 2008). El MAS y Morales, adoptando una posición más conciliadora que conflictiva, frente a los intereses de las élites de la zona Media Luna (Santa Cruz) del país, sobre todo con respeto a la implementación de la reforma agraria, abrió un espacio para futuras luchas desestabilizadoras de la gobernabilidad de Bolivia. En 2008, entonces, hubo una fuerte movilización política, que promovería un referendo para darle "autonomía" al departamento de Santa Cruz. En efecto, a pesar de una serie de cuestionamientos legales, en 2008 se aprobó el Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz, a través de un referendo. Este estatuto pretendía que las autoridades regionales manejaran todos los aspectos de la tierra y el medio ambiente, sin ninguna intervención del gobierno central (Urioste, 2009: 121). Morales rechazó este referendo, planteando la necesidad de uno nuevo, con observación internacional, que finalmente ganó la alianza del gobierno, con el 67% de los votos, el 16 de agosto de 2008.

Esta muestra de poder electoral, inflamó la oposición derechista del país, y en septiembre de 2008 hubo varios enfrentamientos (en los que hubo muchas muertes: 11 en Cobija, Pando, el 10 de septiembre; y 30 en las afueras de Cobija, el 12 de septiembre) entre las fuerzas armadas y grupos paramilitares de la oposición (Podur, 2008). Morales actuó, despidiendo a los ministros que había nombrado como gesto de conciliación con la derecha, y los reemplazó con ministros de tendencia progresista. En tal situación de polarización geopolítica, el 25 de enero de 2009, en un masivo referendo, la nueva Constitución Política de Bolivia fue aprobada, pues el MAS obtuvo el 61,4% de los votos. De aquí en adelante, el MAS tuvo la legitimidad suficiente para promover la nueva trayectoria social y política que el país necesitaba con urgencia. Pero

antes de evaluar el contexto actual, después de este gran paso, se debe mirar la forma cómo el gobierno ha manejado los temas económicos en sus primeros años de liderazgo.

### **La política macroeconómica de Morales: grandes pasos hacia adelante, otros más cautelosos**

Apenas iniciado su mandato como presidente, Morales dictó el Decreto 28609, con el que buscaba generar un gran consenso público, como un esfuerzo para legitimar un nuevo régimen político con arraigo en el pueblo. Era un decreto de austeridad y reducción de gastos que el poder ejecutivo encaraba para reducir el salario presidencial en un 57%, el de los ministros del gabinete en un 50%, el de los viceministros en un 39% y el de los directores generales en un 20%, con estipulaciones vinculantes voluntarias que luego se extendieron a la rama legislativa y judicial. El ahorro total se estimó en 23,5 millones de bolivianos, los cuales se destinarían a inversiones en los sectores de salud, educación y seguridad. Junto con esta política, Morales dirigió sus esfuerzos para cumplir con la promesa de devolverle al país los recursos de gas y petróleo, que fueron fuente de disturbios y mal aliento social en el pasado reciente. El proceso de nacionalización de los hidrocarburos, se inició el 1 de mayo de 2006, día en el que el Ejército ocupó, de modo simbólico, los campos petroleros.<sup>25</sup>

El proyecto de Morales se movió más allá de las nacionalizaciones de 1952 y 1969, pues éstas se basaron en “la compra del paquete de acciones en fideicomiso en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con el objetivo de que el Estado asumiera el control en la dirección de las empresas” (Grebe-López, 2009: 144). Pero al mismo tiempo, Morales renegoció los impuestos, las regalías y los precios de contratación con las empresas privadas y estatales petroleras, de acuerdo a las nuevas restricciones de la Ley de Hidrocarburos. Tal proceso coincidió con el aumento en los precios internacionales de hidrocarburos, generándole al Estado unos recaudos tributarios enormes (Ibíd).

---

25. Esta acción se basó en el Decreto 28701, denominado “Héroes del Chaco de nacionalización de los hidrocarburos” (artículo 5, dictado el 1 de mayo de 2006).

La renacionalización de los hidrocarburos bolivianos significó una segunda muestra del nuevo rumbo político del país, lo cual fue motivo de celebración. Sin embargo, al lado de la euforia del pueblo, también existían voces rencorosas en la izquierda que clamaban, no sólo por la nacionalización del subsuelo, sino que también querían un proyecto de mayor envergadura que nacionalizará las refinerías y los derechos exclusivos de explorar y explotar las reservas de gas que permanecían en poder de las empresas extranjeras. Más allá de este gran paso, el gobierno de Morales ha seguido la práctica de invitar empresas extranjeras a invertir y explotar a gran escala los recursos minerales del país y, en el presente, hay más de 100 empresas multinacionales explotando el sector minero de Bolivia, que en general tienen regímenes salariales precarios y la legislación ambiental es de pocas restricciones, lo que contradice la supuesta marcha hacia al socialismo del siglo XXI (Petras, 2009).

No obstante estas medidas del gobierno de Morales, el recaudo fiscal del país ha aumentado de una forma sin precedentes, aunque la dependencia de factores externos la hace ver como un fenómeno bastante precario e inestable. Muchos de estos excedentes se destinaron a programas sociales para mejorar la calidad de vida de los sectores populares e incluirlos en el nuevo rumbo político del país.

### **Programas sociales del gobierno del MAS**

El proyecto de derrocar la trayectoria neoliberal que acosaba a los pobres, consistió en impulsar varios programas dirigidos a la población más vulnerable. Con una situación fiscal boyante en los primeros tres años de su gobierno, el MAS se enfocó en los sectores de la salud, las pensiones y la educación, e implementó varios proyectos.

Para mejorar la atención médica de la población que estaba excluida de tal posibilidad, el gobierno, con el apoyo de los gobiernos de Venezuela y Cuba, fundó un programa que le ha dado atención médica a 5 de los 9 millones de bolivianos, y que ha ayudado a recuperar la vista de alrededor de 200 mil personas a través de la "Operación Milagro" (Moldiz, 2008: 173-174). También creó el Bono Madre-Niño-Niña para las mujeres embarazadas y sus hijos menores de dos años (257 dóla-

res pagados en un lapso de dos años y nueve meses). Para ampliar la cobertura pensional, el gobierno creó la Renta Dignidad, dirigida a la población de la tercera edad (un monto anual de 340 dólares para cada beneficiario) (Grebe-López, 2009: 146), y en el sector de la educación, creó el Bono Juancito Pinto, para los niños en edad escolar (que significa un monto de 29 dólares por año), al lado del programa “Yo sí puedo”, para reducir el analfabetismo del país que está basado en un programa venezolano. Hasta junio de 2007, 500 mil personas se habían beneficiado de este programa (Moldiz, 2008: 174). Además de estos programas básicos que dan acceso a la educación, el gobierno, en un acuerdo con Cuba, consiguió 5 mil becas para jóvenes bolivianos que estudiarían la carrera de medicina en el país caribeño, y además centenares más, gozarían del servicio de becas para otras carreras en Venezuela (Ibíd).

El gobierno de Morales también adoptó una posición muy novedosa con respecto a la política antidrogas, pues redefinió las bases del problema que están consignadas en la Ley Antidrogas (Ley 1008), suscrita por el expresidente Paz Estenssoro, el 19 de julio de 1988. Esta ley había implantado la política de erradicación de cultivos ilícitos, en armonía con el enfoque norteamericano. Morales, por el contrario, planteó la interdicción de los cultivos de coca, que consiste en darle prioridad a la generación de alternativas integrales y no a la represión de campesinos (Ibíd.). Tal propuesta está muy vinculada a la historia de la lucha de Morales, el *Ilok'alla* (Chico), nacido en Orinoca que se convirtió en defensor de los cocaleros y en un sindicalista de proyección nacional. Afirmando su intención de derrocar la hegemonía represiva del cultivo de coca, explícita en la política norteamericana de los tiempos de George Bush, hijo (Hawkins, 2008), Morales terminó con la presencia de la DEA en el territorio boliviano y limitó la presencia de USAID (Petras, 2009). Pero más allá de esta posición, sería pertinente evaluar, de modo más extenso, la reforma agraria implementada por Morales en agosto de 2006, expresada de manera general, en el Plan de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente, y basada en su promesa de distribuir la tierra entre aquellos que la trabajan, en lugar de entregársela a los que pagan impuestos por ella.

## **Reforma agraria: ¿socialismo de la propiedad en la praxis o un paso frágil en un país dominado por el latifundio?**

Del mismo modo que Venezuela, la reforma agraria de Morales se centró en redistribuir las tierras improductivas para que estas vuelvan a "prestar una función social-económica" (Nina, 2007). Sin embargo, la importancia de la tierra rural es mucho más contundente en Bolivia que en Venezuela, pues los campesinos bolivianos representan un 40% de la población nacional (Moldiz, 2008: 172). Por cierto, en Bolivia existen alrededor de 660.000 unidades agrícolas, de las cuales el 87% (2,7 millones de personas) corresponden a pequeños productores (Urioste, 2009: 113). Estas personas y sus familias, sólo ocupan el 14% de la tierra productiva del país (la mayoría ubicada en las regiones altas en los valles y el altiplano), que ilustra el alto grado de parcelación del sistema de minifundios (Ibíd.). La poca cantidad, y la pobre distribución de la tierra boliviana, hacen que la población campesina obtenga pocos ingresos de su producción agrícola, que han sido estimados en 300 dólares al año por persona (Banco Mundial, citado por Urioste, 2009: 113-114). Por cierto, Bolivia desde hace mucho, tiene uno de los índices más altos de pobreza rural en América Latina.<sup>26</sup>

Como parte del paquete de la reforma agraria, el gobierno del MAS, después de mucha retórica anti-latifundista, volvió a enfocarse en recuperar el principio constitucional de entregarle la tierra a los que la trabajan. También entregó equipos de tracción para riego, maquinaria y otras herramientas agrícolas a comunidades campesinas e indígenas, al tiempo que abrió el acceso al mercado de las organizaciones campesinas y las cooperativas para el cultivo de productos de consumo básico, así como a los productos nativos, como la quinua, el tarwi, la coca, y el amaranto (Nina, 2007).

Pero el contenido de la reforma agraria, fue criticado por algunas ONG debido a su enfoque, porque éste está en la línea de la economía del mercado, las líneas de los institutos multilaterales (sobre todo las

---

26. En 1997, la pobreza rural alcanzaba el 78,5% y, desde entonces, no ha tenido descensos notables, pues en el 2001, era del 77,7%, y en 2006, del 76,6%. Mientras tanto, la pobreza rural extrema que era del 61,5% en 1997, y en 2006, ha alcanzado el 62,3%, véase: (Kay, 2009: 106).

del Banco Mundial), el privilegio al mercado externo y, en el fondo, la modificación de la Ley INRA no implementó la esperada gran transformación del uso y posesión de la tierra nacional (Petras, 2009; Urioste, 2009). Incluso, las pocas expropiaciones de tierra, se hicieron bajo la modalidad de pagos de indemnización basados en el valor del mercado. Además, el eje geográfico del plan se ha centrado en la zona amazónica del país –saneando los títulos de propiedad de los indígenas de allí– pero, en el oriente de Bolivia (la zona más conflictiva con el tema de la tierra y donde hay grandes latifundistas), la reforma ha sido notable por su ausencia (Urioste, 2009).

### **Política laboral y relación con el movimiento sindical**

Se han mencionado los aumentos salariales implementados por el gobierno del MAS, una vez estuvo Morales en la presidencia. Pero la política general del mercado laboral y la distribución de la plusvalía, no han dado una respuesta clara con respeto a los más beneficiados. La derogación de los artículos 55 del Decreto Supremo 21060 de 1985, y el artículo 39 del Decreto Supremo 22407 de 1990, igual que la legislación que establezca la concordancia y aplicación del artículo 13 de la Ley 1182 de 1990, con la Ley General del Trabajo (reglamentado por el Decreto Supremo 28699 de 2006), hizo un gran esfuerzo para quebrar la política laboral neoliberal, que ha regulado en el país durante los últimos veinte años. Por cierto, fueron estos viejos artículos, los que iniciaron la época de desregulación y flexibilización del mercado laboral boliviano, generando alzas en las tasas de desempleo y subempleo, y creando inestabilidad laboral y falta de cobertura pensional y de prestaciones sociales. El gobierno, con estos remedios, obligó al sector privado a pagar los salarios fijados por la ley, al igual que las indemnizaciones por despidos injustos.

Otros decretos y cambios legislativos laborales que, además de las ya dichos en la sección inicial sobre Bolivia, han sido implementados en el gobierno de Morales, son:

- El Decreto Supremo 29000 con respeto a la jornada laboral, dictado el 2 de enero de 2007, que regula la jornada de trabajo en horario discontinuo de lunes a viernes, desde las 8:30 am., a las 12:30 pm.,

y de las 14:30 a 18:30 pm., en todas las entidades públicas.

- El Decreto Supremo 29579 (empleo para jóvenes), firmado el 12 de mayo de 2008, en el que se establecen mecanismos administrativos financieros para iniciar al programa "Mi Primer Empleo Digno" dirigido a jóvenes con escasos recursos, entre los 18 y 23 años de edad. Este decreto intenta ofrecer fuentes de trabajo mejor remuneradas y con mejores posibilidades de desarrollo humano para cada beneficiario.
- El Decreto Supremo 29608 (personas en situación de discapacidad), firmado el 18 de junio de 2008, se encarga de reforzar los derechos laborales de las personas discapacitadas, modificando y complementando el Decreto Supremo 27477 de mayo de 2004. El decreto le obliga al Estado a contratar, como mínimo, al 4% de la nómina, a personas en situación de discapacidad, y también institucionaliza la estabilidad laboral de estas personas, la promoción de sus unidades económicas y unas concesiones de venta, entre otros incentivos.
- La modificación del Decreto 5315 de 1959, dictado en octubre de 2006, busca garantizar la prestación del seguro obligatorio y las asignaciones familiares a todas las personas beneficiarias de un trabajador. Además, el Decreto Supremo 29537 de mayo de 2008, complementa y modifica la reglamentación del Seguro Social Obligatorio de largo plazo, con respeto a asuntos como: las obligaciones de los empleadores, las verificaciones y el cobro de sanciones, el acceso a la pensión de jubilación para el sector minero (reduce la edad de jubilación en los trabajos insalubres, salario cotizante para la compensación de cotizaciones del sector cooperativo y minero y una pensión de jubilación para los afiliados de las fuerzas armadas nacionales, entre otros temas.
- Como esfuerzo por eliminar formas de opresión explícitas en la relación laboral, el gobierno creó, el 3 de octubre de 2007, el Consejo Interministerial para la Erradicación de la Servidumbre, el Trabajo Forzoso y Formas Análogas, a través del Decreto Supremo 29292.
- Con respecto a la organización sindical, el gobierno, el 28 de marzo de 2007, implementó el Registro Único Nacional de Confederaciones, Federaciones, Cámaras y Otras Formas de Organizaciones, que

agrupan al sector productivo, conformado por los pequeños productores urbanos y rurales. Morales, firmó el Decreto Supremo 29539, el cual rige el fuero sindical a favor de los dirigentes sindicales, y además establece la obligación de rendir cuentas de su gestión. De esta manera, el gobierno asegura que los trabajadores sindicalizados, y con fuero sindical, no sean despedidos mientras ejerzan la función de representantes de sus compañeros sindicalistas.

El movimiento sindical, después de tantos años en la periferia de la política oficial nacional, y a pesar de haber sido uno de los principales movimientos en el impulso revolucionario de 1952, volvió a tomar alguna fortaleza política dentro del MAS. La Central Obrera Boliviana (COB), fue una de las convocantes a las movilizaciones populares de la Guerra del Gas, en 2003, promoviendo una nueva alianza entre obreros y campesinos. Mucha de la fuerza detrás de las tres grandes reivindicaciones reclamadas por el pueblo en ese entonces, provino de esta central, junto con el reclamo por una política que reconociera a los indígenas como “gestores de la historia y actores a los que les corresponde ocupar el poder exigiendo la descolonización estatal”.<sup>27</sup> Sin embargo, esta renovada fuerza social que convocaba al movimiento sindical boliviano, una vez que se abrieron las puertas para los cambios políticos institucionales, reformuló su estrategia e ideología y tomó el camino hacia el poder electoral (Petras y Veltmeyer, 2006). Tal cambio de dirección obedeció a las transformaciones en las relaciones de clase y su impacto sobre las conciencias. Después de la gran ola de movilizaciones sociales en contra del Estado, en lugar de hacerlo contra la clase económica dominante (véase: Borón, 2004, 2005), y después de las crisis políticas que éstas generaron, la búsqueda se dirigió a la conquista del poder electoral, tras la construcción de un partido político. El MAS fue la expresión del avance de esta nueva táctica, incorporando muchos de los dirigentes sindicales y líderes comunitarios, indígenas, campesinos

---

27. Entrevista con Pilar Uriona, Investigadora del Centro de Estudios Andinos Amazónicos y Mesoamericanos (CEAM), e integrante del Comité de Seguimiento a Conflictos del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), hecha por Diana Patricia Cárdenas Quintero de la Escuela Nacional Sindical de Colombia.

e grupos profesionales de trayectoria izquierdista. La COB, tomando esta nueva dirección, más electoral que social (y por esta diferencia de naturaleza, más reformista que transformadora), acogió unas estrategias claves, enfocadas a promover un gobierno alternativo. Primero, se buscó rejuvenecer su fachada poblacional, buscando la agrupación de los jóvenes bolivianos. Segundo, buscó agruparse en un partido revolucionario que implicó su vinculación al MAS. Para impulsar el poder electoral de este partido político "revolucionario", la COB se enfocó en los organismos de poder obrero (asambleas populares revolucionarias y comités cívicos, entre otros). Finalmente, se buscó la unión de la COB con diferentes movimientos sociales.

Con este giro "táctico", los fuertes rasgos de anarco-sindicalismo (mezclados con el trotskismo) en la central, empezaron a ser reemplazados por un reformismo contundente de carácter institucional, adoptando una estrategia de lucha desde "afuera" del Estado, por uno que lo hace desde "adentro". Muchos líderes sindicalistas, incluyendo al propio Morales, se convirtieron en políticos (y ministros)<sup>28</sup> del gobierno. Para dar cuerpo a la nueva alianza para el cambio político, los movimientos sociales y el movimiento sindical, crearon la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) que representaba 16 agrupaciones de movimientos sociales.<sup>29</sup> La base histórica de esta agrupación, pensando en sus raíces sindicales, fue la fundación del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), en 1995, la cual pretendía transformar el movimiento sindical y sobre todo la COB (basada en ideas tradicionales, pactista y enfocada en asuntos prioritariamente laborales), en uno con fines emancipatorios, que generan disciplina sindical, al igual de la instauración de un enfoque movilizador (García, 2006: 29-30). A pesar de la estrategia de agrupar a una gran diversidad de movimientos sindicales en el movimiento sindical nacional, para pactar una alianza política, se han dado resultados muy positivos en la esfera electoral.

---

28. Algunos de los más destacados son: Víctor Cáceres (Ministro de Educación), ex sindicalista de los maestros; Célida Torrico (Ministra de Justicia), ex dirigente sindical campesina; igual que Alex Gálvez (ex Ministro de Trabajo), sindicalista, quien fue reemplazado, por complicaciones en su gestión, por Walter Delgadillo.

29. Información recogida en una entrevista a Pilar Uriona, mencionada previamente.

Al mismo tiempo, se ha dado un proceso centralizador que ha ido “callando” las posibilidades de expresión diversa en el gobierno. Como se evidencia en el creciente clima de tensión social y política, al gobierno del MAS le ha faltado un manejo institucional cohesivo que ayude a resolver los problemas políticos y sociales del país. Por supuesto, en Bolivia, los problemas van mucho más allá de los relacionados con la distribución del excedente; el racismo está muy enraizado en el pueblo boliviano, y hay una promoción de conflictos y enfrentamientos que sobrepasan asuntos económicos. El MAS ha hecho acciones para desconcentrar el Estado, dando un gran paso en la integración de los indígenas y sus prácticas cotidianas y culturales dentro de la sociedad “formal” del país. Pero aún les falta resolver la ambigüedad de su dirección política: aunque ha tomado el camino del poder electoral sigue teniendo una ideología de movimiento social, en vez de político –en el sentido de construir una estructura institucional–. Del otro lado, el MAS está muy centralizado, generando problemas de transparencia en la toma de decisiones. De otro lado, se ha argumentado que la base indígena del MAS es el pueblo aymara, que está concentrado en el occidente del país, dejando de lado y relativamente olvidados, a los otros pueblos indígenas (por ejemplo los quechua, tupi, guaraní y moxeña, entre otros).<sup>30</sup> Además, la falta de una integración amplia del pueblo boliviano en el programa estatal de Morales –sobre todo con respeto a la clase mestiza urbana– ha implicado grandes fraccionamientos culturales, de clases y en las regiones geográficas, las cuales ponen en entredicho la posibilidad de los proyectos de Morales y el MAS, en los próximos años.

---

30. En Bolivia hay 34 pueblos originarios.



## **ECUADOR: EL NEOLIBERALISMO, LAS LUCHAS POLÍTICAS Y EL SURGIMIENTO DE RAFAEL CORREA**

Ecuador, también vecino de Colombia, ha tenido grandes cambios políticos en los últimos años, que culminan con la llegada y consolidación de Rafael Correa Delgado como presidente del país. Representa el más reciente gobierno progresista/izquierdista de Suramérica en este estudio. Ganó la presidencia en segunda en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2006, en las que obtuvo un alto apoyo electoral, ilustrado en el 56,67% de los votos; mientras su opositor Álvaro Noboa (el magnate bananero) obtuvo el 43,33% –un amplio margen no visto desde 1992. En estas elecciones, Correa tuvo un gran apoyo nacional, ganando en 19 de las 22 provincias del país.

Correa, fue Ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacios. Se lanzó a la campaña presidencial en un clima político y social de mucha tensión, incertidumbre y frustración popular con el sistema político del país. Incluso, en vista del aumento de su popularidad, los sectores de la derecha ecuatoriana se aglutinaron en una campaña de “todos contra Correa” (Paz y Cepeda, 2007). Esta agrupación controló los medios masivos de comunicación ecuatorianos y tuvo el apoyo incondicional del sector empresarial, al igual que el de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su dominio económico y mediático, el fracaso de la estrategia de la élite neoliberal criolla, se debió a la arrogancia de

pensar que las frustraciones y la ira del pueblo eran cosas superficiales que no generarían un cambio en la trayectoria política del país. Después de tantas revueltas sociales, que culminaron en la destitución de dos presidentes en 2000 y 2005 (Buono y Lara, 2006), esa arrogancia fue castigada con el apoyo al gobierno de Correa y su prometida política de una "revolución ciudadana" que involucra la lucha contra la oligarquía política y su corrupción institucionalizada (Petras, 2009).

Antes de tratar el tema de las políticas estatales implementadas en los casi tres años de la presidencia de Correa, es pertinente situar este cambio político en la historia reciente de este país andino, ilustrando las conexiones que tuvieron el fracaso neoliberal, y el surgimiento de Correa y su movimiento oficialista Alianza País, para así poder captar las estructuras y tensiones existentes al momento de empezar su mandato presidencial.

### **Ecuador: otro caso del fracaso político-social del neoliberalismo criollo**

Siguiendo la tendencia latinoamericana, Ecuador tuvo su propio proceso de autoritarismo, con dos dictaduras militares, divididas en tres etapas (1963-1966; 1972-1976; 1976-1979). El primer gobierno militar promovió un modelo de desarrollo capitalista en el cual primó la intervención estatal como agente principal para lograr la modernización de los sectores productivos del país. Al lado de la promoción de proyectos de infraestructura, el gobierno militar inició la primera reforma agraria en la historia del país, combinando una política de modernización del sector agrícola con una que buscaba expandir su territorialidad, impulsando la colonización de tierras baldías a favor de la población campesina (Martín-Mayoral, 2009: 122-123). Junto con esta reforma agraria, el gobierno implementó una reforma tributaria, la cual generó más recursos fiscales al gobierno.

Después de un breve retorno a la democracia, el país volvió a las dictaduras militares, primero con el gobierno revolucionario-nacionalista del General Rodríguez Lara (1972-1976) y luego con un triunvirato militar (1976-1979), los cuales mantuvieron, en general, el modelo de desarrollo nacional iniciado en la década anterior. Aunque ambas dic-

taduras en los setenta, como era de esperarse, mantuvieron una política de represión social en contra de los diversos sectores y organizaciones de izquierda, también hubo unos acuerdos implícitos entre el gobierno de Rodríguez Lara y el Partido Comunista (PC) por el hecho de que él representaba una política nacionalista (Rodas, 2008).

Luego de dos décadas de incrementos relativos en la industrialización del país (en los cincuenta y en los sesenta), que pueden verse en el fuerte crecimiento de la inversión industrial que pasó de 15,6 millones de sucres, entre 1953 y 1957, en promedio, a 867 millones, entre 1969 y 1972 (Martín-Mayoral, 2009: 122), la trayectoria económica del país giró enormemente con el comienzo de la exportación del petróleo en 1972. En este mismo año se crearon la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y el gobierno sancionó la Ley de Hidrocarburos, la cual abrió la posibilidad de renegociar los contratos anteriores con las petroleras norteamericanas Texaco y Gulf. Tales cambios en este sector, junto con el aumento del precio internacional del petróleo ocurrido en los setenta, le dieron al Estado espacio y legitimidad para continuar su manejo macroeconómico, sobre todo de la mano del sector agroindustrial ecuatoriana (Ibíd.). En la segunda época de la dictadura militar hubo, a partir de 1976, un proceso paulatino que redujo la intervención en asuntos económicos, al mismo tiempo que se inició una leve apertura económica, y unas políticas monetarias basadas en el control de la inflación (Martín-Mayoral, 2009). Como parte de este cambio, el gobierno reformó la Ley de Hidrocarburos (1978) apenas un año después de que la Refinería Estatal de Esmeraldas empezara a funcionar.

Con la llegada de un gobierno elegido con gran popularidad en 1979, liderado por el reformista moderado, Jaime Roldós, el modelo de desarrollo “en manos del Estado” volvió a estar en el centro de la política nacional (Paz y Cepeda, 2009). Tras la inesperada muerte de Roldós, en un accidente aéreo en 1981, llegó a la presidencia, Osvaldo Hurtado, un académico latinoamericanista de trayectoria del pensamiento crítico. Este personaje inició una política basada en el “socialismo comunitario”, con enfoque en los sectores populares (Ibíd: 72). Su gobierno enfrentó una oposición fuerte de los sectores económicos dominantes, quienes denunciaron su tinte “comunista”. Al otro lado, el gobierno estuvo presionado por las centrales sindicales del país, agrupadas en

el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quien hizo campañas por la profundización de la reforma agraria planteada en 1979<sup>31</sup> (la cual estuvo ubicada geográficamente en la zona costeña), y otras políticas aún más radicales de las que proponía el gobierno.

Los años ochenta significaron la muerte para la política nacionalista y "pro-Estado", que se manifestó con el declive del precio internacional del petróleo combinado con el endeudamiento público, y que juntos generaron una gran inestabilidad económica. Luego vino la "crisis de la deuda", en agosto de 1982, primero en México y luego en el resto de la región, abriendo la puerta a un cambio político y el inicio del proceso neoliberal. Este giro lo simbolizó la presidencia del empresario, León Febres Cordero (1984-1988), quien promovió una relación muy estrecha con Estados Unidos y muy generosa para el gran capital (doméstico e internacional). Mientras el Estado era desmantelado de su función de agente regulador de la economía, se fortalecía como agente represivo, hasta el punto que, en enero de 1987, el mismo Congreso Nacional solicitó la renuncia de Febres por violaciones excesivas de la Constitución y a los derechos ciudadanos (Ibíd: 71). El siguiente presidente, Rodrigo Borja (1988-1992) de corte social-demócrata, no pudo cambiar el modelo pro-empresarial, no sólo por el fuerte dominio material del capital doméstico, sino también por el contexto global, en el cual, la derrota de la "cortina de hierro" indujo a un proceso congratulatorio del capitalismo y del libre mercado (véase: Friedman, 2005; Fukuyama, 1992). Durante la presidencia de Sixto Durán Ballén (1992-1996), el modelo empresarial se profundizó aún más con un fuerte impulso a las privatizaciones de empresas estatales (Martín-Mayoral, 2009). El rol del Estado durante este gobierno fue generar una estabilidad macroeconómica, supuestamente lograda, dándole prioridad a la deuda externa e implementando las políticas de ajuste estructural formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo este enfoque, la Superintendencia de Bancos cedió su control a las entidades financieras, medida que ayudó a profundizar la destrucción de la economía, una vez llegó la crisis financiera en 1999.

---

31. La Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario.

## La socialización de la deuda privada y la dolarización

La década de los noventa en Ecuador, trajo consigo la fragmentación social del país, representada en altas tasas de desempleo, precariedad laboral, privatizaciones masivas y una delegación activa al sector financiero para la libre acción. Incluso, mientras el país seguía dependiendo del sector petrolero, apareció una nueva fuente de ingresos: la creciente ola emigratoria ecuatoriana, por lo general, hacia Europa y a España en particular, se expresó en el aumento de las remesas que llegaban para aliviar la situación de desespero de la población de la clase baja y media. La situación social estaba severamente deteriorada y la frustración popular iba en aumento, con unas fuerzas sociales de oposición clamando por una Asamblea Constituyente (AC). Sin embargo, una vez reunida (entre noviembre de 1997 y mayo de 1998), la AC fue un fracaso, pues sufrió una gran devaluación como reforma profunda, debido a la crisis económica (Rodas, 2008: 208). En lugar de indicar un camino progresivo después de la rampante destrucción causada por dos décadas de obediencia a los dictados del Consenso de Washington, lo que se vino fue un proceso de socialización de las pérdidas del sector privado;<sup>32</sup> el Estado asumió el 72% del cargo de las entidades crediticias a un costo equivalente al 20% del PIB de 1998 (Martín-Mayoral, 2009: 130).

Como ha ocurrido en un sinnúmero de ocasiones en la política regional de las últimas décadas, los programas implementados por gobiernos no explícitamente derechistas, resultan muy distintos a los prometidos en las campañas presidenciales. Así fue el caso del presidente Lucio Gutiérrez, quien llegó al máximo cargo público como una figura “alternativa” del *establishment* (Rodas, 2008: 208-209), que atrajo varias fuerzas de la oposición agrupadas en la Sociedad Patriótica, y posicionó un discurso nacionalista y transformador. Pero más allá de su retórica, el militar de carrera mostró, en la práctica, sus afinidades

---

32. Al primer proceso de socializar la deuda privada tuvo lugar en 1983 con la “sucretización” de la deuda privada, en la cuál la deuda en dólares del sector privado se convirtió en sures y el gobierno se comprometió de asumir la deuda en dólares, de efecto subsidiando las pérdidas masivas del capital ecuatoriano. Véase: (Martín-Mayoral, 2009: 128)

con el imperio norteamericano; y el pueblo ecuatoriano, engañado una vez más, tuvo que buscar un nuevo líder político capaz de promover un giro político contundente, después de la destitución de Gutiérrez al 21 de abril de 2005. Palacios propuso poco en términos de transformación profunda, aunque progresó en algunos temas bilaterales; suspendió el TLC con Estados Unidos y modificó el apoyo incondicional que Ecuador había brindado permanentemente al imperio, con ramificaciones en la política de lucha anti-drogas y anti-guerrilla del Plan Colombia; además hizo una reforma de la Ley de Hidrocarburos para poder así, generar más recursos estatales. Sin embargo, no cumplió con la necesidad de convocar una asamblea constituyente para hacer una reforma política trascendental. Su ministro de economía, Rafael Correa, quien tuvo una larga lista de publicaciones que criticaban las políticas ortodoxas de los institutos multilaterales, decidió retirarse del gobierno, y con un fuerte apoyo social, se lanzó a la presidencia y una vez en la silla del poder, empezó a reconstruir su país. Para poder erigir un nuevo camino para el Ecuador, Correa necesitó, no sólo ganar en las urnas, sino también tejer alianzas y proponer estrategias para remodelar el papel estatal y las estructuras económicas e institucionales del país.

### **Correa: anti-partidario, pro-indio y populista de corbata**

Correa, en su campaña electoral, se presentó como el líder de una plataforma (Alianza País) que era un nuevo movimiento ciudadano ajeno a la estructura partidista tradicional. Utilizando el lenguaje neoliberal, en contra de los políticos, él habló de hacer “una terapia de *shock*” de los ciudadanos a los políticos (Minteguiaga y Gallegos, 2007). Tal estrategia tuvo éxito y una vez en el poder presidencial, Correa convocó una AC a través de un referendo, con la cual, él sí ganó con mucho margen, obteniendo el 83% de los votos. La popularidad de Correa iba en aumento mientras que la confianza popular en las instituciones del Estado mostró una caída asombrosa en el Congreso, que obtuvo tan sólo el 4% de apoyo popular (Ibíd.). Correa y ‘su’ movimiento atrajeron el descontento de dos décadas de modelo pro-empresarial y de la asociación con una clase política ‘regalada’ y un Estado desinstitucionalizado (Paz y Cepeda, 2007, 2009). El nuevo candidato durante su campaña

presidencial habló de la “larga noche neoliberal” y la “partidocracia”, apuntando directamente a los temas económicos.

Así pues, promovió una ley de responsabilidad (transparencia) fiscal y sostenibilidad de la deuda pública y fue activo en suscitar una actuación pública que acabaría con la dependencia financiera que los gobiernos regionales tenían con los institutos multilaterales. Prometió enfocarse en aliviar la crisis fiscal estructural producto de la deuda pública, exacerbada por los dos grandes salvamentos hechos por el Estado. También, propuso la necesidad de cambiar la estructura del gasto fiscal, retornando al centro del debate el gasto público social, en lugar de la complacencia a los intereses del capital financiero de otros gobiernos. Relacionado con este enfoque, repetidamente habló de la necesidad de reestructurar la deuda pública.

Como político de corte keynesianista, Correa insistió en incentivar la inversión (infraestructura) como fuente para generar empleo y productividad. Con respeto al mercado laboral, enfatizó en la necesidad de fortalecer la “economía social” y solidaria. Pero, aunque muchas de las proyecciones programáticas sonaran bastante bien, después de un largo período de políticas pro-mercado, la conexión entre discurso y praxis ha sido bastante ambigua. Ahora sí puede apuntarse a una evaluación concreta de las políticas implementadas en la presidencia de Correa.

### **El manejo macroeconómico del gobierno de Correa**

Para poder implementar muchas de las políticas prometidas durante su campaña, el presidente del Ecuador tuvo que avanzar en una reestructuración del Estado que le procurara la capacidad de intervención económica de la que había gozado antes de la contrarrevolución neoliberal. Para ello fue un reto diseñar una nueva Constitución, una vez tuvo las cuerdas del Estado. El 28 de septiembre de 2008, el proyecto de una nueva Constitución recibió el apoyo de la mayoría de la población ecuatoriana (con un 64% de los votos para el sí) y desde luego el gobierno se logró no sólo un amplio consenso electoral pero también la oportunidad de implementar reformas más profundas en las esferas políticas y económicas, enfocadas en aumentar la inversión social, dando protección especial a los sectores más vulnerados de la población igual

que mayor activismo y participación de la ciudadanía en la política. Pero tales propósitos requerían de acceso a recursos estatales considerables y para obtenerlos, el gobierno implementó varias políticas y reformas legislativas.

Mientras los ingresos fiscales mejoraron gracias al alza de los precios del petróleo en 2006 y 2007, las acciones del gobierno ayudaron a reforzar estos incrementos. El gobierno propuso una *Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria* (29 de diciembre de 2007) la cual creaba un impuesto del 70% a los ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas que tuvieran contratos suscritos con el Estado en el sector de la explotación y exportación de recursos no-renovables, para aquellas ventas superiores a las pactadas (Martín-Mayoral, 2009: 133). Siguiendo esta línea, el gobierno eliminó los Fondos Extraordinarios, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, (Feirep), la Cuenta Especial de Reactivación Económica, Productiva y Social (Ce-reps) y el Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero (Feiseh). Estos fondos recibían sumas significativas de los ingresos fiscales, pero con la reforma, el dinero entraría directamente a la cuenta única del Tesoro, restringiendo las posibilidades que tenían las empresas extranjeras de aumentar su porción de la torta sin contar con las necesidades fiscales del Estado. En octubre de 2008, Correa ratificó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, poniendo nuevas condiciones para la explotación y exportación del petróleo; una de las cuales consistía en que el Estado recibía una participación del 70% en los proyectos suscritos en el sector (Ibíd.). Estas medidas, junto con un manejo responsable del Servicio de Rentas Internas y la consolidación del papel de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) aseguraron un aumento en el recaudo fiscal en los primeros dos años del mandato de Correa (Paz y Cepeda, 2009: 74).

### **Las políticas sociales del gobierno**

Con el incremento en los recursos fiscales, el gobierno de Correa creó programas sociales para atender las necesidades de las clases más vulnerables del país. Pero ello no se logró sólo con el incremento del recaudo fiscal; también hubo un cambio en las prioridades de transferencia

de los fondos estatales. Mientras que los gobiernos anteriores habían puesto la prioridad sobre el pago de la deuda sin pensar en el gasto social, en 2008, el nuevo gobierno invirtió más recursos en programas sociales que en el pago de la deuda pública (31% del PIB para aquellos y 20%, para la deuda) (Martín-Mayoral, 2009: 133).

El programa al cual se le destinaron mayores recursos fue al *Bono de Desarrollo Humano* (BDH), cofinanciado por el Banco Mundial (BM) y destinado a las familias más pobres para acrecentar su capacidad de consumo alimenticio y promover el desarrollo de su capital humano. Entre 2006 y 2007 los beneficiarios de este programa aumentaron en un 3,6%, cubriendo al 63,8% de la población más pobre (el quintil más bajo) y 48,6% de la población perteneciente al quintil dos (Ibíd.). Igualmente, el bono pasó de 15 a 30 dólares mensuales (Ospina, 2008: 8) Al lado de este programa, hubo un aumento en la inversión a la vivienda de interés social, a través del *Bono de la Vivienda*, que pasó de 1.800 a 3.600 dólares; lo mismo ocurrió en los sectores de la educación, la salud, y el bienestar social.<sup>33</sup> El gobierno de Correa, además, implementó políticas subsidiarias para estabilizar los precios de algunos productos y servicios (harina, fertilizante y transporte público) y disminuyó la tarifa eléctrica para los hogares más pobres del país (Ibíd.). Como resultado, las tasas de pobreza y pobreza extrema (medidas por ingresos) se han reducido durante el gobierno de Correa.<sup>34</sup>

### **Las políticas laborales y sindicales: grandes pasos hacia la protección del trabajador**

En el marco de la reestructuración política y social, los cambios en el ámbito laboral y sindical tuvieron un correlato en la Nueva Cons-

33. En salud la inversión pasó del 1,3% del PIB, en 2006 a 1,4%, en 2007; en educación el aumento llegó al 3,1% en 2007, frente al 2,7%, del 2006; y el bienestar social creció del 0,9% en 2006 a 1,2% en 2007.

34. La pobreza nacional urbana-rural, de acuerdo a las cifras del INEC, pasó del 37,6% en diciembre de 2006, a 36,74% en diciembre de 2007; y, para junio de 2008, se redujo hasta el 34,97%. Con respecto a la pobreza extrema, mientras que en diciembre de 2006 estaba en el 16,89%, para el mismo período de 2007, era del 16,45%, para situarse en junio de 2008, en el 15,49% (véase: Martín-Mayoral, 2009: 133).

titución Política del país. Los pasos dados hacia la mejora en las relaciones de trabajo estuvieron enmarcados en una visión renovadora de los derechos laborales. En primer lugar, el gobierno proclamó "ilegal" la tercerización, al igual que la intermediación y el trabajo por horas (artículo 3), y le dio mayor énfasis al derecho a la seguridad social para todos los trabajadores. En segundo lugar, la Constitución también le dio una protección especial a los empleados dedicados a la realización de actividades complementarias de vigilancia, seguridad, mantenimiento y alimentación, entre otras acciones ajenas a las labores propias del proceso productivo de las empresas: el Estado, siguiendo las líneas del keynesianismo, "impulsará el pleno empleo, la eliminación del subempleo y del desempleo" (artículo 2, parágrafo 1). Así mismo el artículo 1 de la Nueva Constitución reconoce "todas las modalidades de trabajo como sectores sociales productivos, sean en relación de dependencia o autónomos e incluidas a las labores de autosustento y cuidado humano". Esto le brindaría protección a los y las trabajadoras domésticas y del cuidado, generalmente ignoradas en las legislaciones laborales.

En términos de institucionalidad de la esfera laboral, el gobierno de Correa (confirmado nuevamente como Presidente el 10 de agosto de 2009), creó el nuevo *Ministerio de Relaciones Laborales*, fusionando el Ministerio del Trabajo y Empleo y la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones (Senres). En este nuevo ministerio fue nombrado Richard Espinosa, quien reemplazo a Antonio Gagliardo, previamente Ministro del Trabajo y Empleo. Correa, en este periodo, enfatizó su política laboral para "lograr que ninguna empresa se considere rentable hasta no alcanzar para cada uno de sus trabajadores un salario verdaderamente digno" (*El Diario*, 13 de agosto de 2009). Parte de esta política estuvo basada en la transformación paulatina de la figura del "salario mínimo", a una figura de "salario justo" (o remuneración justa: artículo 4 de la Constitución). Este cambio en la institucionalidad estatal-laboral no fue el único que se impulsó, pues también aumentó el salario mínimo en un 17,6% en 2007, y en un 9% más, en 2008; aunque para el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), las medidas tomadas en el 2008 fueron insuficientes.

Con respecto a las políticas sindicales, la Nueva Constitución promueve la protección a la libertad sindical sin autorización previa (artículo 2, parágrafo 7); en el sector público, los trabajadores serán representados por una sola organización (artículo 2, parágrafo 9); y el derecho a la huelga será protegido (artículo 2, parágrafo 15). Sin embargo, estos avances en materia laboral, no han sido de buen recibo para las organizaciones sindicales del país. Al final de 2008 hubo un llamado a la movilización por parte de la *Coordinadora Nacional de Sindicatos del Sector Público* para presionar una reforma al Código del Trabajo y la expedición de las Leyes del Servicio Público y Empresas Públicas. Esta agrupación pretendía revisar los contratos colectivos del sector público que el ex ministro Gagliardo, había impuesto sin negociación previa.<sup>35</sup>

Pero a pesar de los logros en materia laboral, aún existen problemas estructurales en el manejo de las relaciones laborales del país. Pues, por ejemplo en el sector petrolero, que es una gran fuente de recursos estatales, el gobierno se ha enfrentado con una fuerte oposición sindical, debido al ataque que hace sobre el no cumplimiento con la normatividad constitucional sobre el respeto a la restricción del derecho a la huelga. Igualmente, a pesar del nuevo enfoque sobre el salario justo y las medidas redistributivas (que hacen parte de su modelo del “Socialismo del Siglo XXI”), el gobierno de Correa ha lanzado una campaña ambivalente, pues, por un lado ataca a la clase capitalista de Guayaquil (en particular, el sector de agro-comercio), pero le entrega subsidios a los capitalistas establecidos en Quito (Petras, 2009).

Así mismo, en el sector de las telecomunicaciones, ha otorgado el monopolio a algunas empresas privadas, una política que no obedece al discurso de promoción de la soberanía y la protección a los intereses nacionales en sectores estratégicos. Pero tal vez, la actuación más cuestionable de la política del gobierno de Rafael Correa, tenga que ver con su manejo del territorio ocupado por indígenas y pequeños campesinos en zonas de explotación petrolera. Correa, en su afán de promover la explotación como fuente de ingresos fiscales, se ha negado a negociar con las comunidades indígenas de la Amazonía y la zona andina, que

---

35. Véase: <http://www.kaosenlared.net/noticia/ecuador-trabajadores-publicos-unencontra-politica-laboral-correa> (fuente consultado el 23 de noviembre de 2009).

en general rechazan el modelo de desarrollo extractivo y no sostenible. Correa ha atacado a los movimientos indígenas y ecologistas, tildándolos de “elementos atrasados” (Petras, 2009), sin tener en cuenta que, incluso, la gran contaminación ecológica de empresas como la Texaco, han sido denunciadas en las cortes norteamericanas. Estas acciones muestran una contradicción en su discurso, en el cual habla de un apoyo al “indigenismo”<sup>36</sup> como pensamiento latinoamericano alternativo, mientras sus acciones muestran una preferencia por la explotación minera, en lugar de hacerlo sobre una implementación de una política de reforma agraria.

### **Papel del movimiento sindical dentro del gobierno de Correa**

El movimiento sindical ecuatoriano le dio un gran apoyo al ascenso de Rafael Correa participando activamente en su campaña electoral para la presidencia.<sup>37</sup> Aunque la débil posición del movimiento sindical en la propuesta política de Correa –debido a la fuerte y continua represión en contra de las organizaciones sindicales durante los ochenta y noventa (Petras y Veltmeyer, 2006)– limitaba las propuestas del Movimiento Popular Democrático (MPD), el sindicalismo obtuvo una voz clara dentro de la alianza política del presidente. Sin embargo, la asociación del sindicalismo con el movimiento Acuerdo País, no siguió líneas organizativas pues su participación se hizo a través de personas con trayectoria sindical. Esto debilitó la ‘participación’ y la presión que hubiera podido haber hecho el sindicalismo en el gobierno; pero, por su lado, Correa también ha adoptado, en buena parte, la estrategia de Morales, la cual basaba su coalición de partido en un ámbito general de persona-

---

36. Vale la pena subrayar que el “indo-americanismo”, como pensamiento político tiene sus raíces en la década de los treinta en el siglo XX, asociado con el escritor marxista peruano, Mariatagú, y el líder del movimiento político APRA, Haya de la Torre. También fue parte del discurso del partido socialista chilena, del movimiento sandinista de Nicaragua, igual con los discursos del líder revolucionario de El Salvador, Farabundo Martí.

37. Este punto fue reiterado en una entrevista con Guillermo Elías Touma, sindicalista de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales Campesino e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE), hecha por Diana Patricia Cárdenas Quintero de la Escuela Nacional Sindical de Colombia.

lidades, pocas de las cuales representan organizaciones bien estructuradas (Lanzaro, 2008). Por eso Correa ha mantenido un cierto dominio sobre el movimiento sindical, aunque lo ha incorporado en su proyecto político, pero bajo su mandato y de acuerdo a sus intereses. Es por ello que a pesar de los grandes avances en materia laboral, aún existen problemas, por ejemplo la falta de voluntad del gobierno para promover la aplicación de una reforma laboral ya aprobada (Uriarte, 2009: 42).

Pero hay que entender que el progresismo de la Nueva Constitución en materia laboral, se logró por la presión de las centrales sindicales ecuatorianas<sup>38</sup> que fueron las que impulsaron las propuestas en la AC, la mayoría de las cuáles fueron incorporadas a la Nueva Constitución. Por supuesto, la afinidad del movimiento sindical con el gobierno de Correa no ha sido compartida por todas las organizaciones sindicales. El sindicato de trabajadores petroleros, como ya se ha dicho, ha mantenido una posición opositora al gobierno, pero sin obtener mucho apoyo de la población ecuatoriana, la cuál se expresó cuando los candidatos por la AC de la oposición sindical no obtuvieron los votos requeridos para poder participar en este evento político. Las dificultades del movimiento sindical ecuatoriano, por fuera de las apuestas sectoriales y de oposición, son la falta de una unidad del movimiento, ya que la central con más trayectoria histórica en el país (la FUT), fue duramente golpeada en las pasadas décadas y aún no ha podido recuperar su liderazgo sindical.<sup>39</sup> Esta situación implica una correlación de fuerzas muy heterogéneas y aún más fragmentadas por el estilo personalista que Correa ha manejado los asuntos principales de la gobernanza del país.

---

38. Las centrales sindicales de Ecuador son: el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC), y la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE).

39. Este punto fue aclarado en una entrevista con Jenny Londoño López, dirigente de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, hecha por Diana Patricia Cárdenas Quintero de la Escuela Nacional Sindical de Colombia.



## **URUGUAY: LA LARGA TRADICIÓN IZQUIERDISTA PARTIDARIA CONQUISTA EL PODER ESTATAL**

Uruguay, un pequeño país al sur del continente, ubicado entre los dos gigantes de la región (Brasil y Argentina), ha sido reconocido popularmente por tener unas instituciones y un sistema político poco comunes en la región latinoamericana. Uruguay tiene una larga historia de políticas progresistas, muchas de las cuales habrían sido miradas con envidia por los países supuestamente más desarrolladas; la jornada laboral de ocho horas se consagró en Uruguay antes que en Estados Unidos y su modelo de Estado de Bienestar no se limitó a poner en práctica la legislación de protección social más avanzada de su tiempo, sino que además se complementó con políticas de integración y desarrollo cultural y una educación de las masas populares (Galeano, 1971: 274). Incluso, a finales de los ochenta, se le llamaba la “Suecia de América Latina” (Burchardt, 2006). No obstante, tal imagen no se refleja en los hechos históricos recientes del país, sobre todo con respeto a la dictadura militar que socavó la sociedad por 12 años (1973 a 1985) y al periodo neoliberal que salió de las llamas militares para poner en marcha su política de mercado por quince años consecutivos. Pero, como muestra de la fortaleza institucional y la solidez de la izquierda uruguaya, aún después de haber sufrido repetidas derrotas electorales (igualmente por represión estatal), en octubre de 2004, la coalición pluralista-izquierdista del Frente Amplio (FA), encabezada por Tabaré

Vásquez, salió victoriosa en las elecciones presidenciales, marcando una nueva trayectoria política para el país.

La conquista del poder presidencial de la izquierda uruguaya y específicamente la del el Frente Amplio, tiene poco en común con las experiencias de las fuerzas sociales progresistas de los tres países ya examinados. En Uruguay, la lucha política de las organizaciones y movimientos sociales de tinte izquierdista, tuvo gran expresión en los años sesenta. En 1964 se fundó la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), una expresión más organizada de los Frentes de Liberación (o Unidades Populares) de la década de los cincuenta. Al mismo tiempo aparecieron fuertes movilizaciones estudiantiles y expresiones de quejas y reclamos sociales. Como forma de dar estructura política a esta masa de inconformidad social, en 1971 el Frente Amplio nace como una organización política pero con objetivos que pretendían ir mucho más allá de la mera conquista electoral (Elías, 2008). La aglomeración de fuerzas sociales en este partido político, proyectaba una transformación contundente del país, promoviendo los objetivos muy bien resumidos por su primer presidente, General Líber Seregni:

Tenemos [...] “un verdadero, un auténtico proceso revolucionario, porque el que nuestro frente se propone es no sólo el cambio profundo de las estructuras, sino la sustitución de las clases en el poder. Desplazar del poder a la oligarquía y llevar el pueblo a gobernar” (citado por Elías, 2008: 107).

En el mismo año de su fundación, el Frente Amplio participó en las elecciones presidenciales unido a los partidos comunista, socialista y demócrata cristiano, a algunos individuos y personalidades frustradas con los partidos tradicionales y otras oficiales (Fuerzas Armadas). En esta alianza, el Frente Amplio obtuvo el 18% de los votos, demostrando una fuerza electoral prematura pero en ascenso. Sin embargo, los objetivos de conquistar el Estado tuvieron que ser ajustados a la realidad social del país, cuando el 27 de junio de 1973 hubo un golpe cívico-militar en Uruguay, que implementaría por más de una década políticas de terrorismo estatal con ejecuciones masivas, torturas, desapariciones, encarcelamientos y expulsiones.<sup>40</sup>

---

40. El general Seregni quien ocupó la presidencia del Frente Amplio hasta 1996 fue

## El Estado en el Siglo XX en Uruguay: el Batllismo

En el Uruguay, desde los inicios del siglo XX, el Estado tomó un rol intervencionista en el manejo y la regulación económica. Incluso, su camino de desarrollo industrial fue mucho más allá de lo implementado en otros países del continente,<sup>41</sup> culminando en la *excepcionalidad* uruguaya basada en su “batllismo” (Arocena, 2005; Galeano, 1971). Este término se refiere a las políticas desarrolladas por el presidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907; 1911-1915), y máximo dirigente del Partido Colorado por muchos años. De acuerdo a Arocena (2005: 148), bajo su liderazgo, el Estado uruguayo se ligó a dos principios y prácticas: primero, el pionero Estado de bienestar, construido durante las primeras décadas del siglo XX. Segundo, una ideología que primaba el papel del sector público en la resolución pacífica de los conflictos sociales, impulsando la protección social y la redistribución de la riqueza, igual que la defensa de la industria nacional y el empleo. El batllismo promovía la sindicalización de los obreros, al igual que estimulaba la industria e intentaba construir empresas estatales públicas como fuente de empleo y estabilidad fiscal.

Durante la dictadura militar, el Estado batllista siguió su línea general aunque con un enfoque creciente sobre las necesidades del imperio norteamericano. De acuerdo a O'Donnell (1988) los golpes de Estado en el Cono Sur del continente (Argentina: 1966 y 1976; Chile: 1973; Brasil: 1964; Uruguay: 1973) ocurrieron, en gran parte, por las reconfiguraciones de clase y las crecientes demandas sociales, las cuales no pudieron ser incorporadas al Estado, quebrando así, el frágil “compromiso del Estado” que existía hasta estos tiempos. Aunque en Uruguay, no hubo un cambio económico tan dramático como el ocurrido en Chile, la fuerte represión social impulsó el rompimiento de las

---

encarcelado por la dictadura casi 10 años, igual que el exitoso candidato de las elecciones presidenciales de noviembre de 2009, José ‘Pepe’ Mujica, quien estuvo preso por 13 años.

41. Podemos decir que fueron pocos los países latinoamericanos que implementaron una política robusta de sustitución de importaciones (ISP en inglés), entre ellos Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Uruguay, véase: Gereffi y Korzeniewicz (1994); Hira (2007); Portes (2004); Portes y Bryan (2008).

estructuras del modelo batllista. Pero igual que pasó en otros países latinoamericanos,<sup>42</sup> no fue sino hasta el retorno a la democracia que la fuerza neoliberal se posicionó de manera formal.

### **Vuelva la democracia, llega al neoliberalismo**

Con el retorno de la democracia liberal burguesa, en 1985, el Frente Amplio retomó su papel como fuerza política en ascenso, surgiendo de nuevo en las elecciones locales de 1989, en las que el candidato Tabaré Vázquez, ganó la intendencia de Montevideo, la ciudad donde vive más del 40% de la población uruguaya. Tal logro político fue sorprendente, dado que en el contexto global, el comunismo sufría su derrota y las fuerzas izquierdistas-socialistas implosionaban debido a una supuesta ruina de sus bases ideológicas y políticas. Pero, en Uruguay, aunque tal evento causó una lesión severa al Partido Comunista, hasta aquel momento la primera fuerza izquierdista del país, el Frente Amplio salió, no sólo saludable, sino más fuerte; y en los primeros años de los noventa, se posicionó como la única fuerza de izquierda partidaria de Uruguay (Arocena, 2005). Sin embargo, detrás del ascenso político del Frente Amplio,<sup>43</sup> se venía moviendo con fuerza el neoliberalismo uruguayo como política de cambio, inspirada en el primer gobierno no Colorado del siglo XX, encabezado por Luis Alberto Lacalle quien ganó las elecciones presidenciales en 1989, asumiendo la presidencia en marzo de 1990 como representante del Partido Nacional (PN).

Tal vez el éxito electoral de los gobiernos de centro-derecha, en los primeros años de la transición regional hacia la democracia, tenga que ver con los demoledores impactos sociales de los regímenes dictatoriales. Una vez instalada la 'normalidad democrática', se hacía necesario apaciguar los reclamos sociales profundos, dándole prioridad a la 'armonía' y la moderación política. Un autor describe este cambio como un viraje desde el "*movimiento nacional-popular* hacia el *movimiento democrático*, es decir, hacia un movimiento central que, por vez pri-

---

42. Aquí resaltan los casos de Uruguay, Bolivia, Ecuador, y Brasil.

43. El Frente Amplio mostró su poder de convocatoria en las elecciones posdictadura, al obtener más del 20% del voto popular en las elecciones de 1984 y las de 1989.

mera, no se orienta hacia el cambio social radical y global, sino hacia el cambio de régimen político” (Garretón, 1997: 28). El cambio político que prometió el partido ganador, el PN, fue más que todo, una ilustración de esta tendencia moderada de la política, en la cual los proyectos electorales de los partidos tradicionales no se diferencian en mucho. Incluso, las viejas bases sociales y de clase que separaban los dos partidos tradicionales uruguayos no existían ya después de los años sesenta (Waksman 1997).<sup>44</sup> Lo que Lacalle representó entonces, fue una vuelta al modelo de desarrollo pro-estatal. Aunque él firmó el acuerdo de Mercosur, pareció más una estrategia de apertura económica a favor de las grandes empresas, tanto uruguayas como latinoamericanas. Lacalle, siguiendo la línea del Consenso de Washington y los dictados del Banco Mundial (BM), eliminó los *Consejos de Salarios* en 1991. Él también intentó hacer (en cuatro ocasiones) una reforma al sistema de seguridad social, pero hubo que darle espera hasta al próximo gobierno, el de Julio María Sanguinetti (1994-1999) que implementó una reforma que creó un régimen mixto, basado en el modelo chileno, pero más acorde con el modelo colombiano.

El gobierno de Sanguinetti desarrolló dos objetivos primordiales: promover un combate contra la inflación, para atraer la inversión y la estabilidad monetaria; y aprobar la reforma política cuya base se centró en la reestructuración del sistema electoral con la introducción del balotaje presidencial –que le causaría grandes problemas al Frente Amplio en las elecciones de 1999– como lo mostró la tendencia electoral de entonces (Elías, 2008; Waksman, 1997). Con la aprobación de esta reforma, primero, por el Parlamento, y luego por referendo (50,45% de la votación), las esperanzas del Frente Amplio de conquistar el poder presidencial en las urnas, en 1999, se vieron frustradas. La fuerza política izquierdista de Uruguay tendría que esperar otro turno en la oposición hasta obtener la silla presidencial en las elecciones de octubre de 2004.

---

44. Este autor argumenta que a partir de los sesenta, la base del Partido Colorado (en Montevideo y en la industria) y la del Partido Nacional (en el interior del país y en el sector de agropecuario) ya no se diferenciaban de manera profunda. Véase: Waksman (1997).

## La victoria del Frente Amplio y la ascensión de Vázquez como Presidente

Después de tantos fracasos electorales, en octubre de 2004 la nueva alianza de la izquierda en el país (*Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría*), con su candidato único Tabaré Vázquez, conquistó las elecciones en la primera vuelta electoral, constituyéndose como el primer gobierno de izquierda en la historia del país. La alianza de la izquierda había derrotado, de manera contundente, a los partidos tradicionales. El PC obtuvo tan sólo el 10,3% de los votos y el PN alzó el 34,3%; pero, la fortaleza política de la alianza estratégica se demostró cuando, durante el primer año del gobierno de Vázquez, todas las fuerzas de la agrupación ingresaron, formalmente, al Frente Amplio (Elías, 2008).

Esta conquista presidencial, después de una larga trayectoria política en la oposición y en la exclusión (durante la dictadura), con algunos gobernantes y algunas alcaldías locales y con una fuerte asociación con el movimiento sindical y otros grupos sociales, señala al Uruguay como un caso muy particular, comparado con los otros países evaluados en este estudio. El Frente Amplio no sólo se posicionó como la fuerza mayoritaria en el Parlamento,<sup>45</sup> sino que también fue el partido ganador en las elecciones departamentales en mayo de 2005, conquistando ocho de los departamentos del país. Varios autores han indicado la fortaleza institucional del gobierno de Vázquez, calificándolo como un gobierno con el mayor carácter socialdemócrata de la región (Alcantará, 2008; Lanzaro, 2008; Panizza, 2008; Ramírez, 2006). Y a pesar de su muy pronunciada estructura organizativa, el Frente Amplio mantiene su militancia política y sus bases organizativas, que son cosas bastante ausentes en los casos de Chile y de Brasil (Elías, 2008; Lanzaro, 2008; Sader, 2009). Y como se demuestra las elecciones presidenciales

---

45. La tendencia mayoritaria del Frente Amplio continuó en la posterior presidencia de José Mujica, luego de que, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre de 2009, éste consiguiera 50 diputados (frente a 30 del PN, 17 del PC, y 2 de los partidos independientes). El Frente Amplio también obtuvo 16 curules en el Senado.

recientes,<sup>46</sup> su poder electoral no se base tanto en su candidato, sino en la trayectoria política del partido y su proyecto gobierno. Entonces, con tantas muestras positivas de la fortaleza y popularidad del partido y del gobierno de Vásquez, vale la pena mirar más a fondo las políticas implementadas durante el período presidencial de Vásquez (2005-2009).

### **El manejo de la economía del partido izquierda-FA**

Tabaré Vásquez tomó las riendas del poder luego de una profunda crisis que había empezado en 2002, la cual generó una gran deuda social: en 2004 se estimaba que el 41% de la población estaba en situación de vulnerabilidad social y económica, una tasa que llegó a 61% en los menores de 18 años (Elías, 2008: 113). Sin embargo, comparado con otros países latinoamericanos, Uruguay no sufrió tanto la desregulación laboral, dado que su proceso de implantación neoliberal fue más paulatino, dada la fuerte oposición de la izquierda (Bergamino, 2005; Erimida, 2009). No obstante, hubo un deterioro significativo del mercado laboral: el salario real disminuyó el 23%, entre 1998 y 2004; el desempleo creció de 10,1%, en 1998, a 16,9%, en 2003; los ocupados con problemas de empleo o ‘subempleados’ se doblaron, pasando de 20,3%, en 1998 a 44,6%, en 2003; y siguió creciendo la brecha entre productividad laboral y salario real (Elías, 2008: 114). Hubo mucho trabajo para aliviar la situación de la clase trabajadora y la clase en situación de vulnerabilidad, pero el gobierno de Vásquez se encontraba frente el dilema de nuestro siglo: ¿cómo mantener la confianza inversionista mientras se promueve una política distributiva?

En la esfera macroeconómica, la tendencia del gobierno de Vásquez ha sido clara: buscar, antes que todo, la inversión privada extranjera como fuente de crecimiento, mientras se mantiene una política monetaria prudente. Tal estrategia se expresó en las palabras del Ministro de Economía del gobierno de Vásquez, el economista ortodoxo, Danilo Astori, quien dijo: “Para hacer algo en serio por los uruguayos

---

46. La segunda vuelta en las elecciones presidenciales uruguayas tuvieron lugar al domingo 29 de noviembre en las cuales el candidato del Frente Amplio, José ‘Pepe’ Mujica, triunfó como presidente, obteniendo 50,1% y 51,5% de los votos según los primeros sondeos, véase: (El Espectador, 29 de noviembre de 2009).

que viven en la indigencia, necesitamos hacer los acuerdos con el FMI, alimentar el clima de negocios, para que haya inversiones que generen empleo y, de ese modo, contribuyan a disminuir y erradicar la pobreza. Eso es de izquierda" (citado por Elías, 2008: 122).

Siguiendo tal línea, el gobierno firmó un acuerdo de pago de la deuda con el FMI en junio de 2005, sin buscar renegociar intereses, tiempos, o la 'legalidad' de la deuda (tal como han hecho en numerosas ocasiones Chávez y Correa en sus respectivos países). Al contrario, el gobierno de Vásquez continuó cancelando los pagos de la deuda,<sup>47</sup> asumiendo los costos sociales que ello implicaba. Otra política con tinte más neoliberal que progresista fue la *Reforma Tributaria* (Ley 18083 de julio de 2007). No obstante, su publicitado propósito de generar más equidad en el sistema impositivo, estableciendo la carga tributaria con la capacidad de contribución de los distintos sectores sociales y económicos, esta reforma resultó ser más positiva para el capital que para el trabajador. Y tal vez, la política económica que más cuestiona el supuesto progresismo de Vásquez, es la forma como el Ministro de Economía propuso y trató de implementar los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y China, a pesar de que tales proyectos fueron declarados como contrarios a los intereses partidarios del Frente Amplio (Elías, 2008: 133). Luego de varios meses de debate, el propio presidente Vásquez tuvo que renunciar al TLC con Estados Unidos debido a que, de haberlo firmado, le hubiera costado la ruptura con el Mercosur.

### **Las políticas sociales del gobierno del Frente Amplio**

Uno de los programas más promocionados por el gobierno de Tabaré Vásquez fue el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PLANES) el cual buscaba atender la indigencia, la extrema pobreza y la exclusión social. Como estrategia, el programa formuló una atención integral que funcionaría en los primeros dos años de su mandato.

---

47. El total de la deuda pública es de 13,428 millones de dólares, una suma que es mucho mayor que el PIB del año de 2004, véase: (Elías, 2008: 123).

Se destaca, en esta línea, el ingreso ciudadano, el apoyo alimentario y el alojamiento de personas en situación de calle. Como forma de ‘devolverle’ a la ciudadanía, el plan ofrece acceso temporal a servicios sociales (salud, seguridad social, educación, hábitat saludable) a las poblaciones más vulnerables y excluidas de la sociedad.

Otro programa implementado por el gobierno fue el Plan de Equidad que promovió una política redistributiva en el país, reduciendo las desigualdades existentes. Como parte de este plan se implementó la llamada “malla” de protección social, favoreciendo las poblaciones más jóvenes para poder así corregir los desbalances sociales intergeneracionales.

Como reestructuración institucional, el presidente creó el Ministerio de Desarrollo Social que asumió la función de implementar y monitorear los programas ya mencionados, así como coordinar al conjunto de prestaciones sociales que brinda el Estado y dar cobertura institucional a una gama de institutos sociales.<sup>48</sup>

Con respecto al sistema de seguridad social, el gobierno de Vázquez no planteó una agenda concreta de reformas, a pesar de las peticiones de la coalición del Frente Amplio. Sin embargo, el gobierno promovió un diálogo nacional sobre seguridad social, en el que se discutirían problemas del sistema vigente (reglamentado bajo la Ley 16713 de 1995), al igual que los propósitos de la reforma.

En la esfera de la salud, el gobierno hizo una reforma que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) (Ley 18211 de diciembre de 2007); el Fondo Nacional de Salud (FONASA) (Ley 18131); y el proyecto de ley que crea la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) (Ley 18161 de junio de 2007). Las innovaciones de estas propuestas se fundamentan en tres aspectos:

- Promover un modelo de atención de salud, a través de la jerarquización del primer nivel de atención;
- En la forma de gestión, mediante la articulación de servicios públicos y privados, con un órgano central de gobierno (la Junta Nacional de Salud); y

---

48. Por ejemplo, el Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU).

- En el sistema de gasto y financiamiento del sector, a través de la creación de un fondo único de salud (Fonasa) administrado centralmente. Los usuarios del sistema tendrían derecho a su propia cobertura en salud, la de sus hijos menores de 18 años y en el futuro, de sus cónyuges. Además, se incorpora a los trabajadores públicos al sistema formal de salud.

La reforma al sistema de salud busca fortalecer al sector público, con el fin de poder ofrecer sus servicios de manera más equitativa de lo que lo hacían los subsistemas duales.

Al lado de este significativo cambio para la población uruguaya, hubo varias políticas de reforma en el gobierno de Vásquez, la mayoría de ellas con fuerte impacto en el mercado laboral.

### **Las políticas laborales del gobierno de Vásquez y la influencia del movimiento sindical**

Como ya se ha dicho, en Uruguay, el dominio neoliberal no generó tantos cambios negativos en el mercado laboral, como en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos. Parte de la explicación la da el papel que jugaron los gremios sindicales en la transición democrática, después de la dictadura militar (lo que no se dio en los casos de Chile o Brasil, por ejemplo). En Uruguay, en la década de los noventa, aunque la negociación laboral se había debilitado, el movimiento sindical logró mantenerse aglomerado en una central (la PIT-CNT)<sup>49</sup> luchando contra las reformas promovidas por los gobiernos de corte neoliberal y utilizando los mecanismos constitucionales para la revocatoria de proyectos legislativos, a través del referendo. Fue así que muchas propuestas para privatizar empresas estatales fueron derrocadas por la movilización masiva del movimiento sindical y del Frente Amplio (Lanzaro, 2008: 56).

Una vez que el Frente Amplio estuvo en el poder, el movimiento

---

49. La Convención Nacional de Trabajadores se fundó en 1964, pero fue declarada ilegal por la junta militar en 1973. En 1982, el movimiento obrero uruguayo creó el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT). En 1984, en vísperas de la transición democrática, se conformaron la PIT-CNT como muestra de unidad sindical del país.

sindical hizo presión (desde adentro y desde afuera) para que los temas laborales fueran muy visibles en la agenda gubernamental. En general, este esfuerzo logró avances significativos en materia laboral, de los cuales se resaltan: una política para las clases trabajadoras a través de medidas de salarios justos; la regulación de la relación capital-trabajo, protegiendo la fuerza más débil y la protección de los fueros sindicales; unas políticas combativas contra la informalidad; políticas que favorecían la afiliación sindical igual que su funcionamiento y organización; y finalmente, la ya mencionada reforma al sistema de salud (Ibíd.).

Un mayor detalle en estas políticas, se presenta en una reforma ejemplar: la Reinstalación de los Consejos de Salarios, que habían sido eliminados en el gobierno de Lacalle (1991). Estos consejos reestablecieron categorías, sueldos mínimos por categoría y generaron un gran impulso a la sindicalización. Este mecanismo también promueve el uso de la negociación colectiva. Luego de esta reforma se incorporó, por primera vez en la historia uruguaya, una negociación de los asalariados rurales.

Protegiendo el derecho a la asociación sindical, se aprobó, al 22 de diciembre de 2005, la Ley de Libertades Sindicales (Ley 17940), la cual prohíbe la discriminación contra sindicalistas y se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical; también la actividad sindical es facilitada por medio del permiso otorgado a la distribución de boletines y publicaciones sindicales. Esta medida tuvo un efecto bastante positivo, demostrado tras el aumento, en casi el doble, de los efectivos afiliados al PIT-CNT, que a mediados del 2007 alcanzó la cifra de 250.000 trabajadores. De modo parecido al caso boliviano, pero con un enfoque más específico, en Uruguay hubo una ley de Regulación al trabajo doméstico (Ley 18065 de noviembre de 2006), que limitó las jornadas laborales, fijó unos descansos intermedios, semanales y nocturnos, igual que los salarios, los subsidios y las prestaciones sociales. Otra ley novedosa es la Ley del Trabajo Rural (Ley 18441) de marzo de 2009, la cual reglamentó la jornada laboral y el régimen de descansos en el sector rural.

Tal vez una de las leyes que tuvo mayor proyección en el ámbito laboral, fue el programa 'Uruguay Trabaja' (Ley 18240), aprobada por la Cámara de Representantes el 19 de diciembre del 2007. Esta

ley tuvo como objetivo promover el trabajo como factor productivo y como factor socio-educativo. Se enfocó en personas económicamente activas y mayores de 18 años que vivieran en hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica y que hubieran estado desempleadas por dos años o más.<sup>50</sup> Este programa consiste en un régimen de acompañamiento social para el desarrollo de procesos de integración al mercado laboral, e incluye la realización de trabajos transitorios de valor público y el otorgamiento de una prestación que se denomina "Apoyo a la Inserción Laboral".

En concordancia con unos progresos legislativos en Ecuador, el gobierno de Vázquez promovió la Ley de Tercerizaciones, aprobada en febrero de 2007 (Ley 18099), la cual pretende evitar las evasiones de las empresas que utilizan trabajo subcontratado (*outsourcing*), asegurar mejores aportes para los/las trabajadores y mejorar su seguridad en el trabajo. Esta ley se implementó luego del ascenso en las tasas de accidentalidad laboral, las cuales no tenían cobertura en un régimen de compensación y de seguro al trabajador. La aplicación de esa ley, discutida por casi dos años, enfrentó fuertes críticas del sector empresarial, e incluyó el retiro de los empresarios de la Comisión de Legislación Laboral de Compromiso Nacional.

Otra novedosa ley, fue la que se promulgó con Convenio para el Trabajo Decente, firmado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Enseñanza Pública. Se denominó "Construyendo el futuro con trabajo decente" y con él se buscó fortalecer la construcción de una sociedad de valores, en donde el trabajo, fuera un eje en la formación personal y social de las personas. El trabajo decente se propuso como un trabajo con protección social, que promoviese los derechos fundamentales, basado en el diálogo social y en la creación de empleo. El proyecto se implementaría en tres etapas: la primera abordaría procesos pedagógicos, capacitando profesores, directores e inspectores involucrados en la implementación del concepto en la sociedad. La segunda etapa se enfocaría en la validación de los contenidos y recursos didácticos a uti-

---

50. Para una mirada más de fondo a esta ley, consultase: <http://www.impo.com.uy/bancodatos/mides.htm#e2>.

lizar, igual que en la realización de talleres en varias partes del país. Y en la última fase, se elaboraría un informe mostrando las posibilidades de extender las acciones a todos los establecimientos de enseñanza del país. El programa contó con la ayuda técnica y el acompañamiento de la OIT.

Finalmente, otras leyes en materia laboral elaboradas recientemente fueron: La Ley de Negociación Colectiva (Ley 18508 de junio de 2009), que establece normas para la negociación en el sector público, y extiende su rango en la Ley 18566, aprobada el 11 de septiembre de 2009, con la cual se crea el Sistema de Negociación Colectiva; y la Ley 18406, aprobada el 24 de octubre de 2008, que crea el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

Definitivamente, en materia laboral, el gobierno de Tabaré Vázquez ha avanzado de manera notable, pues ha promovido la creación de un mercado laboral en el que los y las trabajadores están protegidos contra los flagelos de la explotación excesiva del capitalismo salvaje. Tal vez, un avance que aún le espera al gobierno, tiene que ver con la falta de regulación a las empresas unipersonales que son, hoy en día, la principal vía de escape a la protección laboral, igual que la falta de regulación estatal a las administradoras de fondos de pensiones (Erimida, 2009: 44). Sin embargo, el progresismo del gobierno del Frente Amplio en materia laboral, es visto con envidia por las organizaciones centrales de la región y demuestra que la desregulación y la desprotección de los y las trabajadores no es viable en un contexto de tanta inequidad socio-económico como la que sufre nuestra región; proteger los intereses de la fuerza de trabajo tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno que se considera progresista. Pero, por supuesto, la protección de las y los trabajadores no basta como única medida política progresista. Generar más garantías para las clases más vulnerables, es la base para mejorar la calidad de vida y la dignidad humana de una población sin propiedad privada productiva. Pero no avanzar en temas redistributivos, permite que la trayectoria política vuelva al dominio, otra vez, de los intereses del gran capital.

Bajo el gobierno de Vázquez, el país no ha mejorado la distribución de ingresos. Incluso el índice de desigualdad, medido con el coeficiente Gini, se empeoró entre 2005 y 2006, parando de 0,441 a 0,447 (Elías,

2008: 120). E incluso, comparado con los otros países de este estudio, la batalla contra la pobreza y la indigencia del gobierno de Vázquez, ha tenido poco éxito, pues la pobreza ha subido de 15,4% en 2002, a 18,1% en 2007, y luego ha descendido hasta quedar en el 14% en 2008. La indigencia, por su lado, ha aumentado progresivamente, subiendo su nivel del 2,5% en 2002, al 3,1% en 2007 y llegando al 3,5% en 2008 (ECLAC, 2009: 11). Aunque los niveles de pobreza e indigencia en el Uruguay son mucho más bajos que los encontrados en los otros países latinoamericanos, el gobierno del Frente Amplio no los ha podido mejorar, tal como lo han hecho otros gobiernos, particularmente el de Chávez y el de Brasil (ver la tabla 1).

La ineficacia, o la falta de voluntad del gobierno de Vázquez, para implementar unas políticas macroeconómicas diferentes a las dictadas por el FMI y el BM (basadas en el Consenso de Santiago de 1998, conformado por políticos regionales y tecnócratas de institutos multilaterales, BID y que, aunque promueven reformas institucionales y sociales, no intentan cambiar el modelo macroeconómico –apretado gasto social, bajas tasas de inflación y libre movimiento de capital– (véase: Munck, 2003)), ha ido en contra de las demandas de muchas de las organizaciones y grupos involucrados en la coalición de Frente Amplio. Por ejemplo, en varias ocasiones, el PIT-CNT y algunos militantes de base del Frente Amplio han propuesto una estrategia de desarrollo productivo enfocada en el impulso a la producción nacional, tras la promoción de pequeñas y medianas empresas y cooperativas (Elías, 2008: 117). Sin embargo, estas propuestas no han sido incorporadas en la visión económica del Ejecutivo, mostrando así, las jerarquías implícitas dentro del Estado, incluso en un gobierno con fuertes raíces en organizaciones y grupos sociales de izquierda.

Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resalta el desacuerdo que su organización tiene con respecto al manejo macroeconómico del gobierno de Vázquez, diciendo que: “el movimiento obrero no comparte la forma en que se ha negociado el pago de la deuda con los organismos internacionales, ya que entendemos que con base en la nueva correlación de fuerzas del país es posible manejarse de otra forma, evitando postergar viejos reclamos de la clase trabajadora”. Además, Abdala asegura que “la política económica

Tabla 1. Latinoamérica (18 países): Personas que viven en la pobreza y en la indigencia, entre 2002 y 2007, y 2008. (Porcentajes)

Países	2002			2007			2008		
	Año	Pobreza	Indigencia	Año	Pobreza	Indigencia	Año	Pobreza	Indigencia
Argentina*	2002	45.4	20.3	2006	21.0	7.2			
Bolivia (Estado plurinacional)	2002	62.4	37.1	2007	54.0	31.2			
Brasil	2001	37.5	13.2	2007	30.0	8.5	2008	25.8	7.3
Chile	2000	20.2	5.6	2006	13.7	3.2			
Colombia	2002	51.5	24.3	2005	46.3	20.2	2008	42.8	22.3
Costa Rica	2002	20.3	8.2	2007	18.6	5.3	2008	18.4	5.5
Ecuador **	2002	45.0	13.4	2007	38.3	12.4	2008	33.0	14.2
El Salvador	2001	48.3	22.1	2004	47.5	13.0			
República Dominicana	2002	47.1	20.7	2007	44.5	21.0	2008	44.3	22.9
Guatemala	2002	60.2	30.3	2006	54.8	23.1			
Honduras	2002	77.3	54.4	2007	68.3	45.8			
México	2002	39.4	12.6	2006	31.7	8.7	2008	34.8	11.2
Nicaragua	2001	63.4	42.5	2005	61.3	31.3			
Panamá	2002	36.3	18.6	2007	23.0	12.0	2008	27.7	13.5
Paraguay	2001	61.0	33.2	2007	60.5	31.8	2008	58.2	30.8
Perú***	2001	54.7	24.4	2007	33.3	13.7	2008	36.2	12.6
Uruguay*	2002	15.4	2.5	2007	18.1	3.1	2008	14.0	3.5
Venezuela (República Bolivariana)	2002	48.6	22.2	2007	28.5	8.5	2008	27.8	9.3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con base en tabulaciones especiales de datos de reconocimiento de hogares en países relevantes.

\* Áreas urbanas.

\*\* Los datos para 2008 vienen de una encuesta nueva de hogares, la cual fue aplicada con los series anteriores por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia. CEPAL aún no ha completado el procesamiento interno de ésta dato, y por eso, para 2008 se estimó de manera preliminar, aplicando los valores de 2005 (los cuales fueron calculados por CEPAL) las variaciones de porcentajes implícitas en datos oficiales.

Tomada del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú (INEI). Estos valores no son comparables a aquellos del año anterior debido a los cambios en el cuadro utilizado en la encuesta de hogares. Adicionalmente, la información para 2001 corresponde al cuarto semestre, mientras que aquellos en los años 2006 y 2007 se refieren al año completo.

dio hasta el momento prioridad a la inversión extranjera directa como único motor del desarrollo del país y eso no es compartido por el PIT-CNT".<sup>51</sup> Aunque, el movimiento sindical uruguayo resalta el trabajo hecho por el gobierno en el sentido de proteger y respetar los derechos ciudadanos, también se queja por la falta de unas transformaciones sistemáticas en la política gubernamental. Tal frustración se ha manifestado en varias huelgas y protestas contra algunos aspectos de las políticas del gobierno: el 23 de agosto de 2007 cientos de trabajadores protestaron en Montevideo, demandando unos "cambios vitales" en las políticas económicas del país. El mismo año hubo un enfrentamiento entre el gobierno y los trabajadores públicos quienes demandaron un incremento salarial más justo. Sin embargo, la relación entre gobierno y movimiento sindical sigue dándose en un plano de concertación más que de confrontación. Por ejemplo, la Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay (AEBU) ha participado activamente, en la interlocución con el gobierno, para reconfigurar el sistema financiero del país.

Resumiendo: el movimiento sindical uruguayo enfrenta dificultades en su relación con el gobierno, basadas en su cercanía con él, y ello resulta en posiciones contrarias, pues a veces el resultado es una movilización social que busca cambios profundos, y otras, la necesidad de "trabajar" en la esfera oficial del gobierno. Esta complicada tarea termina, muchas veces, en procesos de cooptación (lo que llamaba Gramsci, *el trasformismo*: véase: Gramsci, 1971) y un alto grado de reformismo en lugar de transformaciones profundas. Sin embargo, a partir de 2005 y con el ascenso al gobierno de la coalición izquierdista del Frente Amplio, se da una nueva situación política y social en el país. Esta nueva etapa uruguaya se basa en la renovación política del movimiento izquierdista, con un nuevo gobierno progresista, y con una amplia unidad, pero igualmente, un gobierno que tiene una compleja y contradictoria relación con los intereses de los trabajadores.

---

51. Estos comentarios se obtuvieron en la página web: <http://www.larepublica.com.uy/larepublica/2007/03/01/politica/247780/el-pit-cnt-destaca-avances-en-ddhh-y-relaciones-laborales/>, consultada el 24 de noviembre de 2009.

## **BRASIL: EL ASCENSO DE LULA Y EL PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Brasil, el gigante latinoamericano, contrapeso del imperio norteamericano y referente contemporáneo de una nueva era de multipolaridad en el mundo (junto con los otros gigantes en procesos de surgimiento económico y político, China e India), es ejemplar en las transiciones políticas regionales de América Latina. Por cierto, el país sureño con sus 8,5 millones de kilómetros cuadrados y su población de casi 200 millones de personas, juega un papel protagónico como ningún otro en la región. Y cuando se trata de gobiernos progresistas/izquierdistas y/o alternativos, Brasil, con un presidente surgido del sindicalismo, Luiz Inácio Lula da Silva, es un caso digno de estudio. El triunfo electoral de Lula a la presidencia de Brasil, en octubre de 2002, fue tal vez, el caso político de mayor interés en el ámbito internacional desde Nelson Mandela, el candidato del Partido del Congreso Nacional Africano (ANC), en octubre de 1993, que marcó el final del régimen racista del *apartheid* en Sudáfrica.

Lula contradujo las predicciones de uno de las figuras más reconocidas del mundo de las finanzas –George Soros– quien afirmó, unos meses antes de las elecciones de octubre, que en el mundo contemporáneo las elecciones presidenciales están determinadas por los mercados financieros, y por ello ningún candidato de izquierda podría ganar

en Brasil<sup>52</sup> (Lowy, 2003). Tal confianza fue derrotada por la población brasileña que votó copiosamente por el expresidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo, y le entregó más de 52 millones de votos (61%) en la segunda vuelta. Pero el ascenso político de Lula y su partido –*Partido dos Trabalhadores* (PT)– no fue el resultado de un movimiento que surgía de la nada, ni de una reconfiguración socio-político de emergencia; al contrario, la llegada a la presidencia de Lula, fue la culminación de 23 años de trabajo institucional y organizativo y otros tantos de lucha sindical y movilizaciones sociales, con los que se buscó promover un cambio de clase en el manejo estatal de Brasil.

### **La creación del PT: un partido independiente y de los trabajadores brasileiros**

El golpe militar de 1964 fue la estocada final al modelo de desarrollo reformista clásico brasileiro que había comenzado bajo el mandato del carismático presidente Getulio Vargas (1930-1945; 1950-1954), (Sader, 2009: 25). Este modelo de tipo proteccionista-corporativista impulsó el proceso de industrialización-urbanización en Brasil, convirtiendo el país en el ‘gigante durmiente’ del Sur. Pero, la forma autocrática que Vargas aplicó al aparato estatal brasileiro, indujo el aumento de la resistencia social y la formación de movimientos de oposición. El Partido Comunista de Brasil (PCB), lideró este proceso, inicialmente por la vía armada,<sup>53</sup> y luego por vía electoral, alcanzando logros significativos en las urnas. Pero con la llegada del presidente João Goulart (1961-1964), el PCB fue perdiendo su liderazgo, ya que el gobierno ejerció una fuerte cooptación populista (Sader, 1987). La pasividad y la desorientación del PCB, luego del golpe militar, abrieron el camino para un nuevo tipo de oposición izquierdista, impulsada por organizaciones de la insur-

---

52. La candidatura de Lula a la presidencia no obtuvo el favor de las grandes facciones de capital global: el *Wall Street Journal*, *The Economist*, el FMI y el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, además de los grupos de derecha de Brasil.

53. El PCB intentó promover una insurrección nacional en 1935 que fue derrotada rápidamente.

gencia revolucionaria a partir de 1968. Sin embargo, la dura represión del Estado al lado de la bonanza económica del período,<sup>54</sup> le generó grandes problemas al movimiento; insistir en la toma del Estado por la vía armada, únicamente, en lugar de participar en movimientos masivos de resistencia al Estado, causó la desaparición casi completa del movimiento a comienzos de los setenta (Ibíd: 96).

Durante todo este período, las transformaciones económicas y productivas en el país estaban generando grandes cambios en la configuración y ubicación geográfica de clases. Sobre todo en el área de São Paulo, el proceso de industrialización trajo consigo la creación de un proletariado formado por las zonas ABC<sup>55</sup> en la periferia de las ciudades. Así, un nuevo movimiento sindical empezó a manifestarse con grandes huelgas en 1979 y 1980, en protesta por el régimen salarial draconiano existente. Estas protestas culminaron en una huelga masiva de los trabajadores metalúrgicos de São Bernardo, liderado por su presidente, Lula, entre abril y mayo de 1980 y en la cual participaron 250.000 trabajadores (Invernizzi, 2006; Lowy, 2003; Sader, 1987, 2005). La fuerza sindical creció al tiempo que la conciencia de clase obrera se fortalecía con los trabajadores del sector industrial, que veían la necesidad de articular sus intereses alrededor de un proyecto político autónomo. Esta búsqueda de independencia, de acción clasista, acompañó a la nueva aglomeración de fuerzas sociales de izquierda, las cuales promovieron la transición democrática en Brasil.

Los líderes sindicalistas del momento adoptaron una doble estrategia de lucha: acompañaban a los diversos movimientos sociales “democráticos”, al tiempo que continuaban su propia lucha contra la explotación de los trabajadores. Lula, en una reunión de organizaciones de izquierda en Río de Janeiro, en 1978, resumió así la propuesta: “Sin negar la necesidad de la solidaridad de todos contra el régimen militar..., la clase trabajadora sigue el camino irreversible para la conquista de sus objetivos. Más pronto que tarde se creará un partido político... Es ne-

---

54. Entre 1968 y 1973 hubo tasas de crecimiento de más del 10% por año en el país. A ello se le dio el nombre de “el milagro económico de Brasil”.

55. La zona ABC hace referencia a distritos brasileiros São André, São Bernardo y São Caetano do Sul.

cesario que la clase obrera no sea sólo un instrumento de este partido. Es fundamental que se participe directamente en la manifestación de la fuerza que ella representa. Y, la participación, en la esfera política, implica que esta clase forme su propio partido<sup>756</sup> (citado por Lowy, 2003).

De ahí surgió el PT como una manifestación de la nueva identidad obrera y una plataforma para la creación de una izquierda brasilera refundada, que incorporara diversas fuerzas sociales y una vasta pluralidad de experiencias e ideologías. La esfera sindical se expandió, uniendo a los sindicalistas de los sectores del petróleo y de los bancos, con el sector de los automóviles y el metalúrgico. También se sumaron movimientos sociales como los indígenas, los afro-brasileros, los grupos de mujeres, de ecologistas y muchos miembros eclesiásticos inspirados en la teoría de liberación, que tenía una fuerte presencia en las comunidades pobres de Brasil (Sader, 1987, 2005; Sigmund, 1990). Las bases teóricas del PT se habían alejado mucho del pensamiento marxista-leninista, un hecho arraigado en las experiencias concretas del populismo y del comunismo brasilero. También, para la lucha de emancipación obrera, los capitalistas no eran los principales enemigos, sino que lo era el Estado autoritario y represor del movimiento sindical (Borón, 2004; Petras y Veltmeyer, 2006; Sader, 2005). Así, la ideología obrera del PT y la recién fundada Central Única de Trabajadores (CUT, 1983) era una versión distorsionada del liberalismo, confundido con el libertarismo.

En esta concepción, se pensaba que un intento por promover una revolución social verdadera, sólo traería como respuesta el totalitarismo estatal, sea de izquierda (en los casos de la Unión Soviética, Cuba y China) o de derecha (Chile, Uruguay, Argentina y Brasil). Siguiendo la corriente hegemónica en las esferas izquierdistas del período, sobre todo la que estaba asociada con los intelectuales de la teoría de la dependencia, Fernando Cardoso, lo que más se necesitaba en el país, era una transición democrática, arrebatándole primero el poder al ejecutivo y a los intereses de la burguesía-estatal, y devolviéndoselo a la sociedad civil a través de una apertura política, y luego, aplicando otra apertura al mercado (Sader, 1997). Esta posición fue heredada del Partido do

---

56. Esta cita fue traducida del portugués al inglés y luego al español (n. del a.).

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), y de varios movimientos sociales que lo apoyaron. Implícitamente, el PT siguió esta ideología, resaltando los discursos “democráticos”, mientras se olvidaba de las implicaciones de clase que una democracia liberal lleva consigo (Sader, 2005). Percibir la democracia como algo meramente formal e institucional, implica una separación de las luchas sociales (los trabajadores contra los capitalistas, por ejemplo) y las luchas políticas (la conquista electoral). Entonces, de acuerdo con esta lógica, el movimiento sindical (y las centrales sindicales de Brasil) se ocupa de las primeras, mientras que el PT se enfoca en las segundas; algo que, con la llegada de Lula a la presidencia ha generado muchos conflictos entre ambas organizaciones, porque el PT no se siente reflejado como movimiento obrero, aunque sus raíces históricas están inmersas en él.

### **La transición a la democracia y el papel político del PT**

Luego del milagro brasileiro de finales de los sesenta y principios de los setenta, el régimen militar empezó a enfrentar un estancamiento económico, que se había profundizado por los altos niveles de endeudamiento. También, las movilizaciones sociales reclamando una apertura política iban en aumento, y presionaban la acción del gobierno. En 1984, por un período de tres meses, organizaciones populares y grupos de la élite participaron en la campaña por la elección directa (*Diretas Já!*), que convocó a más de 10 millones de brasileros, y exigió el derecho a elegir el presidente del país (Moreira, 1988: 51). La junta militar decidió moverse y en un proceso dominado por el gobierno y las élites locales; la transición a la democracia se “organizó”, excluyendo a los grupos de oposición más radicales y a los que no estaban dentro de la institucionalidad estatal.

En las elecciones presidenciales de 1989, el PT y su candidato único, Lula, casi alcanzan su objetivo; Lula alcanzó el 44% de la votación en la segunda vuelta, perdiendo por poco frente al candidato neoliberal, Collor de Mello (1990-1992). De Mello implementó las políticas de la ortodoxia neoliberal, tratando de controlar la inflación y promoviendo privatizaciones de empresas públicas. Pero cuando renunció para evitar más investigaciones sobre sus prácticas de corrupción estatal, lo que

llevaría a su impugnación, la competencia por la presidencia se dio entre los rivales Cardoso y Lula. Aunque Lula era el candidato favorito en las elecciones de 1994, Fernando Cardoso le ganó en la primera vuelta. Esta derrota desestabilizó al PT y a Lula.

Cardoso (el ex pseudo-marxista), durante ocho años, se aplicó como el mejor estudiante de las políticas macroeconómicas del Consenso de Washington, y luego, del Consenso de Santiago (Mollo, 2006). Cardoso continuó las políticas de liberalización de los mercados de capitales e implementó una política para controlar la inflación (manteniendo altas tasas de interés en el mercado financiero), que generó un fuerte crecimiento de la deuda (visible en el aumento de pagos de intereses a la deuda pública) (Paiva, 2006; Vernengo, 2007). Promovió igualmente, una política represiva en contra de los movimientos sociales,<sup>57</sup> debilitando a las organizaciones sindicales y a muchas otras organizaciones de izquierda, al mismo tiempo en que se amplió (pero con un enfoque muy específico) el gasto social, como mecanismo de lanzar su "ataque contra la exclusión social" (Wright, 2007). Este ataque no sirvió para bajar las cifras de desigualdad en Brasil, y aunque el país pudo cumplir con sus obligaciones fiscales al FMI, también entregó los sectores claves de la economía al capital extranjero.<sup>58</sup> Los sectores populares sufrieron los impactos negativos: el crecimiento económico fue cayendo, los salarios reales bajaron, el acceso a los servicios sociales se disminuyó, y junto con un aumento en desempleo, hubo un crecimiento en las tasas de informalidad (Petras y Veltmeyer, 2003). Incluso, la única mejora en los sectores sociales durante el gobierno de Cardoso, fue en la educación y eso, sólo en primaria y secundaria (Ibíd.). Sin embargo, en las elecciones de 1998, Cardoso, otra vez, le ganó a Lula y al PT; un evento que llevó a Lula y sus asesores a crear el

---

57. De otro lado, Cardoso también implementó una reforma agraria que a pesar de generar fuertes tensiones, también ayudó a entregar tierras a campesinos del *Movimento Sim Terra* (MST) en cantidades nunca vistas en la historia de Brasil, véase, (Ondetti, 2007).

58. El sector bancario, durante la presidencia de Cardoso, fue tomado en gran parte por los bancos extranjeros. En 1989, el 9,6% del capital social bancario del país, pasó a manos del capital extranjero, pero en 2000, los bancos extranjeros ya controlaban el 33% del sector (véase, Petras y Veltmeyer, 2006: 83).

Instituto de Ciudadanía, por fuera de las estructuras del PT, el cual le dio a Lula más autonomía con respecto al partido que él representaba (Sader, 2005: 67).

## **2002: el triunfo de Lula y el PT: El primer período de manejo económico neoliberal**

Las sucesivas derrotas electorales de Lula (1989, 1994, 1998), en tiempos de crisis económicas y masivos problemas sociales, hicieron que él y sus más leales colegas repensaran su estrategia. Olvidando sus viejos discursos de autonomía de clase y tomando el camino hacia el reformismo moderado, como lo hiciera su colega y vecino, Tabaré Vázquez, Lula quiso conquistar la confianza y el aprecio de los sectores financieros dominantes: nombró como presidente del Banco Central a Henrique Meirelles, ex gerente del banco, centrado en Estados Unidos, *Fleet-Boston Financial Group*, quien convocó a un equipo de discípulos neoliberales que habían servido en administraciones anteriores (Ibíd: 70; Paiva, 2006). Ningún economista del PT o de otra organización de izquierda, fue invitado a integrarse al grupo ministerial del nuevo presidente. No es necesario decir que estos nombramientos generaron fuertes rechazos dentro del PT, y llevaron a que muchos miembros del partido se proclamaran como opositores del nuevo gobierno.<sup>59</sup>

El giro del gobierno de Lula hacia el centro de la política monetaria, se manifestó en su discurso sobre el pago de la deuda. Antes del comienzo de la campaña presidencial, el PT había anunciado que adoptaría una política de no al pago. Durante la campaña, esta posición radical se cambió por la propuesta de suspender el pago con auditorio. Y finalmente, se presentó la famosa “Carta a los brasileños”, en la cual el partido se comprometió con el pago, “incluyendo de manera central

---

59. Se estimaba que, a pocos meses del primer gobierno de Lula, 32 de los 91 diputados y 4 de los 14 senadores petistas (del PT) se declararon opuestos al rumbo del gobierno. Incluso, con respecto al nombramiento de Meirelles, el diputado petista, Joao Batista Oliveira de Araújo, dijo que “nombrar al ex banquero Henrique Meirelles para dirigir el Banco Central es lo mismo que designar a un vampiro para presidir el banco de sangre”. Véase: (*Semana*, 3 de marzo de 2003)

el pago de la deuda externa y la renuncia a cualquier tipo de moratoria o renegociación, así como del abandono de toda forma de regulación al capital financiero" (Sader, 2009: 27).<sup>60</sup> También el gobierno aceptó la necesidad de continuar con las políticas monetarias implementadas por el gobierno de Cardoso, subrayando cuatro políticas: mantener el excedente fiscal primario (*primary fiscal surplus*); mantener una política contra la inflación; mantener una tasa de cambio monetario flotante; y respetar los contratos existentes (De Oliveira, 2006; Erimida, 2009; Flynn, 2007; Paiva, 2006; Sader, 2009). Así pues, Lula aceptó mantener los términos del acuerdo con el FMI (Paiva, 2006: 201).

En el primer presupuesto nacional, el gobierno de Lula excedió con creces los dictados de ese acuerdo, produciendo un excedente primario fiscal del 4,3% del PIB,<sup>61</sup> algo que se logró apretando el gasto social (Paiva, 2006: 202). La búsqueda de altos excedentes fiscales, fue fundamental en el primer período del gobierno de Lula; el Acto de Guía Presupuestal buscó alcanzar excedentes primarios de, al menos, 4,25% del PIB, para los primeros tres años (2004-2006). Las tasas de interés pasaron de 25% a 26,5% en la primera y segunda reunión del Banco Central, en 2003, demostrando el compromiso con la política contrainflacionaria. Y finalizando el año, el gobierno logró establecer una reforma tributaria que incrementó los impuestos indirectos (política altamente regresiva). Por cierto, en su primer período como presidente, Lula implementó una política económica más austera, incluso, que la de Cardoso (Paiva, 2006). En el ámbito productivo, el gobierno del PT siguió la estrategia de Cardoso, promoviendo la exportación de productos primarios (incluyendo la soja transgénica), manteniendo, las estructuras de dependencia económica que han marcado la trayectoria de los países latinoamericanas (véase, Cueva, 1986; Dos Santos, 1996; Portes, 2004).<sup>62</sup>

---

60. Se debe anotar que este cambio en la posición del gobierno tuvo mucho que ver con la reacción de los mercados financieros cuando, durante la campaña, las encuestas mostraban que Lula encabezaba los votos de opinión, éstos reaccionaron aumentando el rango de riesgo (*risk rating*) del país y devaluando la moneda, el *Real*, (véase: Pavia 2006: 200).

61. El FMI había especificado un excedente primario de 3,87% del PIB.

62. Esta estrategia tiene también a muchas de las zonas amazónicas del país,

## **El segundo período presidencial: una posición menos ortodoxa en el manejo económico**

Con el susto que el PT y Lula tuvieron, al verse al borde de la derrota en la primera vuelta electoral,<sup>63</sup> quizá se dieron cuenta que el segundo período tendría que ser “menos de lo mismo”. Finalmente, en la segunda vuelta del 30 de octubre de 2006, Lula da Silva ganó por un cómodo margen de casi 20 millones de votos, frente Geraldo Alckmin del PSDB. Sin embargo, a pesar de que el voto electoral es obligatorio en Brasil, el 23% del electorado no participó en el proceso electoral y otro 8% votó en blanco, demostrando la tasa más alta de indiferencia o apatía electoral en la historia moderna de Brasil (De Oliveira, 2006: 5).

Una vez reconfirmado como presidente para el nuevo período, aunque de nuevo sin una mayoría en el Parlamento, Lula cambió el Ministro de Finanzas, reemplazando el ortodoxo Antônio Panocci, con un ministro desarrollista, Guido Mantega, y también designó a Dilma Roussef a la Casa Civil, demostrando así su nuevo enfoque económico (Sader, 2009: 30). Lula se había quejado de la falta de apoyo electoral y de los continuos ataques de los sectores radicales de izquierda, al igual que los de los más conservadores, diciendo que durante su primer período presidencial, “nunca los ricos ganaron tanto, nunca los pobres mejoraron tanto su nivel de vida” (citado por Sader, 2009: 29). Con la ortodoxia económica de 2003 a 2006, la primera parte de esta frase resultó ser más o menos exacta. Pero ¿qué tal la segunda?

## **La política social del gobierno del PT**

Al lado de una política macroeconómica bastante moderada, el gobierno del PT promovió unos programas ambiciosos, enfocados en bajar la

---

socavadas con la extracción ilegal de madera, realizada por empresas exportadoras de Brasil y empresas multinacionales, que luego aparecen en los mercados de Estados Unidos y Europa (véase: “Devastation Inc.”, publicada por el Instituto Observatorio Social de Brasil, [http://www.observatoriosocial.org.br/portal/images/stories/publicacoes/devastation\\_inc\\_web.pdf](http://www.observatoriosocial.org.br/portal/images/stories/publicacoes/devastation_inc_web.pdf)).

63. En la primera vuelta, Lula obtuvo 48,6% del voto frente Alckmin quien obtuvo 41,6%, y Heloisa Helena, del Frente Izquierdo, obtuvo un poco menos del 7%.

pobreza y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país. "Hambre cero" (*Fome zero*) fue una propuesta política de seguridad alimentaria para Brasil, la cual fue elaborada por el Instituto Ciudadanía, en 2001, bajo la orientación del ministro de Seguridad Alimentaria y Combate contra el Hambre, José Graziano da Silva. Este programa se enfocó en tres iniciativas: 1. políticas estructurales para generar ingresos y empleo, asistencia social universal, incentivos para promover la agricultura familiar a través de la intensificación de la reforma agraria empezada por Cardoso, igual que becas escolares. 2. políticas específicas: una tarjeta alimentaria con 50 reales para cada beneficiario; cobertura básica para atención de emergencia; ampliación del Programa de Alimentación del Trabajador; combate a la desnutrición infantil y materna. 3. políticas para áreas rurales, pequeñas y medianas ciudades y las metrópolis, que incluyen los bancos de alimentos integrados por donaciones (Tavares, 2003: 108).

Las proyecciones de este programa eran enormes, pero su implementación sufrió grandes problemas de diseño, articulación institucional, presupuesto, lentitud y, más que todo, una gran ambigüedad en su enfoque: ¿el proyecto apuntaba a la población pobre o sólo a la población desnutrida? Las líneas generales le daban prioridad a los sectores sin ingresos suficientes para alimentarse, dejando de lado gran cantidad de gente en condiciones de pobreza, y tocando apenas el asunto de los alimentos (por supuesto de gran importancia en la vida cotidiana) y dejando de lado los problemas estructurales de acceso a los servicios sociales (salud, pensiones y educación), igual que el problema del desempleo, el subempleo y la informalidad. Además, el presupuesto para este programa fue duramente disminuido cuando el PT entró a gobernar. Antes, se habían prometido 6.000 millones de reales (*Semana*, 3 de marzo de 2003), pero en 2003, este monto se redujo a 1.800 (aproximadamente 600 millones de dólares) y para 2004, el ministerio responsable de su implantación sólo destinó 300 (100 millones de dólares) (Tavares, 2003). Por cierto, el alcance de la Tarjeta Alimentaria (parte integral del proyecto) era menos de lo alcanzado por un proyecto parecido, hecho por la alcaldía de São Paulo, y en total el programa nacional incluyó sólo a 297.242 familias (Ibíd: 111).

Al lado de un programa que fue más promesa que compromiso, “Hambre Cero”, hubo otro programa social en la administración de Lula: “la Bolsa Familia”, un modelo de política muy disperso para atacar la miseria socio-económica y la exclusión social.<sup>64</sup> Este programa consiste de un sistema de subsidios que se entregan a las familias que obtienen un ingreso por persona de no más que \$100 reales por mes. También consiste en dar cobertura a las necesidades sociales básicas: salud, alimentación, educación y asistencia social. Para obtener este subsidio, una familia tiene que cumplir otras tres condiciones: no puede tener analfabetos; todos los hijos tienen que estar en la escuela (hasta los quince años de edad); y deben seguir un programa de salud. El programa ha sido un éxito político, pues se ha aplicado a 11 millones de familias, con un subsidio de hasta \$95 reales por mes.

Con el triunfo de Lula en 2006, el programa se extendió aún más. Sin embargo, muchos han comentado el gran apoyo que los beneficiarios le dieron a Lula en la segunda vuelta electoral; en la región nordeste de Brasil –plagado por la pobreza y zona de enfoque del programa– Lula recibió el 70% de la votación (De Oliveira, 2006: 7), algo que preocupa por los lazos clientelistas que las bolsas parecen tener (De Oliveira, 2006; Sader, 2009). No obstante, la verdad es que este programa ha sido positivo por el hecho de promover, junto con los otros programas sociales del segundo período, de acuerdo a Sader (2009: 31), “una distribución de riqueza favorable a la población más pobre –las llamadas clases A y B–, que dejaron de ser mayoría, para pasársela a la clase C, pasando a representar el 39% aquellas y el 46% éstas”. Con respecto al impacto en las tasas de pobreza y pobreza extrema (indigencia), ha habido resultados positivos durante los dos períodos presidenciales del gobierno del PT (véase la tabla 3).

---

64. De hecho, el gobierno de Calderón en México tuvo el “Programa Progreso”, el gobierno de Correa el “Bono de Desarrollo Humano”, y el gobierno de Colombia, desde la misma cartera presidencial, la famosa “Familias en Acción”. Todos son muy leales a las políticas multilaterales del Banco Mundial que promueve la implementación de políticas específicas que ataquen las peores formas de miseria socio-económica, fundada en el asistencialismo temporal.

**Tabla 3. Tasa de Pobreza/indigencia Brasil**

	Pobreza	Indigencia
2002	37,5	13,2
2003	38,7	13,9
2004	37,7	12,1
2005	36,3	10,6
2006	33,3	9
2007	30,3	8,5
2008	25,8	7,3

Fuente: CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Desarrollo Económico.

En la esfera educativa, el gobierno quiso continuar el trabajo del gobierno de Cardoso, pero ampliándolo a la educación superior. Se realizaron trabajos de educación popular a través de un equipo que congregó siete centros de educadores en todo el país, trabajando con cada una de las familias beneficiarias del programa "Hambre Cero". El gobierno intenta apoyar la escolarización en todos los niveles: básica, secundaria y superior. Ha creado programas como la "Beca Familia", el "Fondo de Manutención y Desarrollo de Educación Básica (FUNDEB)", y el "Programa Universidad Para Todos (PROUNI)", y al lado de este último, invirtió en la construcción y equipamiento de 11 nuevas universidades públicas federales con el fin de promover el acceso a la educación pública y gratuita.

### **Las reformas laborales y sindicales: entre la división y la pacificación**

Tal vez la reforma que más conflicto ha generado dentro y fuera del gobierno fue la Reforma Previsional, sancionada en 2003 e implementada en 2004. El propósito principal de esta reforma era frenar el enorme y progresivo déficit fiscal que arrojaba el sector, debido a las enormes deudas adquiridas para poder beneficiar a los jubilados y atender los pasivos de los funcionarios públicos. La reforma fue llevada más allá de lo que propuso el gobierno de Cardoso, y terminó aumentando el tope de la jubilación de los trabajadores del sector privado; la edad mínima (a 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres); en el

sector público, se estableció el mínimo de 20 años de servicio; la edad para la concesión del beneficio también subió; al igual que el tiempo de contribución; y fijó un valor máximo en las pensiones (Radermacher y Melleiro, 2007: 9).

Aunque la reforma logró sus objetivos de reducir la presión fiscal, se generó una división tan fuerte dentro del gobierno, que cuatro diputados del PT votaron en contra, y como consecuencia, fueron expulsados del partido. Luego ellos mismos crearon su propio partido, el Partido Socialismo y Libertad (P-SOL) el cual, con la candidata Heloisa Helena, se lanzó a las elecciones presidenciales de 2006, obteniendo el 7% de la votación (Erimida, 2009; De Oliveira, 2006; Sader, 2009). También esta reforma produjo una división bastante sesgada dentro de la CUT –la central más grande de Brasil y con una trayectoria histórica muy afín al PT– que, a partir de la aprobación de la ley, se separó en dos bloques: uno que apoyaba al gobierno de Lula [Articulación Sindical, (Artsind), la CUT Socialista y Democrática (CSD), y la Corriente Sindical Clasista (CSC)]; y otro que adoptó una posición más crítica al gobierno [el Movimiento de los Trabajadores al Socialismo (MTS), la Alternativa Sindical Socialista (ASS) y El Trabajo]. Esta división y sus confrontaciones hirieron profundamente la estructura de la CUT, hasta el punto que, en marzo de 2004, uno de los grupos decidió “romper” con la CUT y formar la Coordinación Nacional de Luchas (Conlutas), (Radermacher y Melleiro, 2007: 10).

El gobierno, después de esta experiencia tan dolorosa y conflictiva, decidió adoptar otro método para impulsar las negociaciones con respeto a la reforma sindical y la reforma laboral. En contra de los deseos del sector empresarial, el gobierno decidió empezar con una reforma sindical que intentara pacificar el movimiento sindical y luego progresar con la reforma laboral. El PT creó el Foro Nacional del Trabajo (FNT) que tenía una estructura tripartita, basada en el diálogo social. El FNT, durante las negociaciones intentó generar un ambiente conciliatorio, haciendo concesiones con todas las facciones. El gobierno, por su lado, hizo un gesto de buena fe con los trabajadores, retirando del Congreso la propuesta de Fernando Cardoso de modificar el artículo 7° de la Constitución (de 1988) y el artículo 618 del Código Laboral del Trabajo, que en la práctica, reducirían los derechos garantizados

mediante negociaciones colectivas (Ibíd: 10).

Finalmente, con la Ley 199 de 2007 (organización sindical), hubo avances en la democratización de las organizaciones sindicales. Se reformó la manera de organizar a los sindicatos, sustituyendo la "categoría profesional por la de sector económico y la rama de actividad económica" (Ibíd: 11). Un punto positivo, luego de la paliza que el gobierno había dado a los trabajadores públicos, fue la inclusión de la negociación colectiva en empresas estatales, y el derecho a la huelga, se mantuvo a pesar de la fuerte oposición de parte de los empresarios. Sólo quedaron con restricciones los sectores de servicios esenciales. Finalmente, esta reforma impulsó una proliferación de centrales sindicales, generando así, más democracia pero más conflictividad dentro del movimiento sindical. En las conclusiones del FNT, se propuso la creación de un Consejo Nacional de Relaciones de Trabajo (CNRT), de constitución tripartita y que propondría directrices para las políticas públicas en el área de las relaciones del trabajo (Ibíd: 12).<sup>65</sup>

Tras el escándalo de corrupción más grande en la historia del Brasil, en 2005 (véase, Flynn, 2005), que involucró a los altos oficiales del gobierno y a los sectores del movimiento sindical, el proceso de reforma quedó congelado y no fue sino hasta la victoria electoral de Lula en 2006, que se pudo retomar el camino. Al fin de cuentas, la ya fraccionada ley, estimuló más que toda la división sindical, hiriendo entonces, las dos centrales más grandes, la CUT y la FS, sobre todo tras la fundación, en 2005, de la Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST), que agrupaba al sector más conservador y arcaico del movimiento sindical brasileiro. La CUT, se vio políticamente debilitada luego de la crisis de corrupción en el PT y con una fragmentación aún mayor en el sindicalismo brasileiro. Luego de la creación de Conlutas en 2004, la CUT enfrentó una nueva salida de algunas fuerzas en su

---

65. A pesar de la búsqueda del consenso en las negociaciones, hubo grandes desacuerdos entre los propios sindicatos, generando, por fin la creación del Foro Sindical de los Trabajadores (FST) como contraparte del FNT; el FST fue compuesto por las confederaciones sindicales de la estructura oficial y defendió el sindicato único, el sistema confederado, la representación por categoría profesional y la contribución sindical compulsiva.

manejo político; sectores asociados a partidos como el P-SOL y el PCB, dejaron la CUT, y aunque, numéricamente esta desbandada no dañó a la CUT, políticamente, ha traído un impacto bastante severo, al disminuir severamente la pluralidad ideológica y política (Ibíd: 14). Entonces, tras los numerosos conflictos (dentro de las centrales, dentro del gobierno y entre las tres partes), el movimiento sindical brasileiro comenzó a enfrentar su propia crisis. Después de los fuertes golpes sufridos durante las administraciones neoliberales, la llegada de un gobierno supuestamente “en concordancia” con los objetivos generales de la central más grande del país, ha traído, tal vez menos garrote explícito, pero más rupturas ideológicas y partidarias al movimiento. La CUT sigue dominando el escenario de las centrales (véase Tabla 4), pero aún existe el gran problema de la falta de conexión entre los sindicatos de base y las centrales: 62% de los sindicatos brasileiros no estaban (en 2001) afiliados a ninguna central sindical (Rademacher y Melleiro, 2007: 10).

**Tabla 4. Sindicatos de trabajadores afiliados a cada central sindical, 2007**

Central sindical	Nº de entidades	Porcentaje
Central General de los Trabajadores de Brasil (CGTB)	81	2,6
Central Única de los Trabajadores (CUT)	1.571	50,0
Fuerza Sindical (FS)	633	20,2
Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST)	526	16,7
Unión General de los Trabajadores (UGT)*	313	10,0
Otras**	15	0,5
Total	3.139	100,0

Tomado de: Redermacher y Malleiro (2007: 15).

Fuente: Sistema Integrado de Relaciones del Trabajo (SIFTT), elaboración propia.

\* Número obtenido a partir de la suma de las entidades afiliadas a las tres centrales sindicales (CAT, CGT y SDS) que se unificaron en la UGT.

\*\*Suma de las entidades afiliadas a las otras 12 centrales sindicales que poseen hasta cuatro sindicatos afiliados.

Lula, en su primer período como presidente, de manera decisiva quiso reestructurar la dirigencia de la CUT, presionando la renuncia del entonces presidente, João Felício, quien era la cabeza del sindicato de los profesores y muy opuesto a cualquier reforma pensional. Fue sustituido por el dirigente del sindicato de los trabajadores metalúrgicos, Luiz Marinho, quien adoptó una posición más cordial frente al gobierno. Cambios como éstos, fortalecieron el proceso paulatino de debilitar la independencia de la CUT y sin tener los vínculos orgánicos con las bases sindicales militantes, la CUT ha ido perdiendo credibilidad con los movimientos sociales de izquierda (como el MST) y se ve débil frente al gobierno, el cual ha adoptado una posición de apoyo casi incondicional (De Oliveira 2006).

## Apuntes finales en la evaluación del gobierno de Lula

La gran dificultad para ofrecer un balance político del gobierno de Luiz

Inácio da Silva, reside en las diferencias de los dos períodos presidenciales, en términos de los enfoques políticos adoptados, al igual que por el creciente distanciamiento entre Lula como presidente, y el PT como partido político. Por cierto, Lula el sindicalista y trabajador metalúrgico parece haber desaparecido frente al Lula presidente. Sin embargo, el salto ideológico y político de Lula y muchos de sus asesores más cercanos del PT no fue espontáneo, sino resultado de una larga trayectoria, como se ha podido anotar en este breve trabajo. Aunque la política macroeconómica mostró rasgos aún más fuertes que los asociados con el neoliberalismo del gobierno de Cardoso, en la política exterior y sobre todo con respeto a las relaciones regionales e internacionales, Lula abrió la puerta a un gran papel protagónico y latinoamericanista frente a las muy arraigadas tendencias imperialistas norteamericanas. Fue él quien impuso la firma del ALCA entre la región y Estados Unidos y mostró sus grandes cualidades de orador y diplomático latinoamericano en la cumbre de Unasur, en agosto del 2009, pronunciándose sobre la necesidad de cambiar el pensamiento sumiso frente los poderes de Estados Unidos y Europa.<sup>66</sup> El impulso y la profundización de proyectos de integración regional y el buen trato entre vecinos, van mucho más allá del discurso y ellos han sido los artífices para la creación de las bases para una autonomía nacional-regional y soberana frente a poderes extranjeros y el mercado financiero global y sus discípulos tecnócratas.

Sin embargo, en el lado macroeconómico, Lula se manifestó como un servil preso de la doctrina ortodoxa neoliberal en el manejo fiscal en su primer período, pero apoyado por la bonanza regional de 2005-2007, se fue ganando un poco la autonomía frente aquella fuerza. Los ambivalentes planes sociales de su primera administración cogieron fuerza y estructura a partir de 2006, generando mejores resultados en la calidad de vida de los sectores más pobres del país. Hubo un incremento sistemático del poder adquisitivo del salario mínimo, los puestos de trabajo formal aumentaron y se redujeron las tasas de informalidad.

---

66. Las palabras del mandatario brasileiro fueron: "Durante años, nosotros fuimos enemigos entre nosotros, mientras nuestros amigos eran los europeos y los estadounidenses", dijo Lula. "Ahora debemos descolonizar la mente de nuestros dirigentes en el siglo XXI". Véase: (*Semana*, 28 de agosto de 2009).

Los controles de precios de muchos productos alimenticios ayudaron en aliviar la crisis alimenticia que tenía alcances globales y en el campo, hubo programas masivos de electrificación rural. En los siete años de Lula hubo una reconstitución del aparato estatal, fuertemente bombardeado por Cardoso y su maquinaria neoliberal.

El Estado volvió a coger, en parte, su viejo papel desarrollista, generando un pacto implícito con la burguesía nacional de la agroindustria, como base del fomento del desarrollo nacional. No obstante, las crisis dentro del partido impactaron, negativamente, no tanto a Lula, sino a la institucionalidad y la cohesión del PT, algo que tomará años para aliviarse. En sus relaciones con los diversos movimientos sociales, hubo altos y bajos, pero su propuesta de impulsar una reforma agraria progresista no produjo resultados muy claros. Muchas de las tierras prometidas a campesinos e indígenas fueron entregadas de manera ineficaz y lenta, al igual que el manejo de la reforma en general. Lula no mostró mucha inclinación para abrir los archivos de la dictadura como proceso de reflexión y maduración de la sociedad contemporánea (Sader, 2009). Y finalmente, aunque los logros en materia laboral a partir de 2006 (reducción en los niveles de desempleo) fueron muy positivos, el gobierno de Lula ha fracasado frente a las esperanzas de la clase trabajadora, la cual creyó que, por fin, iba a tener un gobierno orgánico y representativo de su lucha histórica. Más que todo, el gobierno del PT ha tratado de competir con la derecha política sobre quién es más hábil en regular la economía nacional de acuerdo a las necesidades de la clase dominante, con un mínimo enfoque en procurar la reproducción del sistema a través políticas que busquen expandir el mercado de consumo en las poblaciones más pobres del país. No hay, hasta ahora un intento real para generar oportunidades productivas y educativas para que esta gran masa social se incorpore al sistema dominante como participante activo, en lugar de su pasividad.



## CONCLUSIONES

En la literatura política reciente, hay un gran interés por analizar los cambios en los gobiernos latinoamericanos que supuestamente han dado un giro a la izquierda, después del flagelo neoliberal de las últimas décadas. Aunque existe una gran convergencia discursiva en las proclamas de los nuevos gobiernos regionales –castigando los peligros del mercado puro y la falta de una política social en el manejo neoliberal del Estado– existen, sin embargo, diferencias en las políticas y los proyectos implementados recientemente por cada uno de esos gobiernos no tradicionales. Para considerar estos gobiernos como “de izquierda” es necesario reformular el significado “ser de izquierda”.

De los cinco gobiernos investigados, sólo uno (el de Hugo Chávez, en Venezuela) ha ejecutado políticas con estrategias “anti-capitalistas” y socialistas, aunque existe aún un vacío con respecto al tipo de socialismo que se está construyendo, debido a las contradicciones en modelo que hasta ahora se ha implementado –un socialismo-rentista y burocrático. En los demás gobiernos, el discurso radical de un nuevo rumbo poscapitalista, que existe en alguna forma, sólo se ha dado en la esfera de la retórica pública. Los gobiernos de Morales, Correa, Vázquez y Lula, han construido un nuevo consenso de izquierda que se ajusta al contexto contemporáneo, y en el cual ser de izquierda (en la práctica) se

consigue a través de un manejo presupuestal más generoso para las clases populares. En la política macroeconómica, la ortodoxia neoliberal sigue dominando con sus políticas enfocadas al control de la inflación (sin importar las implicaciones que traen las altas tasas de interés con respeto a los niveles crecientes de la deuda pública), junto con una lealtad incuestionable a la inversión extranjera como prioridad a la hora de pensar en las fuentes del crecimiento económico.

Se podría decir entonces, que en lugar de un giro a la izquierda, lo que se ha construido en realidad es una "marea rosada" (Coronil, 2007; Panizza, 2008), lo que significa que la izquierda, como movimiento político, va en aumento, a pesar de la trayectoria actual de los gobiernos reformistas de la región. Tal vez, el nuevo espacio de las fuerzas sociales izquierdistas en la región importa más que el grado de progresismo alcanzado por cada uno de los gobiernos analizados.

De acuerdo al gran estrategia político, Antonio Gramsci, las verdaderas transformaciones sistémicas se obtienen a través de largas luchas y no con la mera conquista del aparato estatal (Gramsci, 1971, véase también, Lenin, 2008; Žižek, 2009). Los cambios en el imaginario político nacional/regional que se han dado con las victorias electorales de cada uno de estos gobiernos, son pasos gigantes en el largo camino de generar profundas reconfiguraciones en los Estados nacionales y en el contexto político regional. La gran ola violenta y represiva inaugurada por las dictaduras militares, sobre todo en los sesenta y setenta, trajo consigo una hecatombe material, debido a las fuerzas de oposición de la izquierda y del experimento neoliberal que llegó tras la sombra de la "tercera ola democrática", impulsando una batalla ideológica en contra de cualquier alternativa política-económica. En este período, el "pensamiento único" fue promulgado por el imperio norteamericano y las nuevas clases tecnocráticas. La élite política latinoamericana, siguiendo el ejemplo de sus colegas del siglo XIX, "los compradores burgueses" (véase: Cueva, 1986; Hoogvelt, 1997; Leys, 1996), se movieron hacia nuevas conquistas de soberanía —la globalización financiera— para así vender la querida patria.

Con la llegada de los nuevos gobiernos "rosados" (y hasta teñidos de rojo), hay un nuevo consenso político que intenta hacer reformas

al capitalismo, e iniciar la reconstrucción del Estado como mediador. Esta actitud no tiene igual en las sociedades capitalistas. La reconfiguración regional de las fuerzas políticas ha sido compleja, ambigua, e incluso contradictoria, porque se parte de un proceso novedoso en el que la relación entre movimientos sociales, movimiento sindical y gobierno está apenas empezando de construirse. Todos los gobiernos analizados tienen múltiples vínculos con el movimiento sindical y los movimientos sociales, rasgos que, aunque muy variados en cada contexto, fueron suficientemente profundos para hacer lo “imposible” y aplastar –por lo menos temporalmente–<sup>67</sup> al movimiento conquistador de partidos derechistas en la política regional. Por sus vínculos sociales con movimientos progresistas, los cinco gobiernos de este estudio, han hecho políticas trascendentales para cambiar el rumbo neoliberal que enfrentaron estos países hasta hace poco.

Sólo tomando las líneas generales, se resaltan las políticas más pronunciadas: frenar los procesos de privatización de las empresas estatales; fortalecer el aparato estatal en las esferas económica y social, en lugar de enfocarse exclusivamente en el manejo de la política monetaria y la fortaleza del aparato de control social (fuerzas armadas, policía, sistema de justicia, con énfasis en las garantías contractuales); frenar la precarización de las relaciones laborales y la desprotección de los y las trabajadores; expandir las políticas sociales como intento de integrar las poblaciones más pobres y más excluidas al sistema político y económico de cada país; y finalmente, darle prioridad a los procesos de integración regional.

El papel de los movimientos sindicales en estas reconfiguraciones, ha sido bastante heterogéneo. Mientras que en Uruguay y Brasil, el movimiento sindical estaba al frente de la construcción de los partidos políticos de izquierda y no-tradicionales, en Venezuela, el movimiento sindical dominante (ligado a la CTV) estaba preso en el sistema bipartidista tradicional del régimen del “Punto Fijo” convirtiéndose en otra

---

67. Este punto es muy pertinente para el contexto de las próximas elecciones en Chile (diciembre 2009) y en Brasil (octubre de 2010) en donde, hasta el momento, los candidatos favoritos son de derecha: Sebastián Piñera, en el caso chileno, y José Serra, en el caso de Brasil.

fuerza opositora al gobierno de Chávez, después del triunfo electoral de 1998. En los casos de Ecuador y Bolivia, aunque el movimiento sindical fue importante para la llegada al poder de los nuevos gobiernos, su empuje frente a la gran presión de los movimientos sociales (indígenas, campesinos, y "ciudadanos") fue de importancia secundaria. En estos dos países la "crisis del sindicalismo" de las últimas tres décadas (fuerte represión de los gobiernos dictatoriales y masiva dislocación en la época neoliberal) ha hecho que las centrales sindicales perdieran mucha fuerza movilizadora y de presión política, llevándolos a vincularse a los partidos políticos de ambos gobiernos de modo individual en lugar de hacerlo bajo el criterio de una política organizada.

En los casos de Uruguay y Brasil, la larga tradición corporativista en el desarrollo industrial de ambos países, influyó en los fuertes rasgos institucionales que tenían las principales organizaciones sindicales. Los protagonistas más activos en la creación del PT en Brasil, eran sindicalistas de amplia trayectoria y creyeron necesario formar un partido político "independiente" y autónomo del gobierno para promover, después de la conquista electoral, políticas estatales pro-trabajadoras. En la formación del FA en Uruguay, el CNT (ahora PIT-CNT) fue un actor muy importante, pero el partido resultó ser una alianza de todos los sectores de la izquierda; la fuerza sindical no tuvo el rol dominante como lo hizo en Brasil. Por supuesto, en Uruguay, el hecho de que el movimiento sindical hubiera mantenido la idea de tener una central única, ayudó, destacadamente, a presionar al gobierno de Vázquez para que cumpliera sus promesas en materia laboral. A pesar del gran apoyo que la PIT-CNT le dio al gobierno, ésta se ha mantenido independiente, algo cuestionable en el caso de la CUT, en Brasil, que ha tenido una experiencia dolorosa con respecto a su relación con el gobierno de Lula.<sup>68</sup>

En Venezuela, el movimiento sindical, tras la victoria de Chávez,

---

68. Vale la pena anotar que muchos analistas del sindicalismo han hecho referencias sobre las experiencias tan parecidas de la CUT de Brasil y el COSATU de Suráfrica, con respecto a su trabajo para promover un nuevo gobierno de fuertes rasgos históricos (el PT y el ANC respectivamente) y sus numerosos problemas frente a estos gobiernos después de que alcanzaron el poder, sobre todo con respecto a su "independencia" y las políticas de cooptación véase: (Bieler, Andreas, Ingemar Lindberg and Devan Pillay, 2008).

ha pasado por dos momentos. El primero implica una dura lectura política: todas las prácticas y estructuras que la habían fortalecido durante los 40 años de puntofijismo se derrumbaron en vista del surgimiento de un nuevo régimen con una nueva institucionalidad y enfocado en la gran masa de trabajadores informales y no-organizados. Pero con el tiempo las prácticas de exclusión, que antes formaban parte de los hechos diarios de la CTV, fueron desapareciendo. Al mismo tiempo, con la creación de la UNT y las grandes manifestaciones de apoyo al gobierno por parte de los sectores “informales” de Venezuela, el sindicalismo se ha ido transformando. Pero es una reconfiguración apenas en gestación. Todavía, no hay una clara dirección del sindicalismo venezolano: si está con Chávez, ¿hasta qué punto?; si no lo está, ¿qué camino se elegirá?

En conclusión, la experiencia de los últimos años de los gobiernos latinoamericanos con trayectorias políticas distintas de las asociadas con el autoritarismo y el neoliberalismo, han sido muy positivas, aunque no se haya dado grandes transformaciones estructurales. De manera muy heterogénea, han progresado en políticas reivindicatorias para las clases populares y de las y los trabajadores. No se ha avanzado en el papel que correspondería a los gobiernos poscapitalistas o de ultraizquierda, como muchos esperarían que pasará: sigue intacto, en todos los casos –con la excepción aún ambivalente de Venezuela–, el rumbo del sistema capitalista; pero al menos han demostrado la falacia de las palabras de la “dama de hierro” británica, Margaret Thatcher: *there is no alternative* (“no hay alternativa”) al capitalismo individual, salvaje y con un Estado mínimo. Las alternativas sí existen, y el avance de los partidos rosados/progresistas y hasta izquierdistas, son el primer gran paso para poderlas apreciar.



## BIBLIOGRAFÍA

- Alcántara, Manuel Sáez, (2008) “La escala de la izquierda: La ubicación ideológica de presidentes y partidos de izquierda en América Latina.” *Nueva Sociedad* (217): 72-85.
- Alvarez, Angel E., (2003) “State Reform Before and After Chávez’s Election,” in Steve Ellner and Daniel Hellinger (eds.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization & Conflict*. USA: Lynne Rienner.
- Arocena, Rodrigo, (2005) “Uruguay en la nueva ola de las izquierdas latinoamericanas”, *Nueva Sociedad* (197): 149-158.
- Bergamino, Ariel, (2005) “Uruguay en la hora del cambio: entre la esperanza y la exigencia”, *Nueva Sociedad* (195): 18-24.
- Bieler, Andreas, Ingemar Lindberg and Devan Pillay, (2008) *Labour & the Challenges of Globalization: What Prospects for Transnational Solidarity?* London: Pluto Books.
- Boersner, Demetrio, (2005) “Gobiernos de izquierda en América Latina: tendencias y experiencias”, *Nueva Sociedad* (197): 100-113.
- Boron, Atilio, (1979) “New forms of capitalist state in Latin America: an exploration”, *Race & Class* 20 (3): 263-276.
- Boron, Atilio, (2004) *Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Boron, Atilio, (2005) “After the Sacking: Latin American Capitalism at the Beginning of the XXI Century,” pp. 145-175, en: Atilio A. Boron and Gladys Lechini (eds.), *Politics and Social Movements in an Hegemonic World: Lessons from Africa, Asia and Latin America*. Buenos Aires: CLACSO.
- Buono, Richard A. Dello and Jose Bell Lara, (2006) “Introduction: Neoliberal Crises and the Resurgent Left in Latin America”, *Critical Sociology* 32 (1): 9-15.

- Burchardt, Hans-Jürgen, (2006) *Tiempos de Cambio: Repensar América Latina*. El Salvador: Fundación Heinrich Böll.
- Coronil, Fernando, (2007) "El estado de América Latina y sus Estados: Siete piezas para un rompecabezas por armar en tiempos de izquierda", *Nueva Sociedad* (210): 203-215.
- Cross, John, (2000) "Street vendors, modernity and postmodernity: conflict and compromise in the global economy", *International Journal of Sociology and Social Policy* 20 (1-2): 30-51.
- Cueva, Agustín, (1986) *El Desarrollo del Capitalismo en América Latina*. México, España, Argentina, Colombia: Siglo Veintiuno Editores.
- Davies, Ioan and Shakuntala de Miranda, (1967) "The Working Class in Latin America: Some Theoretical Problems," pp. 239-256 in Ralph Miliband and John Saville (eds.), *The Socialist Register 1967*. London: The Merlin Press.
- Davis, Mike, (2004) "Planet of slums: Urban involution and the informal proletariat", *New Left Review* (26): 5-34.
- Davis, Mike, (2006) *Planet of Slums*. New York: Verso.
- De la Torre, Cristina, (2005) *Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia*. Medellín: La Carreta Editores E.U.
- De Oliveira, Francisco, (2006) "Lula in the labyrinth", *New Left Review* (42): 5-22.
- De Soto, Hernando, (1994) *El Otro Sendero: La Revolución Informal*. Bogotá: Tercer Mundo Ediciones.
- De Soto, Hernando, (2000) *The Mystery of Capital*. New York: Basic Books.
- Dunkerley, James and Rolando Morales, (1986) "The crisis in Bolivia", *New Left Review* (1) 155: 86-106.
- ECLAC, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, (2006) *Social Panorama of Latin America 2005*. Santiago: United Nations.
- Eliás, Antonio, (2008) "Uruguay: un gobierno en disputa," pp. 105-146 in Beatriz Stolorowicz (ed.), *Gobiernos de Izquierda en América Latina*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Ellner, Steve, (2003) "Organized labor and the challenge of Chavismo", pp.161-178, en Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization & Conflict*. USA: Lynne Rienner
- Erimida, Oscar Uriarte, (2009) "La política laboral de los gobiernos progresistas, el posneoliberalismo y el movimiento sindical," pp. 36-55, *Movimiento Sindical-Gobiernos Progresistas: Un primer balance en la región*. Uruguay: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Figuroa, Victor M., (2006) "The Bolivarian Government of Hugo Chávez: Democratic Alternative for Latin America?", *Critical Sociology* 32 (1): 187-211.
- Flynn, Matthew, (2007) "Between Subimperialism and Globalization: A Case Study in the Internationalization of Brazilian Capital", *Latin American Perspectives* 34 (6): 9-27.
- Fridell, Gavin, (2006) "Fair Trade and Neoliberalism: Assessing Emerging Perspectives", *Latin American Perspectives* 33 (6): 8-28.

- Friedman, Thomas, (2005) *The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Fuentes, Francisc, (2009) "Venezuela: class struggles heats up over battle for workers' control", *Relay: A Socialist Project Review* (27): 27-28.
- Fukuyama, Francis, (1992) *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- Galeano, Eduardo, (1971) *Las Venas Abiertas de América Latina*. México: Siglo XXI.
- Gallardo, Helio, (2007) "Bolivia: una experiencia de izquierda alternativa", *Pasos* (129).
- García, Álvaro Linera, (2006) "El evismo: lo nacional-popular en acción", en: *Revista Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, (19), enero-abril.
- García-Guadilla, María Pilar, (2007) "El poder popular y la democracia participativa en Venezuela: los concejos comunales", *XXVII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA)*. Montreal.
- Garretón, Miguel Antonio, (1997) "Revisando las transiciones democráticas en América Latina", *Nueva Sociedad* (148): 20-31.
- Gereffi, Gary and Miguel Korzeniewicz, (1994) *Commodity Chains & Global Capitalism*. Westport, CT: Praeger.
- Goldfrank, Benjamin, (2007) "¿De la ciudad a la nación? La democracia participativa y la izquierda latinoamericana", *Nueva Sociedad* (212): 53-66.
- González, Jorge Iván, (2003) "No hay falacia neoliberal," pp. 85-106 in Darío I. Botero Restrepo (ed.), *La Falacia Neoliberal: Crítica y Alternativas*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- González, Diego J. Cruz, (2009) "Venezuela ante la baja de los precios del petróleo", *Nueva Sociedad* (221): 4-13.
- Gramsci, Antonio, (1971) *Selections from the Prison Notebooks*, Editado y traducido por Qu. Hoare and G. N. Smith. London: Lawrence y Wishart.
- Grebe-López, Horst, (2009) "Estado y mercado en Bolivia: una relación pendular", *Nueva Sociedad* (221): 137-150.
- Grimson, Alejandro, (2008) "Prefacio," pp. 5-11 in Alejandro Portes, Bryan Roberts and Alejandro Grimson (eds.), *Ciudades Latinoamericanas: Un Análisis Comparativo en el Umbral del Nuevo Siglo*. Buenos Aires: Universidad Autónoma de Zacatecas.
- Gómez, Alfredo, (2008) *La Reconstrucción de Colombia: escritos políticos*. Medellín: La Carreta Editores E.U.
- González, Jorge Iván, (2003) "No hay falacia neoliberal," pp. 85-106 in Darío I. Botero Restrepo (ed.), *La Falacia Neoliberal: Crítica y Alternativas*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Gwynne, Robert N. and Christóbal Kay, (2000) "Views from the periphery: futures of neoliberalism in Latin America", *Third World Quarterly* 21 (1): 141-156.
- Harmes, Adam, (2006) "Neoliberalism and multilevel governance", *Review of International Political Economy* 13 (5): 725-749.
- Harris, Richard L., (2003) "Globalization and Development in Latin America: Economic Integration, Health, Labor and Popular Mobilization", *Journal of Developing Societies* 19 (2-3): 90-113.

- Hawkins, Daniel, (2008) "Colombia: compromise or containment? National state transformation and the formulation of nationhood", en: *One World Perspectives, Working Papers*, Germany: HBS y Promotionskolleg Global Social Policies & Governance
- Hawkins, Kirk and David Hansen, (2006) "Dependent Society: The Círculos Bolivarianos in Venezuela", *Latin American Research Review* 41 (1).
- Hellinger, Daniel, (2003) "Political Overview: The Breakdown of Puntofijismo and the Rise of Chavismo," pp. 27-54 in Steve Ellner and Daniel Hellinger (eds.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization & Conflict*. USA: Lynne Rienner.
- Hira, Anil, (2007) "Did ISI fail and is neoliberalism the answer for Latin America? Re-assessing common wisdom regarding economic policies in the region." *Revista de Economía Política* 27 (3): 345-356.
- Hobsbawm, Eric, (1996) "Identity politics and the Left", *New Left Review* 1 (217): 38-47.
- Hoogvelt, Ankie, (1997) *Globalization & the Postcolonial World: A New Political Economy of Development*. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press.
- Hylton, Forrest, (2006) "The landslide in Bolivia: An introduction to Álvaro García Linera", *New Left Review* 37: 69-72.
- ILO, International Labour Office, (2009) *Global Wage Report 2008-09. Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence*. Geneva: International Labour Office.
- Invernizzi, Noela, (2006) "Disciplining the Workforce: Controlling Workers in the Restructuring of Production", *Latin American Perspectives* 33 (3): 89-110.
- Kay, Cristóbal, (2009) "La persistencia de la pobreza rural en Honduras, Nicaragua y Bolivia: un fracaso del neoliberalismo", *Nueva Sociedad* (223): 94-112.
- Koehler, Cristine Zanella, Pâmela Marques / Marconatto and Ricardo Antônio Seitenfus Silva, (2007) "Bolivia en el péndulo de la historia", *Nueva Sociedad* (209): 130-141.
- Laclau, Ernesto, (2006) "La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana", *Nueva Sociedad* (205): 56-61.
- Lander, Edgardo, (2008) "Venezuela: logros y tensiones en los primeros ocho años del proceso de cambio," pp. 39-75 in Beatriz Stolowicz (ed.), *Gobiernos de Izquierda en América Latina: Un Balance Político*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Lanzaro, Jorge, (2008) "La socialdemocracia criolla", *Nueva Sociedad* (217): 40-58.
- Lebowitz, Michael A., (2006) "Going beyond Socialism: making the Social Economy a real alternative," *The Bulletin: Socialist Project*.
- Lenin, V.I.U, (2008) *Lenin: Revolution, Democracy, Socialism: Selected Writings* London: Pluto Press.
- Leys, Colin, (1996) *The Rise & Fall of Development Theory*. Oxford/Bloomington/Nairobi: James Currey, EAEP, Indiana University Press.
- López, Margarita Maya, (2003) "Hugo Chávez Frías: His Movement and His Presidency," pp. 73-91 in Steve Ellner and Daniel Hellinger (eds.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization & Conflict*. USA: Lynne Rienner.

- Lowy, Michael, (2003) "The Long March of Brazil's Labor Party", *Logos Journal* (2.2).
- Lozano, Wilfredo, (2005) "La izquierda latinoamericana en el poder", *Nueva Sociedad* (197): 129-145.
- Martín-Mayoral, Fernando, (2009) "Estado y mercado en la historia de Ecuador: Desde los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa", *Nueva Sociedad* (222): 120-136.
- McCaughan, Michael, (2004) *The Battle of Venezuela*. London: Latin American Bureau.
- Minteguiga, Analía and Franklin Gallegos Ramírez, (2007) "El nuevo tiempo del Estado: La política posneoliberal del correísmo", *Observatorio Social de América Latina* VIII (22).
- Mires, Fernando, (1989) "¿Existe el sector informal?", *Revista Foro* 9: 47-57.
- Moldiz, Hugo Mercado, (2008) "Bolivia: crisis estatal y proceso de transformación," pp. 155-196 in Beatriz Stolowicz (ed.), *Gobiernos de Izquierda en América Latina: Un Balance Político*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Mollo, Maria de Lourdes Rollemberg and Alfredo Saad-Filho, (2006) "Neoliberal economic policies in Brazil (1994-2005): Cardoso, Lula and the need for a democratic alternative", *New Political Economy* 11 (1): 99-123.
- Moreira, Maria Helena Alves, (1988) "Dilemmas of the consolidation of Democracy from the Top in Brazil: A Political Analysis", *Latin American Perspectives* 15 (3): 47-63.
- Munck, Ronaldo, (2003) "Neoliberalism, necessitarianism and alternatives in Latin America: there is no alternative (TINA)?", *Third World Quarterly* 24 (3): 495-511.
- Naím, Moisés, (2002) "Saving Latin America", *Foreign Policy*.
- Nina, Esteban, (2007) "Balance del primer año del gobierno de Evo Morales", *Nueva Gaceta* (13).
- O'Campo, José Antonio, Carmen Astrid Romero Baquero and María Ángela Parra, (2007) "La Búsqueda, larga e Inconclusa, de un Nuevo Modelo (1981-2006)," pp. 348-418 in José Antonio Ocampo Gaviria (ed.), *Historia Económica de Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta/Fedesarrollo.
- O'Donnell, Guillermo, (1988) *Bureaucratic Authoritarianism: Argentina, 1966-1973, in Comparative Perspective*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
- Ondetti, Gabriel, (2007) "An Ambivalent Legacy: Cardoso and Land Reform", *Latin American Perspectives* 34: 9-25.
- Ospina, Pablo Peralt, (2008) "Ecuador: entresijos de una encrucijada", *Nueva Sociedad* (213): 4-16.
- Paiva, Paulo, (2006) "Lula's Political Economy: Changes and Challenges", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 606 (1): 196-215.
- Palacios, Marco, (2001) *De Populistas, Mandarines y Violencias: Luchas por el Poder*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana.

- Panizza, F., (2008) "La marea rosa," pp. 15-33 in Manuel Sáez Alcántara and Fátima Díez García (eds.), *Elecciones y política en América Latina*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Paramio, Ludolfo, (2006) "Giro a la izquierda y regreso del populismo", *Nueva Sociedad* (205): 62-74.
- Patroni, Viviana, (2008) "Economic Restructuring, Neoliberalism, and the Working Class," pp. 96-117 in Richard Harris and Jorge Nef (eds.), *Capital, Power & Inequality in Latin America & The Caribbean*. UK: Rowman & Littlefield.
- Paz, Juan J. and Miño Cepeda, (2009) "El Gobierno de Rafael Correa: Un nuevo ciclo en la historia de Ecuador", *Metapolítica* 13 (65): 71-76.
- Penfold-Becerra, Michael, (2007) "Clientelism and Social Funds: Evidence from Chavez's Misiones", *Latin American Politics & Society* 49 (4): 63-84.
- Petras, James and Henry Veltmeyer, (2006) *Imperio con Imperialismo: La dinámica globalizante del capitalismo neoliberal*. México: Siglo XXI.
- Petras, James, (2009) "Latin America's Twenty-First Century Socialism in Historical Perspective", *Global Research*, 12 de octubre.
- Petras, James and Henry Veltmeyer, (2003) *Cardoso's Brazil: A Land for Sale*. Lanham/ London: Rowman & Littlefield.
- Podur, Justin, (2008) "Bolivia's elites seek a media coup," *The Bullet: Socialist Project*.
- Portes, Alejandro, (2004) *El Desarrollo Futuro de América Latina: Neoliberalismo, clases sociales y transnacionalismo*. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
- Portes, Alejandro and Kelly Hoffman, (2003) "Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Neoliberal Era", *Latin American Research Review* 38 (1): 41-82.
- Portes, Alejandro and Bryan R. Roberts, (2008) "La ciudad bajo el libre mercado: La urbanización en América Latina durante los años del experimento neoliberal," pp. 13-59 in Alejandro Portes, Bryan Roberts and Alejandro Grimson (eds.), *Ciudades Latinoamericanas: Un Análisis Comparativo en el Umbral del Nuevo Siglo*. Buenos Aires: Universidad Autónoma de Zapatecas.
- Puello-Socarrás, José Francisco, (2007) "Gramática del Neoliberalismo: Genealogía y claves para su desciframiento", *Economía, Gestión, Desarrollo* (5): 177-204.
- Radermacher, Reiner and Waldeli Melleiro, (2007) "El sindicalismo bajo el gobierno de Lula," pp. 1-21, *Análisis y Propuestas*. Montevideo: Friedrich Ebert Stiftung.
- Rakowski, Cathy A., (1994) "The Informal Sector Debate, Part 2: 1984-1993," pp. 31-50 in Cathy A. Rakowski (ed.), *Contrapunto: The Informal Sector Debate in Latin America*. New York: State University of New York Press.
- Ramírez, Franklin Gallegos, (2006) "Mucho más que dos izquierdas", *Nueva Sociedad* (205): 30-44.
- Reid, Michael, (2007) *Forgotten Continent: The Battle for Latin America's Soul*. London and New Haven: Yale University Press.

- Riesco, Manuel, (2007) "Is Pinochet Dead?" *New Left Review* II (47): 5-20.
- Roberts, Kenneth, (2003) "Social Polarization and the Populist Resurgence in Venezuela," pp. 55-72 in Steve Ellner and Daniel Hellinger (eds.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization & Conflict*. USA: Lynne Rienner.
- Roberts, Susan, Anna Secor and Matthew Sparke, (2003) "Neoliberal Geopolitics", *Antipode* 35 (5): 886-897.
- Rodas, Germán Chaves, (2008) "El Caso Ecuatoriano," pp. 197- 225 in Beatriz Stolorowicz (ed.), *Gobiernos de Izquierda en América Latina: Un Balance Político*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Sader, Emir, (1987) "The Worker's Party in Brazil", *New Left Review* 1 (165): 93-102.
- Sader, Emir, (1997) *O Poder, Cadê O Poder? Ensaios Para Uma Nova Esquerda*. Sao Paulo: Boitempo Editorial.
- Sader, Emir, (2005) "Taking Lula's measure", *New Left Review* (33): 59-80.
- Sader, Emir, (2009) "El Enigma Lula: La difícil caracterización de su gobierno", *Metapolítica* 13 (65): 26-33.
- Saldarriaga, José Fernando Montoya, (2008) "El Difícil Proceso de Construcción de Ciudadanía en América Latina y Su Relación con los Nuevos Populismos", *Ratio Juris: Publicación de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma Latinoamericana* (7): 43-53.
- Sallum, Brasilio Jr., (2008) "La especificidad del gobierno de Lula: Hegemonía liberal, desarrollismo y populismo", *Nueva Sociedad* (217): 155-171.
- Santos, Theotonio dos, (1996) "The Structure of Dependence," pp. 165-175 in C. Roe. Goddard, Passé-Smith, John T., Conklin, John G (ed.), *International Political Economy: State-Market Relations in a Changing Global Order*. Boulder: Lynne Rienner
- Sigmund, Paul, (1990) *Liberation Theology at the Crossroads*. New York y Oxford: Oxford University Press.
- Stolorowicz, Beatriz, (2008) "Presentación," pp. 11-18 in Beatriz Stolorowicz (ed.), *Gobiernos de Izquierda en América Latina: Un Balance Político*. Bogotá: Editores Aurora.
- Suárez, Hugo José, (2005) "El nacimiento de una nueva izquierda," in Bernard Duterme (ed.), *Movimientos y Poderes de Izquierda en América Latina*. España: Editorial Popular.
- Sylvia, Ronald D. and Constantine P. Danopoulos, (2003) "The Chávez phenomenon: political change in Venezuela", *Third World Quarterly* 24 (1): 63-76.
- Tavares de Almeida, Maria Hermínia, (2003) "Los desafíos de la reforma social en Brasil: Continuando con el cambio", *Nueva Sociedad* (187): 101-113.
- Touraine, Alain, (2006) "Entre Bachelet y Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?", *Nueva Sociedad* (207): 46-55
- Urioste, Miguel F, (2009) "La 'revolución agraria' de Evo Morales: desafíos de un proceso complejo", *Nueva Sociedad* (223): 113-127.
- Vernengo, Matías, (2007) "Fiscal Squeeze and Social Policy during the Cardoso Administration (1995-2002)", *Latin American Perspectives* 34: 81-91.

- Wexell, Luciano Severo, (2006) "In Venezuela, Oil Sows Emancipation," *Rebelión*, <http://venezuelaanalysis.com/analysis/1666>.
- Weyland, Kurt, (2003) "Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: how much affinity?" *Third World Quarterly* 24 (6): 1095-1115.
- Wright, Angus, (2007) "Cardoso's Brazil: A sellout?" *Latin American Perspectives* (34) 5: 165-166.
- Waksman, Guillermo, (1997) "Uruguay. La izquierda avanza hacia el gobierno", *Nueva Sociedad* (148): 12-19.
- Xalma, Cristina, (2004) "Hugo Chávez y Venezuela: ¿Por qué tanta controversia?," *Indymedia*. Barcelona: Indymedia.
- Young, Allen, (1966) "Bolivia", *New Left Review* 1 (39): 66-68.
- Zalles, Alberto A., (2008) "Bolivia: hundimiento de la Asamblea Constituyente y naufragio del proyecto de Constitución", *Iconos. Revista de Ciencias Sociales* (32): 145-153.
- Žižek, Slavoj, (2009) "How to begin from the beginning", *New Left Review* 57: 43-55.

## Artículos de prensa

### Semana

- "Lula, en problemas", *Semana*, Online, 3 de marzo de 2003, Mundo, [www.semana.com](http://www.semana.com).
- "Socialismo o muerte", *Semana*, Online, 13 de enero de 2007, Venezuela, [www.semana.com](http://www.semana.com).
- "Banco del Sur abrirá con 10 mil millones de dólares en capital", *Semana*, Online, 24 de marzo de 2009, Macroeconomía, [www.semana.com](http://www.semana.com).
- "Podemos descolonizar nuestras mentalidades", *Semana*, Online, 28 de agosto de 2009, Relaciones exteriores, [www.semana.com](http://www.semana.com).

### El Espectador

- "Ex guerrillero José Mujica gana las elecciones en Uruguay", *El Espectador*, Online, 29 de noviembre de 2009, Mundo, [www.elespectador.com](http://www.elespectador.com).

### El Tiempo

- "Facultades para legislar por decreto durante 18 meses recibe el presidente Hugo Chávez", *El Tiempo*, Online, 18 de enero de 2007, Venezuela, [www.eltiempo.com](http://www.eltiempo.com).
- "Empresa de petróleos de Venezuela Pdvsa suspende relaciones comerciales con ExxonMobil", *El Tiempo*, Online, 12 de febrero de 2008, Venezuela, [www.eltiempo.com](http://www.eltiempo.com).

### El Diario

- "Gobierno crea nuevo ministerio de Relaciones Laborales", *El Diario*, Online, 13 de agosto de 2009, Nacional, [www.eldiario.com.ec/noticias-manabiecuador/129323-gobierno-crea-nuevo-ministerio-de-relaciones-laborales/](http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabiecuador/129323-gobierno-crea-nuevo-ministerio-de-relaciones-laborales/)



